

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO



**Análisis jurídico dogmático del proceso inmediato para delitos en
flagrancia y su aplicación en el tercer juzgado de investigación
preparatoria y flagrancia de la provincia de Huaraz, periodo 2015-2016.**

Trabajo de investigación para obtener el título profesional de Abogado

Autor

Moreno Córdova, Doris Stefany

Asesor

Vargas Camiloaga, Gustavo Adolfo

Huaraz – Perú

2016

“Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no para todos, sino para los iguales. Se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para los desiguales”

Aristóteles.

DEDICATORIA

A Dios por todas sus bendiciones.

A mis padres por el enorme apoyo que me brindaron, fueron el factor principal para hacer de mí una buena estudiante y profesional con todo mi amor para ellos, para mis hermanos.

INDICE DE ANEXOS

ANEXO N° 01: Ley Penal Tributaria. Decreto Legislativo N° 813.....	90
ANEXO N° 02: Matriz de Consistencia.....	91
ANEXO N° 03: Recurso de Nulidad N° 003442-2011. Corte Suprema de Justicia de la Republica. Sala Penal Transitoria- Ucayali.....	94
ANEXO N° 04: Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.....	95
ANEXO N° 05: Jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal.....	98

PALABRAS CLAVE

TEMA	Proceso Inmediato
ESPECIALIDAD	Derecho Procesal Penal

KEYWORDS

TOPIC	Immediate process
SPECIALTY	Criminal Procedural Law

Línea de Investigación:

- Derecho

**ANÁLISIS JURÍDICO DOGMÁTICO DEL
PROCESO INMEDIATO PARA DELITOS EN
FLAGRANCIA EN EL CONTEXTO DEL
DECRETO LEGISLATIVO 1194, PERIODO 2015-
2016**

ÍNDICE

Dedicatoria	iii
Palabras Clave	v
Título del Trabajo.....	vi
Índice	vii
Resumen.....	viii
Abstract.....	ix
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	
1.1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA	11
1.1.1. Antecedentes.....	12
1.1.2. Fundamentación Científica.....	17
1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	21
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	23
1.4. MARCO REFERENCIAL.....	24
1.5. HIPÓTESIS.....	58
1.6. OBJETIVOS.....	59
1.6.1. Objetivos Generales.....	59
1.6.2. Objetivos Específicos.....	59
CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS	
2.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	
2.1.1. Tipo y diseño de la Investigación.....	61
2.1.2. Población y muestra.....	65
2.1.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación.....	66
2.2. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN.....	67
CAPÍTULO III: RESULTADOS.....	69
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN.....	80
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	88
CAPÍTULO VI: AGRADECIMIENTO.....	93
CAPÍTULO VII: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	95
CAPÍTULO VIII: ANEXOS.....	99

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar los alcances jurídicos dogmáticos de la nueva regulación del proceso inmediato para delitos en flagrancia en el contexto del Decreto Legislativo 1194. El proceso inmediato se explana dentro de la doctrina procesal como el proceso especial que amerita el abreviamento del proceso, al no desarrollarse las fases de investigación preparatoria e intermedia; siendo el Fiscal quien solicite el trámite del mismo en caso se configure tanto la flagrancia del delito, la confesión del mismo por parte del agente, o la evidencia de comisión del delito dentro de las fases investigatorias.

Se trata de un estudio jurídico dogmático, cuyo tipo de diseño general corresponde al denominado diseño transversal, causal explicativo, no experimental, debido a que careció de manipulación intencional de la variable independiente, además no se contó grupo control ni experimental. Entre los métodos empleados tenemos al exegético, hermenéutico, argumentación jurídica,. La información obtenida fue contrastada con el marco teórico, de donde se extrajeron los puntos problemáticos, discusión, y las conclusiones.

La investigación ha podido concluir en lo siguiente: Este tipo de procesos lo que busca es, entre otras cosas, asegurar la eficacia y la celeridad de los procesos penales en caso de aquellos infractores de la ley penal que hayan sido capturados por la Policía Nacional, a efectos de que no se acumulen procesos y con ello se agrave la sobrecarga procesal en los distritos judiciales del país

ABSTRACT:

This research has as main objective to analyze the dogmatic legal scope of the new regulation immediate process for crimes in flagrante delicto in the context of Legislative Decree 1194. The immediate process dozing within the procedural doctrine as the special process that deserves the shortening the process to not develop the preparatory and intermediate phases of research; Fiscal being the applicant for the same procedure if both flagrante delicto crime, confession of it by the agent, or evidence of the offense within the investigatory stage is set.

This is a dogmatic law firm, whose type corresponds to the overall design called transverse, causal explanation, no experimental design, because they lacked intentional manipulation of the independent variable, besides not control or experimental group was counted. Among the employees we have to exegetical method, hermeneutical, legal argument ,. The information obtained was contrasted with the theoretical framework, where the hot spots, discussion, and conclusions were drawn.

The investigation has been concluded as follows: This type of process you are looking for, among other things, ensure the efficiency and speed of criminal proceedings in the case of those offenders of criminal law which have been taken by the National Police, to the effect that no processes accumulate and thereby aggravates the procedural overload in the judicial districts of the country

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN.-

1.1. Antecedentes y Fundamentación del Problema.-

1.1.1. Antecedentes.-

1.1.1.1. Antecedentes Internacionales.-

De la búsqueda en las bibliotecas virtuales de las universidades públicas y privadas de los países latinoamericanos y de España, por medio del internet, se ha encontrado las siguientes tesis o reportes de investigación que guardan relación con las variables de estudio de nuestro trabajo de investigación.

a) **Hernández Barros, Julio A. (2013)¹**. En la investigación: **“Aprehensión, detención y flagrancia”**. Obra que tiene por objeto brindar los alcances elementales sobre la aprehensión, detención y flagrancia, así como abordar los casos en que el Ministerio Público está autorizado constitucionalmente para acometer una investigación previa con detenido, no está por demás aclarar que legalmente, la libertad personal puede restringirse, entre otros, por cualquiera de estos motivos: por arresto, detención, detención provisional con fines de extradición, aprehensión, prisión preventiva y la privación de la libertad como consecuencia de una condena.

Resumen:

El desarrollo de este libro abordar los casos en que el Ministerio Público está autorizado constitucionalmente para acometer una investigación previa con detenido, no está por demás aclarar que legalmente, la libertad personal puede restringirse, entre otros, por cualquiera de estos motivos: por arresto, detención, detención provisional con fines de extradición, aprehensión, prisión preventiva y la privación de la libertad como consecuencia de una condena. Cada uno de estos casos permite que el detenido guarde una peculiar situación jurídica con características propias que pueden deberse a las condiciones de procedencia, a las personas en quienes se deposita la facultad de restringir la libertad; a las normas que los rigen o a los efectos que producen.

¹ Hernández Barros, Julio A. “Aprehensión, detención y flagrancia”. Lima: Ediciones Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; 2013.p .1769. www.juridicas.unam.mx.

Así, el arresto puede decretarlo una autoridad administrativa como sanción por infracciones a los reglamentos de policía y buen gobierno, limitado a un máximo de treinta y seis horas por mandato del artículo 21, constitucional.

Conclusión:

Con la flagrancia, debe tenerse presente que aparte de las formas que adopta la ley para tratar de proteger el valor libertario de los individuos, como el relativo al límite de tiempo que imperativamente otorga al Ministerio Público para que instruya y resuelva la averiguación previa; el desproveer de valor a la confesión cuando la detención ha excedido esos plazos y el calificar en su momento como ilegal la detención ministerial hecha fuera del marco constitucional y legal, ordenando en consecuencia que se ponga en libertad al indiciado, también declara inmersa en la ley penal la conducta de quien excediendo los plazos de la detención o realizando ésta fuera del marco normativo, priva de la libertad a una persona.

Junto a la flagrancia, la detención por caso urgente constituye la otra excepción Constitucional, a la regla general conforme a la cual nadie puede ser privado de la libertad, sino por orden escrita de la autoridad judicial competente. La excepción consiste en que tratándose de casos urgentes, el Ministerio Público podrá ordenar por escrito la detención de una persona, con la obligación de fundar y expresar los indicios que prueben la intervención del indiciado en un delito grave así calificado por la ley; que exista el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia; y que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante el juez a solicitar la orden de aprehensión.

b) Araya Vega, Alfredo G. (2016)². En la investigación: **El procedimiento expedito para delitos en flagrancia.** Obra en el que autor plantea que el procedimiento para los delitos en flagrancia emerge como un mecanismo para lograr una justicia conforme a un servicio público de calidad (justicia pronta y cumplida), donde se potencian las garantías a las partes de ser oídas y de acceso a la justicia sin detrimento de las garantías legales y procesales.

² Araya Vega, Alfredo G. (2016) . El procedimiento expedito para delitos en flagrancia. Lima: Ediciones Juristas Editores. ; 2016.p.33.

Resumen:

El sistema judicial de administración de justicia, en un Estado democrático de derecho, está dirigido a cumplir los principios constitucionales, solucionar el conflicto, combatir la morosidad judicial, dar sentido humano a la justicia, crear un juez activo y dinámico en la resolución del conflicto, fortalecer la función del abogado dentro de la sociedad y el sistema judicial, simplificar el proceso, dignificar la justicia, buscar la verdad real, sustituir la escritura por la oralidad, dar publicidad a los procesos, garantizar el ejercicio de las libertades democráticas, propiciar el respeto del pueblo en el sistema de administración de justicia, procurar la paz por encima de la contienda, generar mecanismos de diálogo, impulsar a celeridad procesa, permitir el acercamiento de las partes a su juez; es decir, se orienta a humanizar el proceso. Pretende una justicia más humana, destinada a la solución oportuna y adecuada del conflicto.

Conclusión:

Se logró una profundización de la concentración y participación de las partes afectadas por el conflicto, lo cual permitió una mayor rapidez en el desarrollo del procedimiento, el cual se agiliza por desformalización del proceso y la parcial despapelización.

Se mejoró la capacidad de respuesta del sistema penal a los conflictos de los ciudadanos y, en consecuencia, la imagen institucional del Poder Judicial, que ciertamente estaba deteriorada ante la opinión pública y los afectados por “soluciones” tardías, que en ocasiones no satisfacen las necesidades y expectativas de víctimas ni de victimarios.

Con el procedimiento expedito se resuelve en poco tiempo la situación jurídica del imputado, tanto de forma provisional (dictado de medidas cautelares, si corresponde) como del proceso en general (plazo máximo de quince días), y las partes escuchan en un lenguaje cercano los fundamentos judiciales de su resolución.

Sobre la víctima: se mejora sus derechos procesales, pues se le explican posibilidades, sus derechos y deberes, y se atienden de inmediato sus intereses (se recibe una mejor calidad de información, puede participar rápidamente en la solución alternativa del conflicto y es llamada a declarar en pocos días.)

1.1.1.2. Antecedentes Nacionales.-

De la búsqueda en las principales Universidades y Privadas del país, se hizo a través de la plataforma virtual del portal de cybertesis de la UNMSAM, repositorio digital de tesis de la PUCP, repositorio digital de tesis de la Universidad San Martín, en el cual se no se ha podido encontrar trabajos que guarden directa relación con las variables de estudio del presente trabajo de investigación. Por lo que solo nos limitamos a considerar como antecedentes al sistema normativo constitucional y sustantivo penal peruano.

a. Araya Vega, Alfredo G. (2016)³. En la investigación: **Nuevo Proceso inmediato para delitos en flagrancia.** Obra en el que autor plantea la posibilidad – necesidad de contribuir en la lucha contra la inseguridad ciudadana, con instrumentos políticos criminales de orden eficaz y eficiente.

Resumen:

El desarrollo de este libro resalta la rápida reacción del Estado frente a la comisión de hechos comisivos diversos y que marcan pautas de intervención rápida y de pronto enjuiciamiento criminal sobre la base de la utilización de los procesos inmediatos – como formas especiales de procesamiento penal-, para diversos supuestos habilitadores de la intervención penal del Estado, como son: i) cuando el imputado ha sido detenido en flagrancia, ii) cuando el imputado ha adoptado por la confesión sincera, iii) cuando existen abundantes elementos de convicción luego de terminadas las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado; y, iv) para los casos de omisión de asistencia familiar y conducción ética; todo ello conforme con el nuevo marco normativo del Decreto Legislativo 1194 del 29 de agosto de 2015- que modificó los artículos 446 y ss. del NCPP de 2004. Reforma procesal penal que fue producto tanto de propuestas combinadas entre lo teórico y la legislación comparada, como la propuesta en 2015 por el propio autor en una publicación reciente [ARAYA VEGA, A.; El delito en flagrancia. Análisis y propuestas de un nuevo procedimiento especial. Lima: Ideas, 2015].

³ Araya Vega, Alfredo G. (2016) . El procedimiento expedito para delitos en flagrancia. Lima: Ediciones Juristas Editores. ; 2016.p.177.

En esta medida, es claro que el valor político criminal que se privilegia con estas modificaciones operadas en nuestra legislación – y de las que el profesor Alfredo Ayala tiene cierto nivel de feliz responsabilidad-, es el de la seguridad ciudadana.

Conclusión:

El procedimiento expedito para delitos en flagrancia es una de las herramientas es una de las herramientas más eficaces para la atención célere de las causas penales. Constituye el proyecto pionero que busca materializar los principios que rige la justicia democrática.

El procedimiento para los delitos en flagrancia emerge como un mecanismo para lograr una justicia conforme a un servicio público de calidad (justicia pronta y cumplida), donde se potencian las garantías de todas las partes de ser oída y de acceso a la justicia, sin detrimento de las garantías legales y procesales.

b. Céspedes (2014). En la investigación: “El criterio de oportunidad en el proceso inmediato”.

Considera que: si es posible la aplicación de un criterio de oportunidad en los procesos inmediatos, lo contrario sería vulnerar el principio el principio de economía procesal y por sobre todo el principio de igualdad ante la ley, todo ello en una interpretación extensiva “favor rei” del pleno jurisdiccional 6-2010 del 16 de noviembre de 2010 y del acuerdo plenario 5-2008 (5-2009) sobre terminación anticipada. Concluye que: si es posible la aplicación de un criterio de oportunidad en el proceso inmediato siempre cuando no se esté ante las causales de improcedencia que prevé el numeral 9 del Art. 2 del CPP, a pesar que existe auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, bajo los principios de igualdad ante la ley, celeridad y economía procesal, principio de favorabilidad (pro homine) e inclusive bajo la luz de la justicia restaurativa, por descarga procesal y por la mínima intervención del derecho penal en asuntos donde la pena resulte innecesaria y así poder destinar esos ambientes judiciales a otros procesos que si requieren mayor atención y en la práctica. El que escribe ya hice un caso de esta naturaleza y a raíz de esa experiencia es que nace el presente artículo conforme se puede apreciar del anexo adjunto a la presente. Los que no comparten esta tesis de seguro dirán que una vez emitido el auto de enjuiciamiento es

jurídicamente imposible realizar dicha diligencia porque se estaría vulnerando la forma del nuevo proceso penal y la respuesta es clara “lo mismo, para llegar a lo mismo” hay que ser razonables.

- c. Vázquez (2012). “Los problemas y las soluciones al proceso inmediato en el acuerdo plenario 6-2010/cj-116”. Sostiene que: El Proceso Inmediato es un proceso especial regulado por el Código Procesal Penal de reciente vigencia en varios distritos judiciales del país y todavía en proceso de implementación respecto a la capital de nuestro país, donde se concentra el mayor volumen de carga procesal. Este proceso especial a pesar de su diseño enfocado a darle celeridad al modelo, aun no es muy utilizado, siendo el preferido por ahora el proceso de Terminación Anticipada en contra posición del proceso común. Es por ello que consideramos importante resaltar las bondades del proceso inmediato, que bien utilizado, puede convertirse en una herramienta sumamente útil para erradicar la sobre carga procesal. El proceso inmediato a pesar de tener una regulación muy breve, dan pie a un análisis detallado orientado a su aplicación práctica, para ello usaremos las herramientas de la lógica formal. Concluye que: Como primera conclusión se puede afirmar que el Acuerdo Plenario ha definido claramente la diferencia entre proceso inmediato y acusación directa, aclarando que el primero es un proceso especial y el segundo no es otra cosa que un mecanismo de simplificación del proceso común. Respecto a la procedencia del requerimiento de proceso inmediato, se ha visto que los presupuestos de Confesión del Delito y el de la existencia de Evidentes Elementos de Convicción, previo interrogatorio al imputado no son acumulables, siendo más bien excluyentes entre sí. Respecto a la procedencia del requerimiento de proceso inmediato, en cuanto al presupuesto de Confesión del Delito, este requiere la no oposición del imputado y además no permite la presentación de prueba por parte de él. La aplicación del Proceso Inmediato requiere de la existencia de potencial Suficiencia Probatoria respecto a los hechos atribuidos y a la no oposición por parte del imputado como regla general, en este último caso si existiera oposición, ella debe ser acreditada mediante evidencia o indicios que se propondrán en el traslado del requerimiento de Proceso Inmediato.

1.1.1.3. Antecedentes Locales.-

Luego de la visita y revisión de los catálogos de trabajos de investigación en las bibliotecas de las universidades de la localidad. Por lo que en nuestro medio hemos no se han encontrado trabajos de investigación científica (tesis, monografías, ensayos y artículos) relacionadas con las variables de estudio, objeto de estudio del presente trabajo.

1.1.2. Fundamentación Científica.-

La realidad problemática que dio inicio a esta investigación, surge luego de analizar las situaciones problemáticas que enfrenta nuestra sociedad, dado el crecimiento sostenido de la criminalidad a nivel cualitativo y cuantitativo. La principal manifestación la encontramos en los delitos llamados tradicionales, por cuanto afectan de manera significativa a la mayor cantidad de personas.

El poder punitivo estatal ha sido siempre objeto de estudio, sea como medio de control del soberano por su uso desmedido o como remedio y auxilio social de los hechos delictivos. La función del Estado no debe limitarse a un fin represor; sino como contención delictual mediante el uso de políticas sociales públicas y formas de prevención social.

Tras la entrada en vigencia en todo el país un nuevo proceso inmediato. Ello, en virtud de uno de los decretos legislativos que recientemente aprobó el Ejecutivo gracias a la facultad que le delegó el Congreso para legislar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y crimen organizado (Ley N° 30336, del 1 de julio del 2015). Se trata del decreto legislativo N° 1194 -Decreto Legislativo que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia-, que estableció que entraría en vigencia a los 90 días de su publicación, lo cual ocurrió el pasado 30 de agosto.

Esta norma modifica y adelanta la vigencia en todo el país de los artículos 446°, 447° y 448° del Nuevo Código Procesal Penal. Con ello, lo que se ha hecho es establecer un nuevo proceso inmediato que será aplicable en aquellos casos en los que haya pruebas evidentes de la comisión del delito. Como lo indica su nombre, el objeto de este proceso es que el responsable encontrado “con las manos en la masa” sea inmediatamente procesado y sancionado, evitando así las demoras de varios años que suele llevar un proceso penal común.

Antes de las modificaciones introducidas por este decreto legislativo, el Código ya contemplaba la opción de solicitar un proceso inmediato en tres supuestos: a) si el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrancia, b) si ha confesado la comisión del delito; o c) si los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares son evidentes.

Sin embargo, los cambios traídos con el decreto legislativo 1194 son tan relevantes que bien podemos afirmar que estamos frente a un nuevo proceso inmediato. Primero, porque si antes constituía una alternativa a discreción del fiscal y por lo tanto, éste podía o no solicitarlo cuando concurriera alguno de los supuestos de aplicación señalados; de acuerdo al nuevo régimen, el fiscal tendrá ya no la facultad sino la obligación de solicitar que se desarrolle el proceso inmediato en dichos casos. Segundo, porque se ha extendido esta obligación a nuevos supuestos: desde ahora el proceso inmediato será aplicable también a los delitos de omisión de asistencia familiar (de pensión de alimentos) y de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Y tercero, porque el procedimiento establecido. Y tercero, porque se ha establecido un nuevo procedimiento con tres audiencias (audiencia de incoación del proceso inmediato, audiencia de control de la acusación y el juicio inmediato) con la presencia de todas las partes, y en un plazo más reducido.

La realidad problemática expresada ut supra, tiene relevancia jurídica, dado que a nivel normativo, se busca una mayor represión de la delincuencia logrando procesos más expeditos y sanciones más proporcionales con el hecho delictual.

Respecto a los criterios que se utilizaron el presente trabajo de investigación, que nos permitió describir la realidad problemática, se identificaron discrepancias teóricas⁴, carencias⁵ y deficiencias⁶ respecto a la aplicación del proceso inmediato para delitos en flagrancia. Puesto que en nuestra sociedad se ha atribuido el aumento delincuencia a un sin número de factores: la portación de armas por parte de la ciudadanía, consumo de alcohol y de drogas ilícitas, ausencia de fuentes de empleo, pobreza, deserción escolar y falta de espacios públicos de esparcimiento y cultura. De igual modo, se responsabiliza al Estado por la ineficacia e ineficiencia judicial, la mora judicial, la corrupción pública, impunidad entre otros factores; que a lo largo del tiempo han generado una tensión social entre seguridad y garantía, cuya consecuencia directa ha sido el linchamiento público de las personas mediante la llamada justicia popular o callejera.

Los medios de comunicación, como América Televisión en su programa dominical “Cuarto Poder” de fecha 10-01-2016- reportaje: “Delito de flagrancia: justicia en tiempo récord”. Se sostiene que: la flagrancia llegó para quedarse y revolucionar la conocida lentitud del sistema judicial peruano y en sólo un mes a enviado más de 70 detenidos a prisión.

Un sector de la doctrina reconoce que el proceso inmediato es un proceso especial distinto al proceso común. Se trata de un proceso que tiene por finalidad la simplificación y celeridad de las

⁴ Discrepancias Teóricas: Los identificamos cuando algunos conocen y propugnan la aplicación de un planteamiento teórico, tal que (A); y otros hacen lo mismo, pero con otro planteamiento teórico, tal que (B) .

⁵ Carencia: Identificamos este tipo de problema cuando el logro de un objetivo se ve dificultado porque no tenemos algunos de los elementos necesarios para lograrlo.

⁶ Deficiencias: Identificamos este tipo de problema cuando el logro de un objetivo se dificulta, por fallas o errores al hacer lo necesario para lograrlo.

etapas del proceso común, y está previsto para aquellos casos en los que no se requiere de mayor investigación para que el fiscal logre su convicción respecto a un caso concreto y formule acusación. La esencia o característica principal del proceso inmediato está basada en la inmediatez, la celeridad, la economía y el ahorro de recursos como el tiempo y el ahorro de recursos como el tiempo y otros aspectos innecesarios. En ese sentido, el proceso inmediato tiene como finalidad esencial dar pronta solución a los conflictos de relevancia penal, en los casos que es necesario una prolongada o compleja investigación.

Existe otro sector de la doctrina especializada que considera que, la “Ley de flagrancia” agrava el hacinamiento de las cárceles. Como se anuncia en el portal electrónico de jurisprudencia.pe⁷- dirigido por el George Bustamante Gonzales - se manifiesta en este portal, que la aplicación del Decreto Legislativo 1194, que regula el proceso inmediato, y que se conoce como la «**Ley de flagrancia**», incrementa a un ritmo acelerado la **sobrepoblación penitenciaria**. Y como ha indicado el profesor Hurtado Pozo, a estas alturas el riesgo no es que las prisiones se tornen en bombas de tiempo (que ya lo son), sino que se provoque su explosión.

El profesor **José Hurtado Pozo**, atento a lo que viene sucediendo con la aplicación del DL 1194 (**flagrancia delictiva**), se ha pronunciado respecto a los jueces que se han convertido en efectivos proveedores de la cárcel. En efecto, tenemos un sistema penitenciario que ha colapsado, y al que se insiste en seguir llenando de reos a un ritmo cada vez más rápido. La ciudadanía aplaude, la prensa celebra, pero no faltan los que dicen «alto, las cosas no van bien». Aquí lo que dijo: «El riesgo no es transformar las prisiones en bombas de tiempo (que ya lo son), sino provocar la

⁷ Legisprudencia.pe es un equipo de profesionales que comprenden la necesidad de promover el debate y la discusión de las razones políticas que subyacen en la ley. Las facultades de derecho del país, lamentablemente, se han limitado a mostrarnos la ley tal cual aparece en el diario oficial *El Peruano*, y con ello, han dejado de preguntarse por qué tal o cual ley tienen determinado contenido. En suma, no les ha interesado (y no les interesa) asumir una actitud crítica frente al *establishment* legislativo. Y esa sólo puede ser una actitud ~~20~~conservadora y reaccionaria.

eclosión». Constituye una simplonada o una tomadura de pelo, responder a la objeción de que mediante este procedimiento se imponen penas muy severas o desproporcionadas (más de seis años por ofender y maltratar levemente un policía, once años por el robo de un celular) diciendo que eso es «tema del Código Penal» y del Congreso por la gravedad de las penas previstas en la ley sustantiva. Como si lo esencial para los jueces fuera acelerar [procesos] para convertirse en revolucionarios aniquiladores de la «conocida lentitud de la administración de justicia».

Otra arista del proceso inmediato es su desnaturalización, en efecto el ámbito natural de aplicación del proceso inmediato está relacionado con los casos de intervención en flagrancia y los supuestos de confesión sincera, caracterizados por la falta o escasa necesidad de actividad probatoria, lo que justifica la reducción de los plazos de esta clase de procedimientos . Sin embargo, la introducción de los delitos de omisión de asistencia familiar y de conducción en estado de ebriedad altera esa lógica, demostrando la absoluta pobreza técnica de los razonamientos que determinas las recientes “reformas” de la legislación penal y procesal penal. Y se dice esto porque la introducción de estos delitos en el ámbito de la aplicación del proceso inmediato demuestra o bien el desconocimiento de las estructuras típicas de ambos delitos o bien el escaso interés por preservar las lógicas garantistas detrás del proceso penal.

Tal vez no era necesario que el Ejecutivo promulgara el **Decreto Legislativo 1194** (30/08/15), el cual obliga al Fiscal a incoar el **Proceso Inmediato** en casos de flagrancia, confesión, suficiencia conviccional y –con nombre propio– delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad, convirtiendo de esta forma a un proceso especial en la regla y al proceso común en la excepción (sólo cuando no proceda el proceso inmediato), a fin que un juicio termine en un plazo promedio de siete días.

Finalmente, diremos que lo relevante en esta problemática, es lo que se plantea a nivel normativo, pues el legislador, plantea una mayor represión de la delincuencia logrando procesos más expeditos y sanciones más proporcionales con el hecho delictual.

Por lo tanto la presente investigación está orientada a realizar un análisis jurídico dogmático de proceso inmediato para delitos en flagrancia y su aplicación en el tercer juzgado de investigación preparatoria y flagrancia de la provincia de Huaraz, periodo 2015-2016”. Lo cual nos permitirá conocer las bondades y dificultades la implementación del proceso especial de simplificación procesal, para delitos en flagrancia.

1.2. Justificación de la Investigación.-

La investigación que presentamos representa es un estudio de tipo no experimental, cuyo título es: *“análisis jurídico dogmático del proceso inmediato para delitos en flagrancia en el contexto del Decreto Legislativo 1194, periodo 2015-2016”*, basa y justifica su facticidad, factibilidad y relevancia social en lo siguiente:

Por su **relevancia social**: La investigación es de relevancia social por cuanto va contribuir a la mejor formación profesional de los estudiantes de la escuela de derecho de la universidad San Pedro – SAD Huaraz y también coadyuvar al mejor desempeño profesional de los operadores de justicia (abogados penalistas, jueces y fiscales).

Desde el punto de la implicancia **práctica**, esta investigación va a contribuir a la mejor comprensión del proceso inmediato para delitos en flagrancia, lo que repercutirá en el mejor desenvolvimiento de la labor profesional de los operadores del derecho (abogados penalistas, jueces y fiscales). Al tratarse de un procedimiento célere, por cuanto debe invocarse para hechos de simple y sencilla tramitación (diligenciamiento probatorio escaso o nulo) y resolución. Esto es así por cuanto desde la misma aprehensión del sujeto se cuenta con los elementos probatorios necesarios para su vinculación: víctima, testigos, evidencias y justiciables. De este modo, el ordenamiento jurídico establece mecanismos resolutivos expeditos fundados en criterios de eficiencia, oportunidad, eficacia y economía procesal.

Desde el punto de **valor teórico**, el trabajo de investigación que aborda el tema del proceso inmediato – instituto de naturaleza procesal que forma parte de los procesos especiales creado por el Código Procesal Penal del 2004, propiamente en el Libro V- el mismo que tiene por finalidad brindar una repuesta diferenciada y expedita a los delitos acaecidos en flagrancia, propiamente mediante la reducción de los plazos de espera y resolución.

Por su utilidad **metodológica**, esta investigación generará la aplicación correcta de un método de investigación para organizar un conocimiento válido y confiable dentro del área del Derecho y en particular la el Derecho Procesal Penal.

Por otra parte, en cuanto a su alcance, esta investigación abrirá nuevos caminos para los estudiantes de otras universidades y abogados penalistas en el ejercicio profesional que por modificaciones permanentes de las normas jurídicas y los planes de estudio no tuvieron la oportunidad de estudiar esta materia o a aquellos abogados que no están especializados en este tipo de procesos especiales.

Por último, profesionalmente podrá en manifiesto los conocimientos adquiridos durante la carrera y permitirá sentar las bases para otros estudios que surjan partiendo de la problemática aquí especificada.

1.3. Formulación del Problema.-

La descripción de la realidad problemática del presente trabajo de investigación nos permitió plantearnos las siguientes interrogantes:

1.3.1. Problema General.-

¿Cuáles son los alcances jurídicos dogmáticos de la nueva regulación del proceso inmediato para delitos en flagrancia a propósito de su modificación por el Decreto Legislativo N° 1194?

1.3.2. Problemas Específicos.-

- ¿Qué aspectos problemáticos enfrenta la aplicación del proceso inmediato para delitos en flagrancia a propósito de su modificación por el Decreto Legislativo N° 1194?

- ¿Cuál es el nivel eficacia de la aplicación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar en el marco normativo del Decreto Legislativo 1194?
- ¿Cuál es el nivel eficacia de la aplicación del proceso inmediato para los delitos de conducción en estado de ebriedad en el marco normativo del Decreto Legislativo 1194?
- ¿Cuáles son los criterios jurídicos y dogmáticos para la aplicación del proceso inmediato del proceso para delitos en flagrancia a propósito de su modificación por el Decreto Legislativo 1194.

1.4. Marco Referencial.-

Marco Conceptual.-

1.4.1. La Flagrancia Delictiva.-

1.4.1.1. Bases Supraconstitucional.-

Con claridad explica Araya Vega (2016):

“La libertad del ciudadano es la base de la democracia, de ahí que cualquier limitación a esta debe resultar de carácter excepcional”.

La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 7°⁸ establece el derecho a la libertad personal al sostener:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargo formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser jugado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionado a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”.

Dicha norma imperativa tiene carácter supraconstitucional para los ordenamientos internos en virtud de la aplicación del control de convencionalidad instaurado por la Corte interamericana de Derechos Humanos desde el caso *López Álvarez vrs Honduras*.

De este modo, la Convención Americana establece el principio por libertate y la excepción a estas de modo limitativo a los supuestos señalados.

La eficacia de la persecución penal no posibilita la afectación de otros derechos fundamentales.

La flagrancia, si bien es un instituto de naturaleza estrictamente procesal en muchos ordenamientos se ha instaurado la figura a nivel constitucional.

⁸ Los cuales entran en íntima correlación con los numerales 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), artículo 9 pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966).

Se trata de un supuesto fáctico que el legislador determinó de forma excepcional y justifica, donde es posible lesionar derechos fundamentales de los ciudadanos de manera controlada y claramente establecido.

Existen dos formas de detenciones constitucionalmente reconocidas. Mediante una orden previa y escrita girada por una autoridad competente contra la persona que luego de ser investigada es flagrante delito, es decir cuando se sorprende al sujeto en la comisión de un hecho delictivo.

Para este segundo supuesto, no se requiere orden previa y existe autorización para lograr su aprehensión; sin embargo subsiste la obligación de ser entregado de forma inmediata ante la autoridad pública.

En la detención por actuar delictivo flagrante y en supuestos de flagrancia delictiva aparente, la ley permite en determinados supuestos de hecho ceder a las garantías bases de los ciudadanos-orden judicial-ante la existencia de circunstancias tales que hacen necesaria, proporcional y racional la reacción estatal y civil y en este tanto autorizar la aprehensión del sujeto sin orden judicial previa.

En esos casos de flagrancia delictiva, el tercero debe a través de sus sentidos y formas inmediatas (personal y temporal), vincular al sujeto con un hecho delictivo, de modo que se autoriza su intervención-sin autorización u orden jurisdiccional previa-. Esta potestad es dada con la finalidad de impedir que prosiga la lesión a los bienes jurídicos de la persona afectada o que se impida al responsable lograr su huida y con ello abstraerse de la acción de la justicia.

Dentro de los derechos fundamentales un juego para lograr la detención flagrante del responsable tenemos:

A. Inviolabilidad del domicilio.-

Las diferentes Constituciones de corte democrático provenientes de la revolución francesa parten de una ideología libertad, donde se da preponderancia, entre otras cosas, al principio de inviolabilidad del domicilio.

Estos requisitos inescindibles fueron incorporados en las normas internacionales de Derechos Humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos como son la Declaración

Universal de los Derechos Humanos⁹, Convención Americana de Derechos Humanos¹⁰, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos¹¹.

Sin embargo, desde su misma construcción normativa constitucional se prevén excepciones a tal vulneración; la primera mediante orden previa escrita debidamente motivada girada por un juez; segundo el sujeto en flagrante delito se oculte en tal sitio. Con respecto a esta segunda excepción, desde nuestro punto de vista, únicamente es posible admitir para alcanzar los fines legalmente previstos por la propia Constitución (principio de proporcionalidad) como lo serían: 1. Impedir la consumación del delito, 2. Impedir la huida del delincuente, 3. Impedir la desaparición de los efectos o instrumentos del delito, 4. Impedir que se produzcan resultados más lesivos-caso de violencia doméstica por ejemplo-.

La palabra domicilio parte del latín *domicilium* tiene su origen en el término *domus*, referido a casa o vivienda, sea el lugar (espacio físico) donde de manera fija y permanente se asienta una persona. En este su tutela su derecho a la intimidad y protección de la propiedad.

Básicamente, las normas constitucionales fijan una línea directa tendiente a garantizar que el domicilio y cualquier otro recinto privado resulte inaccesible para terceros, sin embargo se exceptúa el allanamiento o cateo por parte de juez competente, o el impedir la comisión de un hecho delictivo, su impunidad o evitar daños graves a las personas o a la propiedad.

De este modo, podemos observar con claridad que el legislador ha potenciado un equilibrio entre la garantía constitucional de la persona investigada y la acción del Estado tendiente a la protección de la generalidad. Es decir la ubicación equidistante entre las garantías individuales de las personas investigadas y de las garantías individuales de las personas víctimas del hecho.

Las normas procesales tienden a establecer supuestos fácticos en los cuales es posible el ingreso sin orden previa a lugares inviolables constitucionalmente. Dentro de los que destacan la existencia incendios, inundaciones o calamidades en general, donde sus ocupantes o sus bienes corran riesgo por la amenaza. De igual modo la presencia de personas extrañas en locales con

⁹ Art. 11 “Nadie será objeto de injerencia arbitrarias en su vida privada, su familia su domicilio o correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tienen derecho a la protección de la ley contra tales injerencias”.

¹⁰ Art. 11.2 “Nadie poder ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia en su domicilio o en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”

¹¹ Art. 17.1 “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”.

indicios manifiestos de cometer un delito o la persecución de un imputado por delito grave y que se persiga su aprehensión. Por último, cuando en un lugar habitado o establecido se escuchen voces de auxilio o anuncie que se está cometiendo un delito. En todos estos casos, tal cual puede observarse existen autorizaciones del ordenamiento jurídico procesal para violentar el principio constitucional, los cuales se sustentan en la normativa sustantiva penal de las cuales de justificación (estado de necesidad o cumplimiento de un deber legal) además de ser excluidas desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva de la conducta (dolo).

Es claro, que no en un Estado, democrático de Derecho, se requiere que cualquier vulneración a un derecho fundamental provenga de la emisión de una resolución judicial previa que así la decrete y que cumplan con los requisitos de proporcionalidad (proporcionalidad en sentido estricto-juicio de ponderación-razonabilidad, necesidad, idoneidad-adequación del medio escogido según el fin).

De esta forma, la excepción a la regla de la orden previa debe sustentar en la existencia indubitable del *fumus comissi delicti* (elementos de convicción suficiente del hecho delictivo flagrante) para omitir dicho requerimiento constitucional. Es claro, que esta excepción se trata de una valoración legislativa de eficiencia y eficacia del sistema jurídico, a efecto de lograr la detención del responsable y la obtención de elementos de prueba inmediata que aseguren el resultado estatal de responsabilidad.

B. Propiedad Privada.-

Si bien las Constituciones Políticas, como ya hemos dicho, protegen el domicilio o recinto privado al considerarlo inviolable, no menos cierto es que no se trata de un derecho absoluto, ya que puede ser violentado de forma legal por orden judicial previa escrita girado por autoridad jurisdiccional competente o aun sin dicha orden en tanto se pretenda impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daño graves a las personas o a la propiedad.

De esta manera, conforme a dicha excepción es posible ingresar en territorios privados sin orden judicial, en tanto se pretenda la captura al delincuente in flagranti, de ahí que es posible que un tercero logre la detención de un responsable dentro de un inmueble (en el tanto no sea un domicilio conforme lo expuesto supra) o dar persecución dentro de este. Verbigracia, el delincuente in flagrante ingresa en un campo abierto o huyendo entre edificios. Recordemos

incluso que esta autorización también es reconocida para delitos en el mismo supuesto de hecho, pero sin ser cometidos en flagrancia mediante los allanamientos o cateos sin orden.

C. Libertad Personal.-

Distintos instrumentos internacionales, producto de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, constituyeron líneas bases para garantizar el derecho a la libertad prohibiendo el ser detenido arbitrariamente, así: artículo 9 Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), artículo 9 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), artículo 7 Convención Americana de Derechos Humanos (1969).

De este modo, tanto a nivel de los derechos humanos, como de las propias Constitucionales, se reconoce el principio de la libertad de los ciudadanos, pudiendo ser restringida únicamente por los medios legalmente previstos. Tradicionalmente, si bien todos los ordenamientos admiten la potestad de detener a una persona mediante una orden girada por una autoridad competente, se establece de forma excepcional que dicha detención no cuente con tal requisito en tanto se trate de una persona en flagrante delito.

Como hemos venido sostenido, las Constituciones Políticas reconocen como segundo bien jurídico más importante para los seres humanos la libertad. Sin embargo, el goce de tal derecho o conlleva el uso abusivo de este, admitiendo la propia norma superior, que en determinados supuestos de hecho es posible limitarla, siendo una de ellas, la comisión de un hecho delictivo.

Clarificados los términos supra, tenemos que existen dentro del ordenamiento diferentes institutos procesales que autorizan limitar la libertad de las personas: captura, detención, arresto, aprehensión, prisión preventiva, etc.

Centralizando nuestra exposición en los hechos flagrantes, procederemos a analizar los supuestos normativos en los cuales la Constitución autoriza la aprehensión de las personas sorprendidas en la comisión de un hecho delictivo flagrante. Las aprehensiones son entendidas como la privación de libertad momentánea realizada por un tercero o la policía ante un flagrante delito, sin que medie mandato de autoridad competente. De este modo, las aprehensiones pueden ser realizadas por la víctima, terceros o la policía. El requisito constitucionalmente reconocido es encontrarse ante la comisión de un hecho in flagranti, pudiendo ser, como se verá, un hecho delictivo o una contravención (falta).

Debemos tener presente que las Constituciones son una serie de parámetros generales impuestos, denominados principios constitucionales, los cuales sirven de inspiración y base para las leyes internas, de modo que no resulten contratistas si en su establecimiento ni es su interpretación. Las normas sustantivas definen las estructuras normativas impositivas y las normas procesales por su parte son las llamadas a establecer de forma especializada los procedimientos. De este modo, al no ser la Constitución Política un instrumento específico especializado, no puede exigirse a este, que adopte una terminología adecuada o sustentada doctrinariamente. De ahí que constitucionalmente se hable de detención flagrante cuando lo correcto sería aprehensión. De igual modo se utiliza el término “delito” cuando en realidad se trata de conducta flagrante, que incluyen no sólo las conductas delictivas sino las faltas legalmente constituidas. Es claro que el constituyente no ha pretendido incorporar conceptos jurídico-penales, sino acepciones que deben ser utilizados de manera amplia y genérica.

Debemos considerar además, que la autorización constitucional de realizar aprehensiones ante flagrante delito no es exclusiva de la autoridad pública de policía, sino que se ha dotado a terceros civiles de tal potestad. De este modo, es imposible considerar que estos califiquen los hechos como delito desde el sentido jurídico penal-en su sentido estricto-. Es claro que la atribución de calificación legal corresponde al Ministerio Público y/o Juez, por ello al ser presentado de forma inmediata el imputado ante la autoridad pública se puede definir su situación jurídica de modo inmediato.

Dicho esto, al Constitución Política como instrumento público fundado en el contrato social está llamada a dar vigencia y eficacia a los bienes jurídicos esenciales para la convivencia social. La libertad viene a ser el segundo bien jurídico más importante, sólo antecedido por la vida. Producto de la Revolución Francesa y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el año de 1789, se instaura el movimiento mundial tendiente al reconocimiento del debido proceso legal y las garantías judiciales.

Se pretende ubicar al ser humano en el centro de estudio, dotándolo normativamente del reconocimiento a la dignidad humana; de modo que impide al estado el uso abusivo del poder de castigo (*ius puniendi*). Baste recordar que el artículo 7 de la Declaración contenía la base de las garantías procesales al señalar: “ninguna persona puede ser acusada, detenida ni encarcelada, sino en los casos determinados por la ley según las formas prescritas (...)”. Este artículo, consolida la visión céntrica del ser humano y la protección especial de libertad del ciudadano-

base del pensamiento en la ilustración-, existiendo la posibilidad excepcional de restringirla únicamente por los medios y formas constitucionalmente prescritos; en tanto esa ley sea establecida por escrito y de forma previa. Así, ante los conflictos sociales surgidos de la interacción social, la Constitución y la ley provee a los intervinientes las garantías necesarias para su ejercicio (cargo o defensa), sean víctimas o imputados.

De esta forma, la incorporación a nivel constitucional del instituto procesal de la flagrancia (entendida como la aprehensión del delincuente en el momento de cometer el hecho o inmediatamente después, o ser hallado con rastros, instrumentos u objetos que hacen presumir de modo suficiente la responsabilidad), responde a los ideales liberales ya expuestos de la revolución Francesa, por cuanto pretenden dotar a los ciudadanos de formas en las cuales no sólo encuentren amparo en la ley, sino además protección en caso de ser investigados, por cuanto se pretende impedir la impunidad de conductas que por su urgencia requieren una respuesta inmediata.

En caso de existir una detención flagrante de un ciudadano (tercero), lo procedente es someterlo de forma inmediata a la autoridad pública a efecto que se conozca de la legalidad del acto y se defina su situación jurídica. En la vía judicial el acto es cumplido por el juez de control o etapa preparatoria, quien procede a verificar la legalidad de la detención, determinar si esta fue ajustada o no a las normas, si se produjo dentro de las condiciones que la ley permite llevarlo a cabo. Superado estos controles procede a determinar el grado y forma de vinculación de la persona al proceso a través de la imposición de medidas de coerción o no.

Debemos tener presente, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al ser la libertad la norma, cualquier limitación a ese derecho fundamental debe ser interpretada de manera restrictiva, como causa excepción que se trata (medida cautelar y excepcional).

Ahora bien, en el supuesto fáctico de la realización de un hecho criminal y no sea posible la aprehensión del responsable, la labor propia policial es la realización de diligencias investigativas tendientes a su determinación, las cuales deben igualmente cumplirse bajo los estándares legales y constitucionales del debido proceso penal, estando proscrita cualquier actuación irregular policial tendiente a la detención del investigado sin orden previa que así lo

autorice o mediante actuaciones arbitrarias para lograr el descubrimiento probatorio necesario o la identificación del responsable.

La detención en flagrante es una excepción a la regla constitucionalmente establecida de no ser detenido sin orden judicial previa; de este modo, cualquier restricción a esa libertad debe fundarse en la excepcionalidad, como ocurre en la detención flagrante donde la garantía individual cede a las expectativas de éxito del proceso judicial mediante la detención en el acto del responsable y muy probablemente de la evidencia que lo comprometa a efecto de impedir la impunidad del hecho criminal.

1.4.1.2. Conceptualización de Flagrancia.-

De modo genérico Araya Vega (2016) sostiene que una detención flagrante es la que se produce en los momentos en que un sujeto lleva a cabo la comisión del delito (flagrancia clásica), de ahí que para el sentido común, el concepto de flagrancia parte del supuesto en que el sujeto es sorprendido en el mismo momento en que está cometiendo el delito, sin que haya podido huir; sin embargo veremos que se trata de un concepto mucho más amplio (ampliada a los supuestos de cuasiflagrancia y flagrancia presunta).

La acción flagrante parte de la etimología de flagar, que proviene del latín *flagrans*, *flagrantis* o *flagrare* que significa que actualmente está siendo ejecutado, este latinajo proviene del verbo *flagare* que significa arder, resplandecer como fuego o llama, quemar.

De modo que la acción flagrante ocurre cuando el hecho de un sujeto durante su comisión resplandece o enciende los sentidos de un tercero. Verbigracia: el sujeto es detenido con el objeto sustraído, flagra en sí la comisión del hecho.

De esta forma, la acción delictiva debe encontrarse ardiendo o resplandeciendo como fuego o llama en el sujeto que la comete.

Se trata de una detención en la que se está cometiendo el hecho de manera singularmente ostentosa o escandalosa que hace imprescindible la intervención de un tercero en el evento a efecto de cesar el delito. En virtud de esta circunstancia, veremos que para que surja un hecho

flagrante se requiere además de su realización, la percepción directa e inmediata del hecho por parte de un tercero.

De modo clásico, la flagrancia consiste en sorprender al sujeto en el momento que comete el hecho (con las manos en la masa),

Sin que el responsable logre evitar la acción de la justicia. En estos casos, el hecho es flagrante o flagra, al estar siendo ejecutado o cometido en el momento, y el tercero tiene la certeza de su ejecución al encontrarse en combustión o ardiendo. Podría tratarse tal evidencia del hecho, en la ubicación del responsable en el momento del hecho, a través de la inmediación de las cualidades físicas, vestimentas, instrumentos del delito o la presencia de objetos del delito en su poder (por ejemplo, bienes de la víctima). Esta circunstancia particular de percepción directa e inmediata del hecho por parte de la víctima, un tercero o la autoridad pública, es lo que en doctrina se conoce como el requisito de determinación suficiente y certera, la cual se logra a través de la aprehensión sensorial del tercero respecto al hecho y al responsable.

Como sostiene San Martín (1999), el término delito flagrante se refiere al hecho vivo y palpitante, resplandeciente, cuya observación converse al testigo de que está presenciando la comisión de un delito. Se trata de un hecho donde el autor es sorprendido-visto directamente o percibido de cualquier otro modo-en el momento del hecho o en circunstancias inmediatas a su perpetración resplandeciendo sobre este de manera necesariamente debe ser percibida directamente por el tercero por el tercero que observa el evento, caso contrario decaería su configuración.

Jurídicamente se ha sostenido que la detención en flagrancia trata de la privación de la libertad de una persona que es cumplida sin existir una resolución previa de autoridad competente que lo autorice.

A manera de resumen, para que exista flagrancia, se requiere necesariamente de la existencia de un vínculo entre el hecho y el sospechoso, sin que sea imprescindible el decomiso del instrumento del delito, el posible hallazgo ajenos (en los casos de delitos contra la propiedad) o incluso la participación de la víctima en el proceso judicial¹².

¹² Verbigracia: un sujeto observa como un sujeto asalta a una anciana con un arma de fuego, le sustrae un bolso y huye del sitio. El tercero de persecución, en ese recorrido el sujeto lanza los objetos (arma de fuego y bolso) los

Técnica y jurídicamente, la flagrancia delictiva clásica está vinculada al preciso momento en que el sujeto es percibido o apreciado en la ejecución del delito por parte de un tercero, de modo que proporciona a nivel procesal una mayor convicción al juzgador tanto respecto a la realización del hecho delictivo como de la responsabilidad de este en el suceso.

Conjuntamente con esa aprehensión sensorial del evento por parte de un tercero, se hace imprescindible para la existencia de la flagrancia de la actualidad del suceso (inmediatez), pero además un vínculo directo y certero entre la acción delictiva desarrollada y el sujeto responsable. Es decir, no basta con observar el resultado final del evento ejecutado sino que es imprescindible vincular al sujeto con el hecho delictivo¹³.

De esta forma, la principal diferencia entre un hecho flagrante y otro que no lo es se funda en su ejecución, esto por cuanto flagrante serán todos los hechos en el momento en que se cometen, mientras que no serán flagrantes aquellas acciones cuya ejecución ya haya transcurrido sin ser percibido por un tercero de manera inmediata y directa.

Por esto, un hecho flagrante es el acto por el que cualquier persona, sin mediar orden previa de autoridad competente, priva provisionalmente de liberar a otra persona, a quien sorprende a través de sus sentidos de forma inmediata y certera en el momento mismo del hecho o en un estado equivalente por ley (cuasiflagrancia o flagrancia presunta), teniendo la obligación de poner al indiciado de forma inmediata y sin demora alguna a la orden de la autoridad.

En estos casos, el tercero que aprehende al responsable al responsable flagrante, desempeña de forma transitoria y excepcional una función pública delegada de actuación. De esta forma, el particular deberá cumplir con todas las obligaciones y deberes propios de esta, como lo es garantizar el debido proceso legal y la protección de la integridad corporal de la persona detenida.

Por su propia naturaleza jurídica, la detención flagrante busca además evitar la impunidad de los delitos, el éxito investigativo mediante la ubicación de pruebas suficientes del hecho., el favorecer la persecución penal de los delitos por parte del Ministerio Público y con la participación activa de la ciudadanía en caso de requerirse en el momento por razones de

cuales posteriormente no son recuperados, y al tiempo de persecución se logra la prisión del sujeto, sin embargo no se logra ubicar a la víctima por la policía. En estos si es posible hablar de delito en flagrancia delictiva.

¹³ Verbigracia: no basta ver el cadáver o el incendio, se requiere que el tercero logre vincular al sujeto con el evento delictivo, sea en su acción de dar muerte o incendiar.

urgencia. Es claro que el éxito procesal de los asuntos se logra a través de la obtención de las pruebas de manera inmediata, es por ello, que el legislador, autoriza no sólo a los agentes policiales sino a la ciudadanía en general a sustituir a la autoridad jurisdiccional en casos de delitos de flagrancia y les habilita en determinados supuestos para privar de la libertad a una persona. De esta forma, los actos investigativos tendientes a la terminación, debida a la obtención probatoria eficaz lograda a partir de la percepción directa, personal y con toda certeza.

Conjuntamente con esa precisión conceptual de detención sin orden previa algunos ordenamientos jurídicos han implementado normas sumarias tendientes a dotar a la Administración de Justicia de un proceso abreviado, sumario o expedito que permita la resolución de los conflictos de modo inmediato, lo que conlleva no sólo la mejoría en la percepción social de resolución judicial cercanas al conflicto, sino que se potencia la evitación de procesos con presos sin condena, respuestas inmediatas a las víctimas de hechos delictuales y la descarga procesal para evitar la mora judicial existente. En su mayoría, los ordenamientos latinoamericanos han incluido una fórmula constitucional que admite una detención sin orden previa judicial en tanto se trate de una delincuencia flagrante y conjuntamente incluye un presupuesto procesal donde se enumeran las hipótesis dentro de las cuales se entiende que un sujeto se encuentra en situación de delincuencia en flagrancia y en las que consecuentemente puede ser detenido sin orden previa judicial.

Considerando importante que puede adicionarse la inclusión de un proceso especial para delitos en flagrancia, de modo que puedan atenderse de manera diferenciada asuntos de simple y sencilla tramitación con asuntos de una mayor complejidad.

1.4.1.3. Tipos de Flagrancia.-

La mayoría de ordenamientos procesales, bases del código tipo para Latinoamérica de Maier (1996), estableció una definición procesal de supuestos: la flagrancia clásica (flagrancia propiamente dicha o en sentido estricto) así como los casos de cuasiflagrancia y flagrancia presunta; debiendo en estos casos incluirse para su determinación una inmediatez personal en la primera, y una proximidad temporal y espacial entre la aprehensión del imputado y la ejecución del delito en la segunda y tercera.

A. Flagrancia Clásica

Es también conocida como flagrancia real, estricta, en sentido estricto (*stricto sensu*), o propiamente dicha. Hace referencia al descubrimiento del autor en el momento de la comisión de los hechos. Es decir, acontece cuando se acaba de cometer un delito y el responsable es percibido por un tercero en su comisión.

En esta fórmula tradicional, el sujeto es sorprendido y detenido en el momento de ejecutada o consumada el delito, es decir una vez que ha iniciado la fase externa consumativa del *iter criminis*.

En estos casos de flagrancia, debe recordarse que se autoriza al tercero a lograr la aprehensión del responsable, facultad inspirada en la obligación que tienen los particulares de auxiliar a la autoridad pública en el combate de la delincuencia y en hacer valer sus derechos de víctima, siempre y cuando resulte proporcionada la acción a partir del supuesto de hecho en que ocurre, para cumplir con los fines políticos-sociales de justicia y lograr la detención del responsable junto con la obtención de los elementos probatorios necesarios para su juzgamiento.

Según lo habíamos establecido desde su definición de flagrancia, en este supuesto clásico el responsable flagra ya que su detención acontece de forma evidente en el mismo momento en que se realiza el hecho criminal.

En estos casos el sujeto es detenido, conforme al adagio popular, con las manos en las masa, cumpliéndose con una inmediatez personal (presencia física del investigado en el momento), inmediatez temporal (el sujeto perpetra el hecho punible en el momento o instantes antes de su detención, tercero percibe responsable) y detención inmediata del responsable (intervención de un civil-tercero-o la policía).

B. Cuasiflagrancia

También conocida como flagrancia material.

En ellas el agente es descubierta por un tercero durante la ejecución o consumación del hecho delictivo y a través de la persecución inmediata se logre su aprehensión.

En este supuesto procesal están presentes los siguientes elementos: la inmediatez personal y temporal (El autor es percibido, perseguido y detenido luego de realizar el hecho delictivo),

percepción sensorial directa (por la víctima, terceros o agentes policiales), persecución inmediata y sin interrupción (luego del hecho el sospechoso huye y es perseguido de manera inmediata y sin interrupción, es decir, no cesó la acción de aprehensión; también es posible que se trate de una persecución sucesiva, cuando un sujeto persigue y al no poder detener al responsable pide a otro que continúe la persecución y logre su aprehensión, en este caso se trataría de una percepción indirecta del hecho según las circunstancias).

La diferencia entre la flagrancia clásica y la cuasiflagrancia, se centra en que en la primera el perpetrador es detenido por quien lo percibió directamente en el hecho, mientras que en la segunda el sujeto detenido luego de una huida sea por el tercero o cualquier otro que tenga una percepción directa o indirecta del hecho.

C. Flagrancia Presunta

Uno de los presupuestos procesales de detención flagrante más delicados sin duda es la flagrancia presunta, también conocida como flagrancia evidencial, diferida, virtual o ex post ipso.

En ella se parte de las presunciones para su determinación, se equipara al sujeto base. El perpetrador no es sorprendido en ninguna fase del iter criminis (ni ejecución ni consumación), es decir no se le sorprende ni ejecutando ni consumando el hecho, tampoco es perseguido luego de su comisión. Sólo existen indicios razonables que harían suponerlo autor del hecho. Este supuesto coincide con la determinación normativa del supuesto en el tiempo inmediato a la comisión del delito el sujeto fuere encontrado el sujeto con rastros, señales, armas o instrumentos utilizados en la comisión del hecho, o señalado por las víctimas o por testigos presenciales como el autor del delito.

Los elementos presentes en esta delincuencia son: inmediatez personal (hallazgo del responsable), percepción sensorial directa de materialidad (podría tratarse de los instrumentos, objetos, rastros, huellas, vestimentas o cualquier medio que permita relacionar al sujeto con el hecho), inmediatez temporal (existe un vacío normativo que debe ser llenado por el operador jurídico al establecerse el “acaba de cometer”) y aprehensión del responsable de forma próxima en el tiempo y de manera material al evento.

En estos casos el sujeto es detenido conforme al adagio popular con masa en sus manos.

Desde nuestro punto de vista, este supuesto fáctico de flagrancia es complicado en su determinación judicial, en virtud de la ausencia de una percepción directa del evento y temporalidad de la detención. Somos del criterio que al tratarse de un vacío normativo, la interpretación de su adecuación debe ser sumamente restrictiva, ya que la detención de las personas, por regla, debe ser con orden judicial previa, siendo la detención en flagrancia una excepción al requerimiento constitucional.

La denominación de virtual responde a que la vinculación del sujeto con el evento delictivo acontece a partir de los registros digitales presentes en zonas públicas o establecimientos privados (videos, imágenes, etc.) de modo que su aprehensión inmediata se logra desde la observación del suceso por un tercero a través del medio tecnológico. En estos casos se requiere que la detención sea inmediata al evento delictivo, rechazándose las acciones investigativas posteriores realizadas para la determinación del responsable.

Verbigracia, el responsable es percibido por el dependiente a través de los controles de cámara de video de un establecimiento comercial hurtando bienes, o el caso los agentes de policía que aprovechando que existen cámaras de video en lugares públicos ubican a un oficial en un centro de vigilancia virtual y observan la realización flagrante del delito. En estos casos, se requiere que la detención del responsable sea inmediata temporal y personalmente, es decir que el tercero que la realice reciba la información del evento por parte de la persona que maneja el sistema virtual de seguimiento al responsable a través de ese medio tecnológico.

En cuanto a la flagrancia diferida, su nombre responde a que la detención del sujeto se realiza inmediatamente después del hecho, pero sin ser percibido por un tercero, sino que el responsable es encontrado con objeto o instrumentos relacionados con el delito (productos scaeleris o instrumento scaeleris) de modo que resulta evidente para el tercero que el sujeto participó en el hecho. En estos casos la segunda del evento debe ser rayada con la certeza.

Debemos concluir señalando que si la vinculación del autor con el hecho delictivo acontece posterior al evento, sin ser perseguido, y ocurre luego de la ayuda de averiguaciones o diligencias de investigación, la detención debe ser realizada por orden previa judicial, pese a que exista certeza en su participación en el hecho criminal. Esto sucede ya que en esos casos el presupuesto de excepción constitucionalmente creado ha desaparecido.

1.4.1.4. Principio de la Flagrancia.-

Para que exista una flagrancia delictiva según Araya Vega (2016), se requiere la existencia al menos del principio *fumus commisi delicti* (también conocida como atribución de un delito) y el *periculum liberatis* (necesidad de intervención).

A. Fumus Commisi Delicti

El principio *fumus commisi delicti* o también conocido como atribución del delito, parte del hecho que de forma previa, razonada e indiscutible, un tercero impute a un sujeto la comisión de un hecho delictivo; lograda tal imputación, la ley autoriza al tercero para la aprehensión del responsable sin orden judicial previa.

Desde nuestra consideración, se trata de aquel supuesto fáctico en el cual para poder detener a un sujeto es imprescindible que existe una vinculación previa, directa e inmediata del hecho mediante el sorprendimiento de su acción flagrante. Se trata pues, de una percepción sensorial directa e inmediata-personal y temporal- por un tercero de la comisión de un delito.

Por eso, para la atribución del hecho se requiere, por un lado la percepción sensorial directa y por otro la inmediatez del hecho.

La doctrina ha sostenido que las ideas de descubrimiento, sorpresa y percepción sensorial del hecho delictivo resulta ser los requisitos imprescindibles para referirnos a una delincuencia en flagrancia. Para que la percepción sensorial resulte adecuada para la determinación flagrante de un hecho, se requiere que la misma conduzca a la certeza rayando de seguridad del evento. Es decir, el tercero percibe que el hecho se está cometiendo o acaba de cometerse producto de la percepción sensorial directa e inmediata del suceso.

De este modo, el tercero que aprehende al sujeto debe, de forma previa y directa apreciar flagrantemente al razonable en su participación del hecho delictivo o al menos vincularlo de forma razonables con éste.

El concepto de apreciación está íntimamente vinculado con el concepto de imputación y la utilización de los sentidos. El tercero mediante la percepción sensorial logra vincular al sujeto con el hecho delictivo; con ello logra motivos y razones suficientes, fundadas en el conocimiento suficiente, razonado, manifiesto y perceptible del evento. Así se debe excluir de un hecho

flagrante, la mera sospecha, presunción, prejuicio o conjetura sin sustento. En el caso de los eventos de flagrancia presunta se requiere que los indicios percibidos sean racionales y permitan determinar de modo suficiente y necesario al sujeto con el evento delictivo y obtener la certeza razonada que el sujeto acaba de cometer el delito.

El concepto de flagrancia en sentido estricto parte de la percepción directa del sujeto mediante los sentidos, lográndose sorprender, encontrar, descubrir o perseguir al responsable hasta su aprehensión. En los casos de flagrancia ampliada (cuasiflagrancia y flagrancia presunta) se requiere adicionalmente que al tiempo inmediatamente posterior, sea perseguido y el sujeto fuere encontrado con armas, objetos, instrumentos o señales de la comisión flagrante de delito.

En resumen, para una detención flagrante se requiere la existencia de percepción sensorial e inmediata del tercero de la comisión del hecho delictivo o bien en parte de la fase de ejecución del *iter criminis*, hasta lograrse su aprehensión. En caso que el delito ya se haya consumado se requiere que de forma evidente se de una conexión material, directa e inmediata (huella, instrumentos u otros) entre la comisión del suceso y el sujeto vinculado con el hecho delictivo.

B. Periculum Libertatis

Este concepto parte de la necesidad de intervención.

Ante el descubrimiento de la delincuencia *in flagranti*, es posible encontrarnos ante una urgencia de aprehensión del responsable, a efecto de hacer cesar la acción delictiva, frustrar la huida, evitar el ocultamiento o impunidad y el descubrimiento del hecho.

Siendo la detención flagrante una excepción constitucional al principio *pro libertates*, se requiere para su aplicación que se funde en los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad.

Es decir, debe ser realizada para alcanzar el objetivo constitucionalmente establecido (evitar que prosiga el hecho delictivo y someter al justiciable al proceso), tratarse de una medida necesaria (sólo en los casos señalados) ejecutarse por los medios adecuados y menos gravosos (no medios excesivos o innecesarios) y por el tiempo estrictamente necesario (entregada a la autoridad pública de inmediato).

Por esto, las detenciones realizadas por parte de civiles, terceros o sujetos particulares, requieren del principio *periculum* para legitimar la aprehensión, es decir, fundarse en una necesidad de intervención.

1.4.1.5. Requisitos de la Flagrancia.-

Dentro de los elementos necesarios para la configuración de una detención flagrante se requiere según Araya Vega (2016): (a) Percepción del hecho por la víctima, un tercero civil o un agente de policía, (b) individualización del responsable, (c) hecho delictivo, (d) inmediatez temporal se está cometiendo o haya cometido momentos antes, inmediatez personal relación del sujeto responsable con el hecho; objeto o instrumentos-.

Como ya hemos sostenido, la palabra flagrancia parte de la combustión-resplandece o arde-en el sujeto responsable, la evidencia de su criminalidad. Así en la flagrancia clásica (arde la ocurrencia del delito), y en los casos de cuasiflagrancia y flagrancia presunta (arde o quema la vinculación del sujeto al hecho: persecución inmediata, objetos, instrumentos o sospechabilidad razonable y suficiente).

A manera de resumen, la flagrancia es un instrumento de naturaleza estrictamente procesal que ha sido dotada de importancia constitucional, que justifica privar de libertad a una persona, fundado en: presupuesto fácticos debidamente autorizados por ley, existencia de una vinculación fáctica suficiente directa e inmediata del sujeto con el hecho delictivo por parte de un tercero, inmediatez (coetaneidad) en los hechos tanto temporal (percibido durante la comisión del delito) como personal (es ubicado en el sitio y vinculado con el delito, o al ser detenido es relacionado con el objeto o instrumentos del delito) y por último una ostensibilidad.

La inmediatez temporal ocurre cuando la aprehensión del sujeto produce en un tiempo inmediato o marco temporal de coetaneidad al delito. El elemento central lo constituye el tiempo en que se comete del delito. Se refiere a lo que se hace o acaba de hacer.

Está relacionado e íntimamente ligada a la evidencia.

En los supuestos de prolongación en la comisión del hecho delictivo, es claro que la flagrancia continúe siendo percibida por los sentidos del tercero sin interrupción. Debe recordarse que la denominada flagrancia por señalamiento requiere que se dé inmediatamente después de cometer

el delito y no se haya interrumpido su búsqueda o localización. A esto se ha denominado como post factum inmediato por parte de la doctrina.

En el supuesto de flagrancia clásica (el sujeto es aprehendido cuando está cometiendo el hecho) cuasiflagrancia (instantes inmediatos posteriores al mismo luego de su persecución) o flagrancia presunta (siendo vinculado en ese momento en relación al objeto o a los instrumentos del delito), la ley autoriza a cualquier persona a practicar la aprehensión del responsable en tanto a través de sus sentidos lo hay descubierto. Por esto, el sorprendimiento del sujeto puede ser realizado durante o inmediatamente después de perpetrar el delito, por cuanto no importa la parte de la ejecución del acto delictivo en que se encuentre, ya que basta que se trate sólo una parte de ésta para que se configure.

Para la determinación de una detención flagrante debemos distinguir los conceptos de ostensibilidad y la sospechabilidad delictual. La ostensibilidad (flagrancia clásica) se presenta cuando la detención flagrante parte de la inmediatez próxima al delito, es decir, se vincula al sujeto por acabar de cometer el hecho, existe evidencia directa de su comisión a través de su detención. La sospechabilidad (cuasiflagrancia y flagrancia presunta) ocurre cuando no es ostensible la detención ni es coetánea al evento, sino que se vincula al imputado con el hecho a partir del hallazgo de evidencia del delito (objetos procedentes del delito que permitan su vinculación con el hecho-objetos, señales, vestigios, vestimentas, marcas individualizantes o instrumentos empleados para cometerlo entre otros).

Con respecto a la inmediatez, este se refiere al tiempo de detención del sujeto vinculado. Se requiere en tesis de principio que sea corto, inmediato y posterior al hecho, es decir-post factum-; ya que la vinculación del sujeto al hecho debe ser clara, directa, razonada e inmediata con el suceso, caso contrario surgirán dudas sobre su atribución y constatación sensorial; con ello decaería el supuesto de la flagrancia.

Es por ello que en los casos de flagrancia presunta, la vinculación no es tan clara. Desde nuestro punto de vista un requisito para la detención flagrante es la existencia de un tiempo inmediato

Para encontrarnos en estado de flagrancia. Esta referencia de tiempo inmediato o inmediatamente después, resulta por demás imprecisa y abierta, que requiere ser llenada a nivel jurisdiccional en el caso en concreto. A esto se le conoce además como flagrancia equiparada o por equiparación, donde el inculpado es señalado como el responsable al ser ubicable en los objetos, instrumentos

o productos del delito, o aparecen huellas o indicios que hagan presumir fundamente su participación en el delito.

De ahí que surgen cuestionamientos interpretativos sobre el tiempo para lograr la detención. ¿Qué debe entenderse por acabar de cometer el delito?, ¿en casos de huida persiste la flagrancia? ¿es necesario imponer un tiempo máximo para lograr la detención?

Consideramos que debe admitirse el supuesto de detención flagrante en tanto perdure una actividad policial activa tendiente a su ubicación y aprehensión material y que necesariamente ponga de manifiesto inescindible la relación del sujeto con el hecho delictivo. De modo que, si a nivel policial se renuncia a la ubicación inmediata o hallándose el imputado no existe tal vinculación (que a través de los sentidos se perciba el flagrante o arder), se requerirá en esos casos orden de autoridad competente para su detención. Esto tiene una razón de ser, y es que la flagrancia se da mientras no cese la persecución, con independencia del tiempo que materialmente dure la misma. En cuanto a la posibilidad o no de establecer un límite temporal a la persecución en flagrancia, esta es rechazada por la mayoría de la doctrina, ya que una vez iniciado el hecho, esta puede perdurar indefinidamente hasta lograr su detención o aprehensión, siempre y cuando no se interrumpa, es decir se dé un apaciguamiento. A este concepto de apaciguamiento la doctrina lo refiere como la acción de renunciar al seguimiento y ubicación.

En caso de transcurrir suficiente entre el hecho delictivo y la ubicación del responsable, que hacen imposible percibir en este la indubitable vinculación en el hecho delictivo (concepto flagrante de arder en el imputado); el tercero no se encuentra autorizado legalmente a su aprehensión y deberá comunicarlo a la autoridad pública, para que a través de su *noticia criminis* se inicie los actos de investigación del hecho, dejándose de lado el concepto de detención flagrante. Esto mismo sucede cuando la autoridad pública, para lograr la aprehensión del sujeto, no le persigue sino que inicia con actos de investigación necesarios para su ubicación, en estos supuestos no es posible la detención, y se requiere orden judicial para proceder. Recordemos que la detención en flagrancia es una excepción y la regla es la orden previa de autoridad competente.

La inmediatez personal o especial ocurre cuando el sujeto autor del hecho habido en la escena delictiva, en sus inmediaciones o sea perseguido, e situación en que se infiere su participación en

el delito como es el caso de ser encontrado con objetos, huellas o rastros que revelen que acaba de cometer el hecho.

De modo necesario, la persecución del sorprendido en flagrancia debe haberse iniciado inmediatamente después del descubrimiento de la comisión del delito, estando el sospechoso aún en las proximidades del evento dañoso, de modo que a través de los sentidos el tercero logre vincularlo en relación con los objetos o instrumentos del delito.

En los casos de cuasiflagrancia y flagrancia presunta, hemos sostenido que resulta imprescindible que el tercero a través de sus sentidos logre vincular de modo suficiente y directo al sujeto y el objeto o los instrumentos del delito. De este modo, en la detención flagrante debe existir un vínculo fáctico entre el sujeto y el delito, la cual podría ser referida en estos supuestos: sujeto vrs hecho delictivo (detención en el momento del hecho o inmediatamente después), sujeto vrs objeto-instrumento (detención con objetos o instrumentos), sujetos vrs sujetos (inmediatamente después siendo reconocido). A este presupuesto de inmediatez personal en doctrina también se conoce como vinculación fáctica, entendida como la presencia física del justiciable en el hecho.

En cuanto a la vinculación del sujeto con el hecho, esta es referida al nexo causal entre la acción del sujeto y el delito. Así, no basta con encontrar al sujeto o al objeto, se requiere además la determinación la determinación del vínculo entre ambos, es decir una relación causal que logre vincular al sujeto con el hecho delictivo.

De este modo, lo primero que debe determinarse es la relación causal, posteriormente la concurrencia de una inmediatez temporal (sorprendido cometiendo el delito) o personal (detenido producto de la huida o relacionado con objetos o instrumentos del delito de modo que razonable y evidentemente determinen su participación). Así en caso que no exista la imputación necesaria del sujeto con el hecho (vinculación fáctica), lo procedente es acudir a la regla constitucional establecida: orden previa de autoridad competente.

Sobre el particular, Manzini (1951) sostiene que. “El concepto jurídico de flagrancia está constituido por una idea de relación entre el hecho y el delincuente. No puede haber flagrancia en virtud solamente del elemento objetivo: es necesaria siempre la presencia del delincuente, fuera de los casos expresamente exceptuados por la ley, un cadáver todavía sangrante; una casa

que en ese momento se incendia...no constituye flagrancia si el reo no es sorprendido en el acto mismo o no se lo consigue inmediatamente.”

1.4.1.6. Modalidades de Comisión Flagrante.-

Al respecto Araya Vega (2016), puntualiza:

A nivel doctrinario, los delitos podrían ser divididos en delitos permanentes e instantáneos. Permanente será la acción o estado que se mantiene, permanece o subsiste en el tiempo. Mientras que los delitos de consumación inmediata parten del supuesto de que la acción delictiva fenece con la realización inmediata del hecho.

Como puede colegirse fácilmente, ambos conceptos parten de una estructura similar a la flagrancia, es decir que ocurren mientras se da su permanencia (al momento del hecho o instantes después de cesar).

En el caso de la delincuencia en flagrancia, esta conducta delictiva ocurre cuando el sujeto es sorprendido por un tercero en el momento en que se está cometiendo (delito instantáneo), o que a través de sospechas razonables determinen que el sujeto acaba de cometerlo (delito permanente).

La principal diferencia entre una flagrancia de otra que no lo sea, como lo hemos sostenido, está dada por la capacidad de ser sorprendido el sujeto en la comisión del hecho. Así, pueden existir conductas con efectos permanentes o instantáneos que podrían no estar en el supuesto flagrante; esto dependerá de la inmediatez del hecho y de la percepción sensorial del tercero.

En los casos de delitos instantáneos, no existe dificultad en admitir el presupuesto de hecho flagrante, ya que la acción delictiva es percibida sensorialmente por el tercero de forma inmediata. Sin embargo su determinación, verbigracia, casos de la narco-ventas en las calles, ¿podríamos hablar de una flagrancia permanente? ¿Qué ocurre en los casos de narco-ventas en domicilios? En estos casos no existe observación plena por parte del tercero de manera permanente, sino sólo cuando en el interior del recinto. ¿En esos casos estaríamos ante un supuesto de flagrancia permanente? Somos del criterio, que en el tanto el hecho no sea inmediato (personal y temporalmente) así como percibido sensorialmente de modo directo, razonado, suficiente e inmediato por parte del tercero, no habría hecho flagrante. En esos supuestos fácticos se requiere actos de investigación ordinarios policiales y la obtención de las autorizaciones judiciales necesarias para la resolución del asunto.

La flagrancia debe concebir ese descubrimiento, sorpresa y percepción sensorial del hecho, así se rechazaría la posibilidad de considerar flagrante conductas en las cuales la policía haya acudido al conocimiento previo a través de investigaciones de la actividad delictiva desarrollada y sobre esa base, pretenda justificar una detención flagrante, pensemos en información previa confidencial recibida que es confirmada policialmente.

De esta forma, para la existencia de una permanencia delictual se requiere la percepción sensorial de un tercero que descubre un hecho, puesto que el concepto de flagrancia preconice una sorpresa, caso contrario se vulneraría la excepción constitucional y legalmente dada. En esos casos, donde no existe vinculación fáctica necesaria del sujeto con el hecho y el resultado de la detención se da como resultado del planeamiento investigativo o del impulso policial brindado- en el caso de agentes colaboradores o encubiertos-, estaríamos ante un descarte de una detención flagrante.

Para nosotros, en determinados supuestos de hecho y debido a la naturaleza del delito, la sola tenencia determina su consumación.

Algunos delitos por su naturaleza jurídica resultan ser de consumación inmediata y de efectos permanentes, verbigracia: almacenaje de droga, almacenaje de armas, secuestro, etc, en estos casos, algunos han llegado a considerar que se está ante un estado antijurídico o flagrancia permanente, lo que admitiría evadir los requerimientos constitucionales y legales para la actuación policial.

Sin embargo, somos del criterio que no habría un delito *in flagranti* ante la inexistencia de percepción sensorial directa del tercero así como la ausencia de inmediatez suficiente, ya que se obtiene a partir de actos investigativos.

De este modo, el concepto de flagrancia debe estar compuesto por los elementos de inmediatez personal, inmediatez temporal, percepción sensorial directa, necesidad o urgencia de intervención, hecho punible actual y evidente, constatación directa del tercero a efecto de conseguir una vinculación razonable con el hecho mediante el decomiso de objetos o instrumentos.

Para nosotros sí es posible distinguir entre el concepto de flagrancia y el de permanencia. En el primero se exige una percepción sensorial de que el delito se está ejecutando; en el segundo el

delito se está consumando todo el tiempo en que dura el estado antijurídico, sin que sea necesario ser percibido a través de los sentidos.

Otro de los supuestos discutidos representa en los delitos de ocultamiento cuya ejecución y consumación son inmediatas. Pensamos en los casos de transporte (armas, droga, mercancías ilegales, etc.). En estos casos, el actuar delictivo no es percibido por terceros ni es constatable si no es por la actuación preventiva policial, de la cual deriva la posibilidad de registros (personas o bienes). En estos supuestos fácticos, consideramos que debe medirse caso a caso la validez de la actuación policial, de modo que se puede determinar si corresponde su actuación a una redada policial, a un puesto de control, a una maniobra preventiva o a la reacción por sospecha directa de delito, previa información confidencial recibida. Consideramos que la permanencia del estado antijurídico hace decaer la flagrancia, ya que versa sobre actividad delictivas llevadas a cabo en la clandestinidad –sin ser percibido por terceros-. De esta forma, en los supuestos de hechos donde no exista una sorpresa policial del evento, sino el resultado de una diligencia investigativa mínima, en esos casos no habría flagrancia, ya que la inmediación del hecho, se produce por la percepción sensorial posterior programada y no por la percepción sorpresiva del hecho. De esta forma, en algunos casos, pese a la permanencia del suceso no es posible considerar la existencia de un hecho flagrante.

Desde nuestra visión, sostener lo contrario podría implicar actuaciones riesgosas para los bienes jurídicos como lo son la propiedad privada, las comunicaciones, la intimidad, el derecho de defensa, la posibilidad de no declarar contra sí mismo, etc., ante la posibilidad policial de hacer aparentar un hecho flagrante y de este modo realizar diligencias investigativas obviando los requerimientos constitucionales de previa orden judicial. El fundar actuaciones delictivas sin la necesaria percepción sensorial inmediata de un tercero, harían nugatorias los derechos más esenciales reconocidos de las personas investigadas y generar posibles actuaciones irregulares e ilícitas que decaerán posteriormente dentro del proceso judicial.

Dicho lo anterior, conviene sostener que la flagrancia parte los conceptos de imprevisión delictual, de percepción inmediata directa; descartándose así actos policiales investigativos o reacciones policiales una vez que ha cesado la posibilidad de hallazgo del responsable. De esta forma, si en un caso, las personas sospechan de manera poco certera el paradero del responsable, los agentes de policía están impedidos de efectuar ingresos a establecimientos privados o de alguna forma violentar los bienes constitucionales protegidos.

La flagrancia delictiva así concebida se compone de una actualidad del hecho y de una identificación inmediata del responsable por parte del tercero. Por esto, si la acción no fue percibida en el momento de la ejecución, no podríamos hablar de hecho flagrante.

Para que el hecho sea flagrante se requiere mínimamente la percepción sensorial del tercero, al menos en parte de la ejecución del delito.

En algunos casos ha llegado a confundirse los hechos flagrantes con las conductas tentadas. Conviene hacer la precisión de su diferencia. Los hechos tentados pertenecen a la esfera del *iter criminis* en su fase ejecutiva, y son concebidas respecto a la capacidad del sujeto activo de sacar de la esfera de custodia del bien del sujeto pasivo. Es claro que para que surja la flagrancia debe necesariamente ser delito la conducta, es decir haber superado las fases previas del *iter criminis* y encontramos en la fase de ejecución delictual (fase externa). Somos del criterio de que en los casos de flagrancia clásica hay una coincidencia entre la flagrancia y la tentativa delictual, ya que el sujeto es detenido en el mismo momento que comete el hecho, lo cual nos preconiza la imposibilidad dispositiva del bien por parte del sujeto activo. Sin embargo, en los casos de cuasi flagrancia es posible que nos encontremos ante un hecho tentado o consumado, ya que durante el momento de la huida el sujeto pudo o no disponer del bien al salir o no de la esfera de custodia el mismo por parte del agraviado luego de su desapoderamiento.

Por último, en los casos de flagrancia presunta, en esos supuestos siempre estaremos ante un hecho consumado, ya que la detención se logra no por ser detenido en el hecho o ser perseguido, sino posteriormente por la relación del sujeto con el objeto o instrumento, lo que nos hace suponer directamente la posibilidad de disposición del bien al salir de la esfera de custodia. En esos casos de flagrancia presunta, pese a que el objeto sea habido, igualmente habrá un hecho consumado.

1.4.2. Proceso Inmediato.-

1.4.2.1. Generalidades.-

El proceso inmediato se encuentra regulado en la sección primera del Libro Quinto del NCCP, dedicado a los procesos especiales. Puede ser definido como aquel proceso especial, en aras de la celeridad de los procesos penales, pasa directamente de la fase de diligencias

preliminares al juicio oral, obviando llevar a cabo las etapas de investigación preparatoria propiamente dicha y la intermedia de un proceso común. Neyra Flores (2010)

No obstante, este proceso, según se señala en el artículo 447° del NCPP, puede realizarse inclusive, cuando el Fiscal haya formalizado la Investigación Preparatoria, siempre y cuando éste lo solicitado antes de los treinta días de haberse producido esta formalización.

El proceso inmediato, se encuentra pues determinado por la falta de necesidad de realizar la investigación preparatoria, debido a la existencia de flagrancia delictiva, confesión del imputado en la comisión del delito y/o porque los elementos de convicción evidencian la materialización del ilícito penal y la participación producida del imputado Calle Pajuelo, (s.f.).

Son estos supuestos de aplicación los que justifican la directa presencia del imputado al juicio oral, dada la superfluidad e innecesaridad en que deviene pasar por el filtro de la audiencia preliminar en la que se realiza el control de la acusación; en suma, pasar por la etapa intermedia ante dichos supuestos es innecesario.

Este proceso, cuya incoación corresponde al Fiscal, constituye una celebración anticipada del juicio oral. Por ello, es considerado, como uno de los procesos especiales en los que se expresa con mayor nitidez el objetivo de buscar la simplificación y celeridad del procedimiento ordinario.

1.4.2.2. Fuentes y Antecedentes.-

Neyra Flores (2010) indica que en nuestro ordenamiento:

El proceso inmediato tiene en cierto modo su antecedente más directo en la Ley N° 28122, de 16 de diciembre del 2003, la misma que regula la conclusión anticipada de la instrucción para ciertos delitos. Dicha ley, establece la realización de una instrucción judicial breve, similar a la instrucción de los juicios rápidos del sistema procesal español. Sin embargo, resalta una diferencia entre ambos, y es que en el proceso inmediato del Nuevo Código procesal penal, no es precisa la existencia de una, siquiera breve, fase de investigación formal, sino que simplemente en base a lo actuado preliminarmente el Fiscal formula su requerimiento para pasar a juicio oral.

Por otro lado, el proceso penal inmediato, o también llamado juicio inmediato, tiene como fuente a los juicios directísimos /flagrancia o confesión) e inmediato (prueba evidente) del Código de procedimiento penal italiano de 1989.

a) *El juicio directo (giudizio direttissimo).*-

Este proceso consiste en al directa presencia del delincuente ante el Juez enjuiciador sin pasar por el filtro de la audiencia preliminar Mireille Delmas (2000).

El juicio directo italiano, procede ante dos supuestos. El primero de ellos, se da cuando la persona ha sido detenida en flagrante delito, entonces el Ministerio Fiscal, tiene la posibilidad de llevarla ante el juez, para que convalide la medida en cuarentena y ocho horas.

Si el Juez no acordara la convalidación, entonces devuelve las actuaciones al Ministerio Público; puede, sin embargo, proceder al juicio directo si el acusado y el Ministerio Fiscal así lo consiente. Si convalida la medida, entonces dicta sentencia.

En segundo lugar, si la persona ha confesado los hechos durante el interrogatorio, entonces el Ministerio público, podrá llevarla directamente a juicio oral dentro de los quince días siguientes a la confesión.

b) *El juicio inmediato (giudizio immediato).*-

Al respecto Neyra Flores, (2010) indica:

“Este juicio se dirige, de la misma manera. A eliminar la vista preliminar para anticipar la del juicio”.

En este caso, el Ministerio Fiscal puede solicitar directamente al juez de la investigación preliminar que tenga lugar el juicio inmediato cuando el acusado haya sido interrogado sobre hechos cuya prueba es evidente después de la investigación preliminar.

El acusado puede, por su parte, renunciar a la vista preliminar pidiendo el juicio inmediato en los actos preparatorios de aquella.

Estos dos últimos antecedentes del proceso sólo eliminan la vista preliminar, sin embargo, el proceso inmediato que regula el NCPP, elimina también las fases de investigación preparatoria propiamente dicha y la fase intermedia.

1.4.2.3. Supuestos de Aplicación.-

De acuerdo con lo establecido en el artículo 446° del NCPP, el Fiscal podría citar a juicio oral, cuando:

- a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito; o
- b) El imputado ha confesado la comisión del delito; o
- c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.

A. Flagrancia.-

El NCPP, en el inciso 2° de su art. 259°, prescribe “...Existe flagrancia cuando la realización del hecho punible es actual y, en esa circunstancia el autor es descubierto, o cuando es perseguido y capturado inmediatamente después de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con objeto o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo...”

Con el art. 3° del decreto Legislativo N° 983, publicado en el diario oficial el 22 de julio del 2007, se modificó y quedó redactado de la siguiente forma el inciso 1° del art. 259: “la policía detendrá sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia, cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho punible, o acaba de cometerlo los que constituyen supuestos de flagrancia y cuasiflagrancia respectivamente, o cuando:

- a) Ha huido y es identificado inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual o análogo que haya registrado imágenes de éste y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. Este supuesto de flagrancia constituye lo que doctrinariamente se conoce como presunción de flagrancia.

b) Es encontrado dentro de las 24 horas, después de la perpetración del hecho con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para producir o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. Sin embargo, con la dación de la Ley N° 29372, publicado en el diario oficial el 09 de junio del 2009, que modifica el artículo 259° del NCPP vigente actualmente, se ha retornado al concepto inicial de flagrancia delictiva, devolviéndole su contenido clásico. *Existe flagrancia cuando la realización de un hecho punible es actual y en esa circunstancia, el autor es descubierto o cuando es perseguido y cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo.*

B. Confesión.-

Tal como lo prescribe el NCPP, la confesión, para ser tal, debe consistir según Neyra Flores (2010) en la admisión de los cargos o imputación formulada en su contra por el imputado¹⁴.

La confesión es pues el acto procesal que consiste en la declaración necesariamente personal libre, consciente, sincera, verosímil y circunstancia que hace el procesado, ya sea durante la investigación o el juzgamiento, aceptando total o parcialmente su real autoría o participación en la perpetración del delito que se le imputa. Dicha declaración puede contener alegaciones encaminadas a atenuar y excluir la pena.

Su carácter peculiar radica en que es desfavorable para el sujeto declarante.

a. valor probatorio de la confesión

El artículo 160 del NCPP establece, en su inciso segundo, lo siguiente:

“Solo tendrá valor probatorio cuando:

- a. Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción;
- b. Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas; y,
- c. Sea prestada ante el juez o el Fiscal en presencia de su abogado

En este caso, la confesión no se da ante autoridad judicial pero sí ante autoridad competente con lo es el Fiscal.

¹⁴ Art. 160 inciso 1.

C. Elementos de convicción previa declaración del imputado

Según Neyra Flores (2010) este supuesto hace alusión a la existencia de suficiencia probatoria.

Así pues, existen elementos de convicción suficientes, cuando de lo actuado en la investigación preliminar se han hallado elementos incriminatorios de calidad tal, que bastan para sustentar una acusación.

A continuación ejemplificaremos, lo referido:

Si en un caso por delito de robo: un sujeto ingresa a una vivienda aproximadamente a las 10:30 de la noche, portando un arma de fuego, amenazando al dueño, para luego llevarse un televisor, una computadora y un equipo de sonido; y la dueña inmediatamente después de perpetrado el delito llamado a la Policía y ésta patrulla los alrededores de la casa encontrando su DNI, con el nombre de Luis Ramos López. Ella cree reconocerlo y al efectuarse el reconocimiento en rueda ella efectivamente lo identifica. Aunando a los antecedentes penales de Luis Ramos, en los que constan dos condenas por hurto agravado. Así como el testimonio de los vecinos de la dueña de la casa, que confirman que Luis Ramos López, ingresó el día de los hechos a la vivienda. Lo que también se corrobora con la licencia para portar armas del sujeto y la pistola de cañón de 9mm. Encontrados en su domicilio. En este caso, si el Fiscal recabó toda esta información en las diligencias preliminares, puede requerir la incoación del Proceso Inmediato, pues como se evidencia, cuenta con material suficiente que vincula al imputado con el delito.

1.4.2.4. Pluralidad de imputados.-

El proceso inmediato señala Neyra Flores (2010), es también aplicable en caso de pluralidad de imputados, pero se establecen dos exigencias para ello, la primera es que todos ellos se encuentren en una de las situaciones previstas en el numeral 1 del artículo 446°, esto es que se encuentren dentro de los supuestos de aplicación de este proceso, y que estén implicados en el mismo delito.

La razón de esta disposición se encuentra en la naturaleza del proceso inmediato, dado que está reservado para ser aplicado a hechos delictivos de índole sencilla y de fácil solución, sea porque el autor fue sorprendido en flagrante delito, porque ha confesado o porque existe suficiencia de elementos de convicción siendo esto así, no sería funcional aplicarlo a causas con varios imputados y de cierta complejidad Gálvez Villegas (2008).

La misma justificación posee dicha disposición al referir que los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumularán, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable.

1.4.2.5. Trámite del proceso.-

En relación a ello Neyra Flores (2010) manifiesta:

La incoación de este proceso corresponde al Fiscal, quien mediante requerimiento escrito se dirige al Juez de Investigación preparatoria, solicitando la aplicación del proceso inmediato.

La solicitud del Fiscal puede darse luego de culminar las diligencias preliminares, o también hasta antes de treinta días de formalizada la investigación preparatoria, cuando el fiscal considera que concurra en el caso concreto los supuestos detallados líneas arriba; dicho requerimiento debe ir acompañado del expediente o carpeta fiscal, forado en la investigación preliminar con los elementos probatorios existentes.

Todo ello sin perjuicio de solicitar *las medidas de coerción* que correspondan.

Este requerimiento ha de ser calificado por el Juez de la investigación preparatoria, quien deberá cautelar los derechos del imputado y garantizar su respeto. Así pues, realiza un control de forma y de fondo del requerimiento (cumpliendo las veces de un saneamiento procesal).

Luego de ello, el Juez, traslada el requerimiento al imputado y a las demás partes por el plazo de tres días, a fin de preservar su derecho de defensa.

Después de ello, y también en un plazo de tres días, el Juez decidirá directamente si procede el proceso inmediato o si se rechaza el requerimiento fiscal. De aceptarlo, dictará el auto de incoación del proceso inmediato y el Fiscal podrá formular su acusación.

La resolución que se emita es apelable con efecto devolutivo.

Notificado el auto que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procederá a formular acusación, la cual será remitida por el Juez de la Investigación preparatoria al Juez penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio.

De ser pertinente, antes de la formulación de la acusación, a pedido del imputado puede instarse la iniciación del proceso de terminación anticipada.

Notificado el auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal distará la Disposición que corresponda disponiendo la formalización o la continuación de la Investigación preparatoria.

1.4.2.6. Proceso Inmediato y Acusación Directa: Diferencias.-

La acusación directa se encuentra regulada en el numeral 4 del artículo 336° del NCPP, tal figura se muestra como una de las alternativas por las que el Fiscal, luego de determinar la existencia de un hecho, con matices de constituir un delito, puede optar para ejercitar la acción penal, es así que en el art. 336, se establecen dos opciones: Neyra Flores (2010)

- Formalizar denuncia y con ello se inicia la etapa de investigación preparatoria (art. 336°.1) o
- Acusar directamente (art. 336°.4)

Vemos pues, que a través de la acusación directa el titular de la acción penal, en el desarrollo de un proceso común, en lugar de disponer la continuación de la formalización de la investigación preparatoria, ACUSA.

El NCPP concede pues la facultad al Fiscal de acusar directamente sobre la base de los elementos de convicción obtenidos en la investigación preliminar. El fundamento jurídico de dicha facultad se halla en el principio de celeridad así como en el de legalidad, por el cual el fiscal, según la Constitución, tendrá la obligación de perseguir los delitos. Dicho principio se relaciona, ya en el ejercicio de dicha obligación, con el de oficialidad, por el cual no es necesaria la solicitud del agraviado, mucho menos la injerencia de órgano distinto a aquél.

Con ello, se pasa directamente a la etapa intermedia en la que dicha acusación se sujetará al respectivo control de contradictorio, tal como lo refiere el Acuerdo plenario N° 1-2008, que ha establecido que: “La acusación directa y el proceso inmediato son trámites diferentes. La acusación directa deber tener un previo control judicial por el Juez de la Investigación preparatoria...”

No obstante lo referido, la acusación directa se había interpretado como una remisión al proceso inmediato. Sin embargo, ello no puede ser así, por cuanto la acusación directa es parte del proceso común pero simplificado; en cambio, el proceso inmediato es un proceso especial con características propias que lo hacen diferente de otros procesos especiales y con mayor de la acusación directa de un proceso común¹⁵.

¹⁵ Exp. 33-2007. Sala de Apelaciones de La Libertad.

1.4.3. Definición Operacional y Conceptual de las Variables.-

Variables.-

- **Variable Independiente (X):** Proceso Inmediato
- **Variable Dependiente (Y):** Flagrancia

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Indicadores
X: Proceso Inmediato	El proceso inmediato es un instituto de naturaleza procesal que forma parte de los procesos especiales creado por el Código procesal penal del 2004, propiamente en el Libro V	El objeto principal de este proceso especial lleva por finalidad brindar una respuesta diferenciada y expedita a los delitos acaecidos en flagrancia, propiamente mediante la reducción de los plazos de espera y resolución	<ul style="list-style-type: none"> - Doctrina - Plan piloto - Normatividad. - Número de casos. - Ejecución - Debido proceso - Problemas
Y: Flagrancia	La flagrancia, si bien es un instituto de naturaleza estrictamente procesal en muchos ordenamientos se ha instaurado la figura a nivel constitucional. Se trata de un supuesto fáctico que el legislador determinó de forma excepcional y justifica, donde	De modo genérico se debe entender que una detención flagrante es la que se produce en los momentos en que un sujeto lleva a cabo la que se produce en los momentos en que un sujeto lleva a cabo la comisión del delito (flagrancia clásica)	<ul style="list-style-type: none"> - Doctrina - Jurisprudencia - Principios Procesales - Garantías Procesales - Normatividad. - Lineamientos generales para la aplicación del D. Leg. N° 1194. - Resolución administrativa - Manual procedimientos operativos. - Protocolo

	es posible lesionar derechos fundamentales de los ciudadanos de manera controlada y claramente establecida.		
--	--	--	--

1.4.4. Delimitación Teórica, espacial y temporal de la investigación.-

Teórica.-

La presente investigación tiene como área de investigación el Derecho Penal y Derecho procesal Penal, para ellos se harán uso de las teorías jurídicas a fin de justificar el problema de investigación, desarrollándose contenidos temáticos relacionados a los siguientes temas: flagrancia delictiva, bases supraconstitucionales, flagrancia, tipos de flagrancia, requisitos, el proceso inmediato, el proceso inmediato en el Perú, plan piloto flagrancias Perú.

Espacial.-

La presente investigación tiene como delimitación geográfica o espacial el ámbito nacional

Temporal.-

La investigación se ejecutará durante el año 2015 – 2016

1.5. Hipótesis.-

El proceso inmediato para delitos en flagrancia a propósito de su modificación por el Decreto Legislativo N° 1194, está cumpliendo sus fines al asegurar la eficacia y la celeridad de los procesos penales en caso de aquellos infractores de la ley penal que hayan sido capturados por la

Policía Nacional, a efectos de que no se acumulen procesos y con ello se agrave la sobrecarga procesal en los distritos judiciales del país

1.6. Objetivos.-

1.6.1. Objetivo General.-

Analizar y explicar los alcances jurídicos dogmáticos de la nueva regulación del proceso inmediato para delitos en flagrancia a propósito de su modificación por el Decreto Legislativo N° 1194.

1.6.2. Objetivos Específicos.-

- Explicar los aspectos problemáticos enfrenta la aplicación del proceso inmediato para delitos en flagrancia a propósito de su modificación por el Decreto Legislativo N° 1194.
- Describir el nivel de eficacia de la aplicación del proceso inmediato para los delitos de conducción en estado de ebriedad en el marco normativo del Decreto Legislativo 1194.
- Describir el nivel de eficacia de la aplicación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar en el marco normativo del Decreto Legislativo 1194.
- Explicar los criterios jurídicos y dogmáticos para la aplicación del proceso inmediato del proceso para delitos en flagrancia a propósito de su modificación por el Decreto Legislativo 1194,

CAPÍTULO II

MATERIAL Y MÉTODOS

II. MATERIALES Y MÉTODOS.-

2.1. Metodología de la Investigación.-

2.1.1. Tipo de Investigación.-

Corresponde a una investigación jurídica dogmática¹⁶; en su dimensión dogmática tuvo por finalidad ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema de investigación planteado, es decir sobre los alcances jurídicos dogmáticos de la nueva regulación del proceso inmediato para delitos en flagrancia a propósito de su modificación por el Decreto Legislativo N° 1194.

2.1.2. Diseño de Investigación.-

Con el propósito de resolver el problema, se partió del siguiente diseño de investigación en la cual se obtuvo información a partir de un grupo y en la modalidad de corte transversal en el tiempo.

Tipo de Diseño.-

Corresponde a la denominada No Experimental¹⁷, debido a que careció de manipulación intencional de la variable independiente, además no paseó grupo de control ni experimental; su finalidad será estudiar el hecho jurídico en el problema después de la ocurrencia.

Diseño General.-

Se empleó el diseño **Transversal**¹⁸, cuya finalidad fue recolectar datos del fenómeno de estudio del hecho jurídico en un sólo momento o en un tiempo único. Su propósito es

¹⁶ SOLIS ESPINOZA, Alejandro (1991). “Metodología de la Investigación Jurídico Social”, Lima, pp. 54 y ss.

¹⁷ ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). “Fundamentos de la investigación científica y jurídica”, Editorial Fecatt, Lima, p. 34.

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado; en el presente caso, está delimitado temporalmente para el periodo 2015 - 2016.

Diseño Específico.-

Se empleó el diseño causal – explicativo, toda vez que se estudió los factores que generan situaciones problemáticas dentro de un determinado contexto, como es el derecho penal nacional interno y poder explicar el comportamiento de las variables de estudio.

2.1.3. Método¹⁹.-Los métodos específicos que se emplearon en la investigación fueron:

Método Dogmático.- Encaminada al estudio e investigación de la doctrina con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la finalidad de pulir los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo normativo, estudiar las instituciones del Derecho con la finalidad de realizar construcciones correctamente estructuradas y proponerlas para su utilización.

El Derecho al estar conformado por instituciones, estos pueden ser explicados para el método dogmático en términos jurídicos sin apelar a consideraciones políticas, ideológicas o éticas. Este método se empleara en nuestra investigación para tratar de entender el problema de investigación a la luz de la doctrina y los planteamientos teóricos de los juristas.

Método Hermenéutico... La hermenéutica jurídica presupone necesariamente el manejo de los conceptos, nociones y dogmas que conforman la ciencia del Derecho. Los aplicadores del derecho tienen la enorme pero a la vez honrosa responsabilidad de otorgar sentido, a

¹⁸ HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010). “Metodología de la Investigación”, Editorial McGrawHill, Mexico, p. 151.

¹⁹ ZELAYARAN DURAND, Mauro (2000). “Metodología de la investigación jurídica”, Ediciones Jurídicas, Lima, pp. 65 y ss.

través de sus resoluciones judiciales, a la voluntad soberana del pueblo. En sentido amplio, éste método trata de observar algo y buscarle significado. En sentido estricto, siempre que los datos o las partes de un todo se presten a diferentes interpretaciones. En ese sentido, siendo nuestro objeto de estudio susceptible de diversas interpretaciones será necesario para poder hacer la teorización de nuestro trabajo emplear este método.

Método Exegético.- Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene además las características de ser puramente formal o conceptual, en donde se libere a la Ciencia Jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras disciplinas. Este método será aplicado en nuestro trabajo, toda vez que se hará el estudio la de normatividad vigente sobre nuestro problema de investigación.

Método Argumentación Jurídica.-

La argumentación jurídica es el medio con el cual se sustenta el Derecho. La argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar lógicamente por medio de un razonamiento formulado con el propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. En los procesos judiciales es necesario establecer por medio de la argumentación jurídica, el que se pueda probar los hechos, valiéndose de ciertos medios o indicios, que a menudo se contraponen unos a otros. La argumentación jurídica infiere, de los indicios, la existencia o inexistencia de otros hechos que son considerados, por la experiencia, como la única explicación práctica posible de tales indicios.

Respecto al proceso o los momentos o fases de la investigación, estos se plasmarán de la siguiente manera:

a) Planteamiento del problema: Comprende la individualización y descripción del problema, el planteamiento de una hipótesis directriz o de trabajo, y la adopción de métodos para el conocimiento del problema.

b) Construcción: Es la búsqueda de las fuentes del conocimiento jurídico, en ella observamos la fijación crítica de un texto, crítico de veracidad y trascendencia y sobre los datos contenidos veremos la extracción y fijación sobre materiales, sujetos y fuentes y la agrupación de los datos obtenidos. Papel fundamental es la ordenación de las fuentes, la cual puede ser:

- Bibliográficos: Datos sobre las fuentes.
- Bibliografía: Datos sobre autores y/o personas.
- Nemotécnicas: son citas, resúmenes u observaciones sobre materias determinados o que tienen alguna relación.
- Linografía: Datos sobre fuentes del internet.

c) Discusión: Donde se realizó la revisión crítica de los materiales obtenidos; se adoptan tesis y los métodos para su demostración, la tesis conduce a un plan de exposición y reagrupamiento del material según sea el plan proyectado por la síntesis unitaria del desarrollo de la tesis.

d) Informe final: el mismo que fue redactado siguiendo el estilo y técnica APA, que es el más adecuado para la presentación de informes científicos en las ciencias sociales.

2.1.4. Población y Muestra.-

2.1.4.1. Universo Muestral.-

Universo Físico.-

La delimitación geográfica estuvo constituida por las normas jurídicas del derecho interno²⁰, que regulan la aplicación del proceso inmediato para delitos en flagrancia a propósito de su modificación por el Decreto Legislativo 1194.

Universo Social.-

La Población o Universos accesible, estará conformador por la jurisprudencia especializada que genera el órgano jurisdiccional – poder judicial- en derecho procesal penal, específicamente en la aplicación del proceso inmediato para delitos en flagrancia a propósito de su modificación por el Decreto Legislativo 1194, que tiene como finalidad – dice la norma- de obtener resultados positivos en la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, entre otros, en beneficio de la sociedad en general.

Universo temporal.-

El periodo de estudio corresponde a los año 2015 – 2016.

²⁰ El Derecho interno es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre individuos o instituciones o de éstos con el Estado. El término se usa en contraposición al Derecho Internacional, que regula las relaciones entre Estados u otros de derecho Internacional.

2.1.4.2. Muestra.-

- a. Tipo:** No Probabilística.
- b. Técnica muestral:** Intencional²¹
- c. Marco Muestral:** Exegesis, doctrina y jurisprudencia respecto a la aplicación del proceso inmediato para delitos en flagrancia a propósito de su modificación por el Decreto Legislativo 1194.

2.1.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación.-

Estrategias o procedimientos de recolecta de información

- A.** Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos instrumentos serán las fichas Textuales y de Resumen y la Técnica del Análisis documental, con su instrumento la Ficha de análisis.
- B.** Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa información, se empleara el Método de la Argumentación Jurídica.
- C.** Para la obtención de información de la presente investigación se hizo a través del enfoque cualitativo lo que permitió recoger opiniones y valoraciones sobre el problema planteado. Es por esta razón que la presente investigación no perseguirá la generalización estadística sino la aprehensión de particularidades y significados aportados en la jurisprudencia, doctrina y el derecho comparado. Pero complementariamente, se empleará el enfoque cuantitativo para procesar y representar los datos empíricos que se obtengan.

²¹ Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras "representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. También puede ser que el investigador seleccione directa e intencionadamente los individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento es el utilizar como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso.

2.2. Procesamiento y Análisis de la Investigación.-

Análisis e interpretación de la información

Análisis de contenido. Cuyos pasos a seguir son:

- a) Selección de la información que será estudiada;
- b) Selección de las categorías que se utilizarán;
- c) Selección de las unidades de análisis, y
- d) Selección del sistema de medición e interpretación

Criterios: Los criterios a seguir en el presente proceso de investigación fue el siguiente:

Identificación del lugar donde se buscara la información.

Identificación y registro de las fuentes de información.

Recojo de información de la información en función a los objetivos de investigación, empleando técnicas e instrumentos de investigación pertinentes.

Sistematización de la información.

Análisis y evaluación de la información.

CAPÍTULO III

RESULTADOS

III. RESULTADOS.-

3.1. Presentación de la unidad de análisis.-

La unidad muestral en la presente investigación estuvo constituida por documentales tales como la doctrina, la jurisprudencia y la normatividad referente a la aplicación del proceso inmediato para delitos en flagrancia a propósito de su modificación por el Decreto Legislativo 1194.

Dada la naturaleza metodológica del presente trabajo de investigación, que es un estudio Jurídico – Doctrinal, el cual nos permite diferenciar el conocimiento jurídico de otros tipos de conocimientos. La investigación jurídico doctrinal tiene dos niveles. El primero es hermenéutico y el segundo teórico-dogmático o simplemente: Dogmático.

Una investigación jurídica – dogmática concibe el problema jurídico desde una perspectiva estrictamente formalista, descontando todo elemento fáctico o real que se relacione con la institución o especie legislativa.

Por lo que en el presente trabajo de investigación titulado análisis jurídico dogmático del proceso inmediato para delitos en flagrancia en el contexto del decreto legislativo 1194, periodo 2015-2016, se inspira en el método dogmático, por lo que visualizaremos el problema jurídico solo a la luz de las fuentes formales, y como consecuencia, su horizonte se limitará a las normas legales o instituciones en los que está inscrito el problema. . No serán parte de nuestra labor inquisitoria los factores reales que han generado esa normatividad. Por lo que consideramos como pregunta del método dogmático consiste en averiguar la naturaleza jurídica de la institución jurídica procesal penal, denominada proceso inmediato para delitos en flagrancia a propósito de su modificación por el Decreto Legislativo 1194

El método dogmático alcanza un mayor rigor teórico. Mientras que la exegesis –método que también utilizamos en el presente trabajo de investigación, trabaja fundamentalmente con

normas legales, la dogmática recurre a la doctrina nacional y extranjera, el Derecho comparado, y ocasionalmente, a la jurisprudencia. (Ramos, 2014)

3.2. Resultados Teóricos.-

3.2.1. La implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la modificación del Proceso Inmediato.

Al respecto Huaylla Marín (2015) sostiene:

Con la implementación progresiva en el Perú del Código Procesal Penal de 2004 se ha venido consolidando un sistema de justicia penal acorde a los estándares de rango constitucional, donde predomina un modelo acusatorio adversarial con características propias, como son:

La separación de funciones de investigación y juzgamiento, así como la activa participación de las partes procesales para la dilucidación de los hechos controvertidos;

Equilibrio entre garantía y eficacia, que pretende ponderar el respeto de los derechos fundamentales del imputado con la eficacia en la persecución del delito por parte de los órganos integrantes del sistema de administración de justicia;

Racionalidad del proceso penal, lo que significa que el sistema, dado que cuenta con escasos recursos para la persecución del delito, debe concentrar su atención en la solución de aquellos casos que no son relevantes pueden ser solucionados a partir de mecanismos de negociación previstos legalmente, respetando en todo momento los derechos de la víctima como del imputado; y

La configuración del proceso penal en función a la constitución, que implica que el nuevo proceso penal se erige en estricta observancia de lo dispuesto por los principios y derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política, así como a lo señalado en los diversos tratados internacionales que forman parte del Derecho Nacional.

Son casi diez años de vigencia del Código Procesal Penal en el Perú y en casi todos los distritos judiciales y fiscales, a excepción de Lima, se viene aplicando dicho cuerpo normativo en su integridad. El proceso de su implementación fue de carácter progresivo, basado en factores como la complejidad, aprendizaje, población, aspectos geográficos, variables políticas, presupuesto, recursos humanos, informática e infraestructura.

Todo ello debido a que cada distrito ha ido forjando prácticas idóneas en la aplicación del nuevo modelo código procesal penal, lo que ha permitido evaluar la marcha de la reforma y realizar los ajustes necesarios en su funcionamiento.

3.2.2. Análisis del decreto legislativo N° 1194 a propósito de su modificación.-

El 30 de agosto de 2015, se publicó en el diario oficial. *El Peruano* el Decreto Legislativo N° 1194, que regula y modifica el proceso inmediato, previsto en los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal, ello con la única finalidad dice la norma de obtener resultados positivos en la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, entre otros, en beneficios de la comunidad en general.

Debemos precisar, independiente de la finalidad del mencionado decreto legislativo, que el proceso penal constituye un instrumento de represión procesal que se activa únicamente ante la comisión de un hecho delictivo, es decir, consideramos que dicho decreto legislativo tiene como finalidad acelerar las investigaciones penales, mas no hacer frente a la delincuencia, pues para ello es necesario imponer otro tipo de políticas públicas. (Miranda, 2007, p. 43).

El Código Procesal Penal en el Perú viene implementando nuevas instituciones procesales, cuya finalidad ha sido de dotar de flexibilidad, agilidad y eficacia a los casos penales investigados; sin embargo, lejos de lograr que los procesos penales puedan culminar de manera más rápida, fundamentalmente en delitos de bagatela, muchos de ellos culminan en la etapa de juzgamiento. Es por ello que la iniciativa legislativa analizada tiene como objetivo fundamental racionalizar el proceso penal, lo que significa que el sistema de administración de justicia dado que el Estado cuenta con escasos recursos para la persecución del delito debe concentrar su atención en la solución inmediata de aquellos casos en los que se cuenta con la suficiencia probatoria para culminarlos exitosamente con una sentencia condenatoria, claro está, privilegiando los mecanismos de negociación previstos legalmente.

Veamos las modificaciones que nos trae el proceso inmediato:

Artículo 446	
Texto original	Texto actual
El Fiscal podrá solicitar la vía del proceso inmediato, cuando: a) el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito; o, b) el imputado ha confesado la comisión del delito; o, c) los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.	El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259; b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160; c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.
	Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean necesarios ulteriores actos de investigación.
Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo será posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumularán, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable.	Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable.
	Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3

	del artículo 447 del presente Código.
Artículo 447	
El Fiscal, sin perjuicio de solicitar las medidas de coerción que correspondan, se dirigirá al Juez de la Investigación Preparatoria formulando el requerimiento de proceso inmediato. El requerimiento se presentará luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria.	<p>Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes al requerimiento fiscal, realiza una Audiencia única de Incoación para determinar la procedencia del proceso inmediato. La detención del imputado se mantiene hasta la realización de la Audiencia.</p> <p>Dentro del mismo requerimiento de incoación, el Fiscal debe acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. El requerimiento de incoación debe contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 336.</p> <p>En la referida Audiencia, las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según corresponda.</p> <p>La Audiencia única de Incoación del proceso inmediato es de carácter inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. El Juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia</p>

	<p>oralmente en el siguiente orden, según sea el caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal; b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes; c) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato. <p>El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada, de modo impostergable, en la misma Audiencia de Incoación. La resolución es apelable con efecto devolutivo.</p> <p>Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la Investigación Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448.</p> <p>Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dicta la Disposición que corresponda o la formalización de la Investigación Preparatoria.</p> <p>Para los supuestos comprendidos en los literales b) y c), numeral 1 del artículo 446, rige el procedimiento antes descrito en lo que corresponda. Solo en estos supuestos, el requerimiento se presenta luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria.</p>
Artículo 448	

<p>El Juez de la Investigación Preparatoria, previo traslado al imputado y a los demás sujetos procesales por el plazo de tres días, decidirá directamente en igual plazo de tres días, si procede el proceso inmediato o si se rechaza el requerimiento fiscal. La resolución que se emita es apelable con efecto devolutivo.</p> <p>Notificado el auto que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procederá a formular acusación, la cual será remitida por el Juez de la Investigación Preparatoria al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio.</p> <p>De ser pertinente, antes de la formulación de la acusación, a pedido del imputado puede instarse la iniciación del proceso de terminación anticipada.</p> <p>Notificado el auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dictará la Disposición que corresponda disponiendo la formalización o la continuación de la Investigación Preparatoria.</p>	<p>Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, El Juez penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional.</p> <p>La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la Audiencia, bajo apercibimiento de prescindirse de ellos.</p> <p>Instalada la Audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 349. Si el Juez Penal determina que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350, en lo que corresponda. El Juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos de validez de la acusación de conformidad con el numeral 1 del artículo 350 y resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y oral.</p> <p>El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. El Juez Penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta Sección, se aplican las reglas del proceso común, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato.</p>
--	--

3.2.3. Obligatoriedad de la incoación del proceso inmediato.-

Esta ha sido la principal modificatoria en lo que al trámite del proceso inmediato se refiere, pues mientras anteriormente ello constituía una facultad (“podrá”) del ente persecutor, hoy en día constituye una obligación (“debe”) **bajo responsabilidad funcional**. Sin embargo, ello no debe entenderse en función a la literalidad de la norma sino, por el contrario, en función a la finalidad del procedimiento especial, que es lograr la celeridad de las investigaciones sin utilizar plazos innecesarios con miras a lograr una sentencia condenatoria.

Esto significa, a modo de ejemplo, que de existir un delito de hurto cometido en flagrancia, donde exista la declaración de la parte agraviada, de los efectivos policiales que realizaron la intervención, así como la aceptación de los cargo del propio investigado, lo que corresponde es que el fiscal, durante las primeras 24 horas que es un plazo que forma parte de las diligencias preliminares, inste un criterio de oportunidad y así culminar el proceso sin necesidad de judicializarlo.

Si no es posible aplicar un criterio de oportunidad en esas 24 horas, lo único que le queda al fiscal es incoar el proceso inmediato. Con ello pretendemos explicar que cuando la norma se refiere el “deber” del fiscal de incoar el proceso inmediato, ello no debe entenderse que en todos los casos debe hacerlo, sino únicamente cuando el proceso no queda culminarse con otro mecanismo alternativo.

3.2.4. Excepción a la incoación del proceso inmediato.-

El artículo 446 inciso 1 obliga al ente persecutor solicitar la incoación del proceso inmediato ante supuestos de flagrancia, confesión o evidentes elementos de convicción.

Sin embargo, pueden existir casos en donde, pese a encontrarnos en alguno de los supuestos antes indicados, sea necesario realizar ulteriores actos de investigación por la complejidad del caso.

Ante esta situación el fiscal tramitará la investigación conforme a las reglas del proceso común (art. 446 inc.2). Esto último no significa perder la posibilidad de incoar el proceso inmediato, pues, de complementar todos los actos de investigación y obtener evidente elementos de convicción dentro del plazo de las diligencias preliminares o antes de los treinta días de formalizada la investigación preparatoria, el fiscal podrá plantear el proceso inmediato (art. 446 inc. 1 lit. c) en concordancia con la parte final del art.447).

Cabría también preguntarnos qué sucede si estamos ante un caso de flagrancia delictiva y el proceso no amerita ser declarado complejo, pero falta recabar un elemento de prueba indispensable, que será imposible de obtener en esas 24 horas, como por ejemplo las pruebas de dosaje etílico, los resultados de adsorción atómica, etc. Consideramos que, ante estos casos, el fiscal tendrá que fundamentar adecuadamente la razón de la imposibilidad de obtener los resultados de dichas prácticas, a fin de que el proceso de trámite bajo las reglas del proceso común.

3.2.5. Diferencias entre la acusación directa y el proceso inmediato.-

ACUSACIÓN DIRECTA	PROCESO IMEDIATO
Es parte del proceso común	Es un proceso especial distinto del proceso común.
Tiene como supuestos: Que las diligencias actuadas preliminarmente establecen: a) Suficientemente la realidad del delito y, b) La intervención del imputado en su comisión.	Tiene como supuestos: a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito; b) El imputado ha confesado la comisión del delito; o. c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, son evidentes.
No hay formalización de la investigación preparatoria.	Se solicita una vez concluidas las diligencias preliminares o hasta los 30

	días de formalizada la investigación preparatoria.
Nunca existe una investigación preparatorio	Puede existir la investigación preparatoria (solo 30 días).
El Fiscal acusa directamente con los resultados de las diligencias preliminares.	No acusa directamente pues tiene que enviar al Juez de la Investigación preparatoria el requerimiento de incoación del proceso inmediato, para su respectiva aprobación.
Existe la etapa intermedia, antes del juicio oral.	No existe la etapa intermedia, se pasa directamente a juicio oral.
Se da en flagrancia, con el imputado ausente o contumaz o cuando ha fugado de la investigación preliminar.	Se exige la presencia del imputado, aunque el imputado no acepte el delito.
Quien decide sobre su aplicabilidad en el Fiscal, pero se debe recordar que existe una etapa intermedia.	Quien decide sobre si procede o no es el Juez de Investigación preparatoria. Previa incoación del proceso por parte del Fiscal.
No necesita que el imputado haya declarado.	El imputado obligatoriamente tiene que haber declarado ante el Fiscal.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

IV. ANALISIS Y DISCUSIONES.-

4.1. Análisis y Discusiones.-

4.1.1. Problemáticas en el Proceso Inmediato.-

Con la vigencia del Código Procesal Penal fueron muchos los problemas que se han presentado desde el punto de vista normativo y operativo, lo que ha llevado a la elaboración de un sinnúmero de análisis, estudios, modificaciones legislativas e informes que han tenido como finalidad generar que el sistema avance adecuadamente. Sin embargo, un gran número de problemas aún persisten y no han sido solucionados o, si bien se ha pretendido solucionarlos, no tienen efectos positivos en la práctica procesal.

a) Es así que se han presentado problemas de aplicación práctica en cada una de las etapas del proceso penal así como de interpretación normativa. Entre los problemas más resaltantes que se han presentado y que mencionare a propósito de la modificación del proceso inmediato son:

La elevada carga procesal que viene en aumento conforme avanza el proceso de implementación.

Muestra de ello es la carga que tienen actualmente los distritos judiciales de la Libertad, Lambayeque, Arequipa, entre otros, lo que conlleva muchas veces al incumplimiento de los plazos legales, embalsamiento de audiencias en etapa de juzgamiento, deficiencias en investigación al no poder conocer un caso minuciosamente, etc.

La gran incidencia de delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción de vehículo en estado de ebriedad en casi todos los distritos judiciales del Perú. Para muestra de ello debemos recurrir a la información estadística de la comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que muestra el impacto de los delitos de omisión a la asistencia familiar en el nuevo sistema de justicia penal. Esto también ha sido reflejado en la exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 1194.

Al respecto debemos mencionar que uno de los cuellos de botella que se presenta a nivel nacional, y con mayor medida en los distritos judiciales que tienen mayor tiempo de vigencia del Código Procesal Penal, es la gran incidencia de delitos de escasa lesividad que ingresan al

sistema penal y que no pueden ser solucionados preliminarmente mediante mecanismos alternativos.

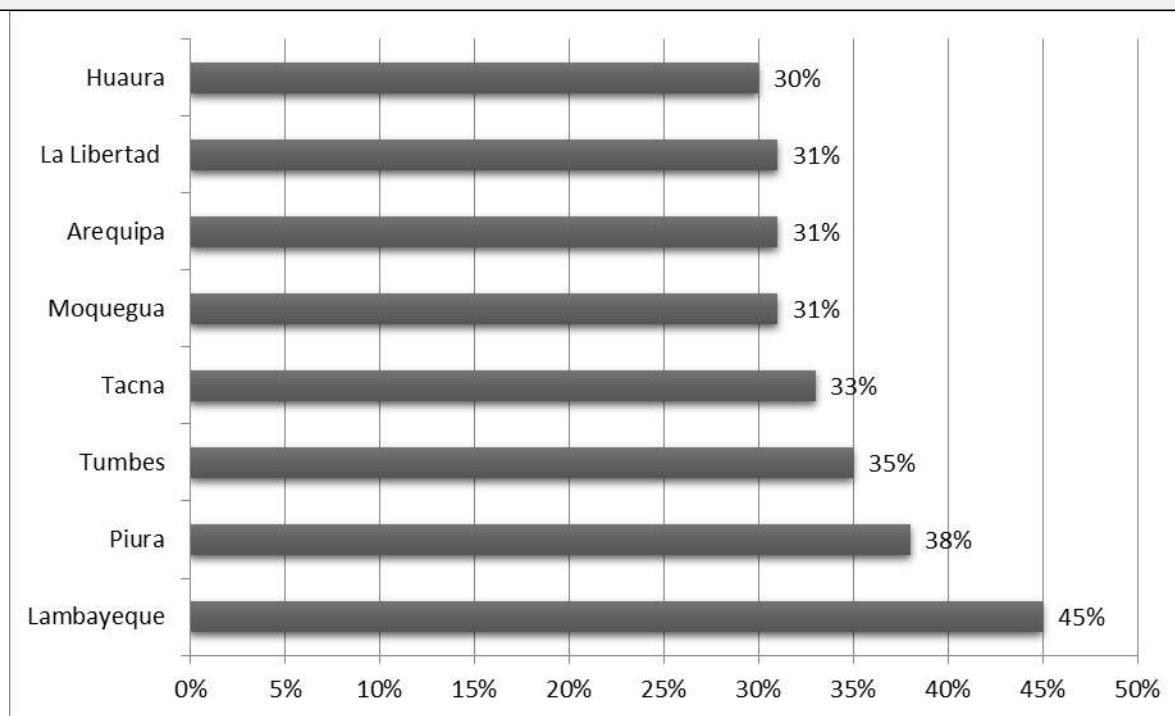
Esta gran incidencia de casos también afecta la etapa de investigación preparatoria y la etapa intermedia, ya que pese a existir altas posibilidades de culminar las causas preliminarmente, muchas de ellas no logran dicha finalidad y continúan con el proceso hasta llegar a juicio oral. (Huaylla Marín, 2014, p. 279-292).

Por su parte, el Poder Judicial también cuenta con gran cantidad de audiencias programadas en etapa intermedia juzgamiento como consecuencia de procesos relativos a omisión a la asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad, entre otros, que fácilmente pueden culminar con los mecanismos alternativos que la ley otorga.

A modo de ejemplo, a continuación presentamos dos gráficos que dan cuenta del porcentaje de delitos de omisión a la asistencia familiar en la etapa intermedia y juzgamiento, en los distritos judiciales de Huara, La Libertad, Tacna, Moquegua, Arequipa, Tumbes, Piura y Lambayeque.²² Como referencia tomemos el Distritos Judicial de Lambayeque. En dicho distrito, del 100% de delitos que han ingresado a la etapa intermedia, 45% corresponden a delitos de omisión a la asistencia familiar, mientras que el saldo corresponde a otras modalidades de delitos.

²² Reporte estadístico de la aplicación del Código Procesal Penal. Junio 2010 – Junio 2011. www.minjus.gob.pe/cpp/docu

Gráfico 1: Delito de omisión a la asistencia familiar en etapa intermedia

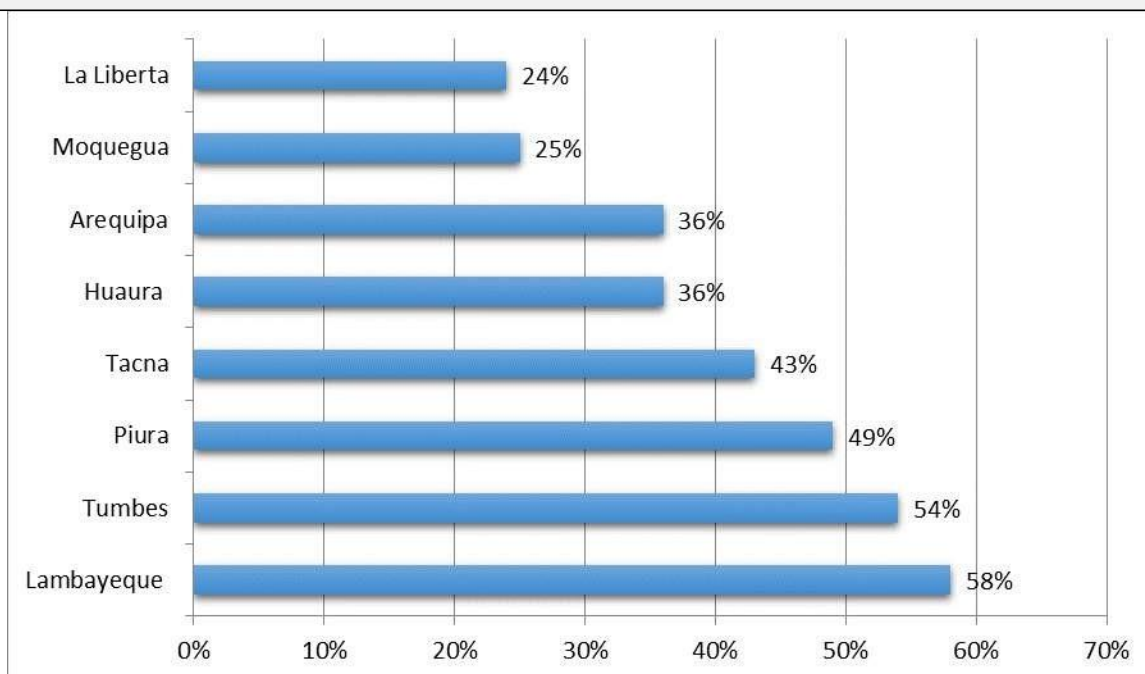


Fuente: Base de datos de ST-CEI-CPP
Periodo: Junio de 2010 – Junio de 2011

De igual forma, del 100% de delitos que han ingresado a la etapa de juzgamiento en el distrito judicial de Lambayeque, el 58% corresponden a delitos de omisión a la asistencia familiar y el saldo a otro tipo de delitos.

En el Distrito Judicial del Santa, la incidencia estadística es la misma. Así tenemos que en el periodo de Junio 2012 a mayo 2013 los delitos de omisión a la asistencia familiar fueron de 65.01% mientras que los de conducción de vehículo en estado de ebriedad alcanzaron el 5.51%, siendo los delitos de mayor incidencia. Asimismo, en el periodo de junio de 2013 a mayo de 2014 los delitos de omisión a la asistencia familiar representaron el 60.58 % mientras que los de conducción de vehículo en estado de ebriedad el 6.94%. De otro lado, a nivel de juzgados unipersonales, en el periodo de junio de 2012 a mayo de 2013, la incidencia de este tipo de delitos fue de 47.37% mientras que en el periodo de junio de 2013 a mayo de 2014 la incidencia fue de 68.75%.

Gráfico 2: Delito de Omisión a la asistencia familiar en juzgamiento



Fuente: Base de datos de ST-CEI-CPP
Periodo: Junio de 2010 – Junio de 2011

b) Otro problema que se presentó durante el proceso de implementación fue el relacionado a la citación de los órganos de prueba en juicio oral, es decir, se debatía respecto a qué se debe entender por “coadyuvar en la localización y comparecencia de los testigos o peritos que se hayan propuesto”, pues algunos consideraban que era obligación del Ministerio Público hacer concurrir a sus órganos de prueba, mientras otros tenían como criterio el asumido por nuestra Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 5-2012/CJ-116, que prescriba la interpretación que debe realizarse el artículo 355.5 del Código Procesal Penal, en el sentido de que las citaciones a los testigos y peritos se llevan a cabo por el personal a cargo de la autoridad jurisdiccional, conforme con el artículo 366.

Así también, precisa el acuerdo plenario que siempre el personal auxiliar del juzgado citará a testigos y peritos sin perjuicio de que coadyuven con ello las partes. Esto se confirma con la previsión contenida en el artículo 366. Culmina la Corte Suprema indicando que el fin de la norma no es que en todos los casos el Ministerio Público y las demás partes procesales citen a sus testigos y peritos, sino que únicamente coadyuven a este propósito.

Es el órgano judicial el que hace el juicio, capta la información y expide resoluciones orales o escritas, mientras que es el área administrativa la que cita a los órganos de prueba (en función a la información que aquellos brinden).

c) Otro problema surge precisamente respecto al proceso inmediato. La propia Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116 estableció que en el proceso inmediato, al no contar con fase intermedia, no se tiene un momento específico en el que el imputado y las demás partes realicen aportaciones de medios probatorios, por lo que el acusado ingresaría en desventaja al juicio. Asimismo, que no hay oportunidades para que las partes procesales puedan constituirse como tales.

Debemos agregar también que en el proceso inmediato se cuestiona la imparcialidad del juez de juzgamiento al ser el mismo juez el que analizara las pruebas ofrecidas, y el que con base en esas pruebas emita su decisión final. Es por ello que la Corte Suprema ha precisado que el juez de juzgamiento realizará el control de los medios ofrecidos al inicio del juicio, sin que ello afecte el principio de imparcialidad, toda vez que la regla con base en la cual el ofrecimiento y admisión probatoria deben realizarse en la etapa intermedia no puede ser entendida como absoluta y menos aún en el contexto de un proceso especial que se rige por pautas propias.

Finalmente, la Corte Suprema precisa que al inicio del juicio oral las partes tendrán oportunidad para solicitar la constitución en el proceso, indicando además que la mayor garantía de imparcialidad se comprobaba con la resolución debidamente motivada que expedirá el juez penal el respecto.

d) La poquísima indecencia del proceso inmediato en el Perú²³ ha generado que se utilice en mayor incidencia la denominada acusación directa prescrita en el artículo 336 inciso 4, fundamentalmente para delitos de escasa lesividad, habiendo incluso tenido resultados positivos en todo el territorio peruano donde se viene aplicando el Código Procesal Penal, al haber generado en el menor tiempo posible la solución de conflictos penales, en tanto no haya existido otro mecanismo alternativo para la solución del mismo.

e) La continuidad y concentración de las audiencias de juicio oral, ha constituido otro de los problemas del sistema de justicia penal, toda vez que a nivel de juzgamiento existe una gran incidencia de delitos que hacen imposible muchas veces que los juicios terminen en forma inmediata, siendo necesaria su reprogramación para fechas próximas. La continuidad como principio principal del juicio oral, impone como regla la mayor aproximación posible entre el inicio del debate y la sentencia, siendo aconsejable técnicamente que no se intercale otro debate entre ambos actos, pues cuando deben realizarse dos o más audiencias, han de ser consecutivas hasta la terminación del debate, no obstante, pueden tolerarse excepciones que permiten suspender el curso del debate por un tiempo prudencial, transcurrido el cual se producirá la interrupción.

Uno de los principios básicos del juicio oral es su continuidad, es decir, la audiencia del juicio oral se debe desarrollar en forma continua, sin interrupciones, aunque si se prolonga por más de

²³ Reporte estadístico de la aplicación del Código Procesal Penal. Junio 2010 – Junio 2011.
www.minjus.gob.pe/cpp/docu

un día, deberá proseguir en sesiones sucesivas, hasta su conclusión. En consecuencia, la audiencia solo podrá suspenderse por razones de absoluta necesidad, por el tiempo necesario de acuerdo al motivo de la suspensión, debiendo comunicarse verbalmente la fecha y hora de su continuación. En todo caso, la suspensión de la audiencia o la interrupción del juicio oral impedirán su continuación, debiendo el tribunal decretar en muchos casos su nulidad y ordenar su posterior reinicio.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

5.1. CONCLUSIONES.-

PRIMERO: Respecto a la eficacia y celeridad procesal, concluimos que: este tipo de procesos lo que busca es, entre otras cosas, asegurar la eficacia y la celeridad de los procesos penales en caso de aquellos infractores de la ley penal que hayan sido capturados por la Policía Nacional, a efectos de que no se acumulen procesos y con ello se agrave la sobrecarga procesal en los distritos judiciales del país

SEGUNDO: Respecto a la respuesta del Estado frente a la inseguridad Ciudadana, concluimos que: El procedimiento para los delitos en flagrancia emerge como un mecanismo para lograr una justicia conforme a un servicio público de calidad (justicia pronta y cumplida), donde se potencian las garantías de todas las partes de ser oídas y de acceso a la justicia, sin detrimento de las garantías legales y procesales.

TERCERO: Respecto a la celeridad procesal, concluimos que: el proceso de flagrancia pretende la disminución de los tiempos de respuesta estatal a los delitos , la aceleración del proceso, la disminución de los presos sin condena, el ataque a la criminalidad continua (reincidencia)

CUARTO: Respecto al proceso inmediato a raíz de la modificación por el Decreto Legislativo N° 1194, concluimos que: la modificación del proceso inmediato es una interesante iniciativa legislativa, cuyo objetivo primordial es simplificar aún los plazos de investigación, así como las diferentes etapas procesales.

QUINTO: respecto a los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar, concluimos que: a nivel preliminar, los delitos de omisión a la asistencia familiar seguirán su trámite habitual, con la única diferencia que en lugar de acusar directamente se tendrá que incoar el proceso inmediato.

SEXTO: respecto a los mecanismos de resolución de conflictos, concluimos que: los mecanismos alternativos de solución del conflicto penal seguirán aplicándose a nivel fiscal. En delitos de omisión a la asistencia familiar se aplicarán durante los 60 días de plazo de las diligencias preliminares y en los delitos de conducción d estado de ebriedad, dentro de las 24 horas de detención, entendiendo que este último plazo forma parte de las diligencias preliminares.

SÉPTIMO: respecto a la incoación del proceso, concluimos que: el “deber” de incoar un proceso inmediato no debe entenderse como uno de carácter absoluto, sino que dicha obligación procederá únicamente cuando el proceso no pueda solucionarse mediante otras vías alternativas.

OCTAVO: respecto al plazo, concluimos que: tratándose de procesos donde sea imposible obtener pruebas o resultados periciales en el plazo de 24 horas, el fiscal tramitará la causa bajo el proceso común, teniendo como parámetro para fundamentar dicha decisión la imposibilidad de su obtención o lo establecido en el artículo 477 inciso

5.2. RECOMENDACIONES.-

Luego de haber evaluado los datos y analizado las respuestas de las encuestas se recomienda lo siguiente:

A los operadores del Derecho:

Los operadores del Derecho deben permanentemente capacitarse para poder enfrentar con éxito temas que tengan relación con el Derecho Procesal Penal y en concreto con la aplicación del proceso inmediato para delitos en flagrancia.

A las autoridades de la universidad.-

A las autoridades que dirigen las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas del nuestro medio; el problema planteado en el presente trabajo de investigación debe ser objeto de estudio por todos los sectores académicos dedicados a la investigación y al que hacer científico – catedráticos y estudiantes – para lo cual deben considerar en sus planes de estudio- cursos electivos- plantear el desarrollo de temas actuales como el derecho procesal penal en el contexto de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y/o generar espacios de capacitación y actualización permanente.

A los representantes del Poder Judicial.-

Se deben establecer mecanismos estratégicos para mejorar la organización a nivel de despacho judicial, y así poder lograr el éxito de este procedimiento especial, evitando el congestionamiento del sistema tanto a nivel de la investigación preparatoria como del juzgamiento.

A los representantes del Ministerio Público.-

Los fiscales deben implementar estrategia adecuadas para solucionar los casos en etapas preliminares, es decir, se debe incidir en la utilización de mecanismos de negociación tanto a nivel fiscal como judicial.

CAPÍTULO VI

AGRADECIMIENTO

VI. AGRADECIMIENTO.-

A mi esposo, y mis padres por todo su amor, apoyo y comprensión.

A mis maestros de la universidad San Pedro por su paciencia y dedicación.

CAPÍTULO VII

REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.-

Doctrina:

Araya Vega, Alfredo G. (2014). La prison preventiva. Desde la perspectiva constitucional, dogmática y de control de convencionalidad. Lima. Editorial Ideas.

Araya Vega, Alfredo G. (2015). El delito en flagrancia. Analisis y propouestas de un nuevo proceso especial. Lima. Editorial Jurista Ideas.

Araya Vega, Alfredo G. (2016). Nuevo proceso inmediato para delitos en flagrancia. Editorial Jurista editores, Lima - Perú

Aranzamendi Ninacondor Lino (2013) Guía de Redacción Científica. Editorial Grijley, Lima – Perú.

Aranzamendi Ninacondor Lino (2010) La investigación jurídica: Diseño del proyecto de investigación y estructura y redacción de la tesis. Editorial Grijley, Lima – Perú.

Aranzamendi Ninacondor Lino (2011) Fundamentos epistemológicos de la investigación básica y aplicada del Derecho. Editorial Grijley, Lima – Perú.

Armenta, D. T. (1991). *Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad*. Alemania Y España: PPU.

Caro Coria, Juan Carlos (2001). Las garantías constitucionales. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, año 12, tomo II, Programa Estado de Derecho para Sudamérica.

Céspedes Murillo, Julio C (2014). “El criterio de oportunidad en el proceso inmediato” [blogspot] Perú. <http://juliocespedesm.blogspot.pe/2014/02/el-criterio-de-oportunidad-en-el.html> (Opiniones sobre temas jurídicos)

- Cueva Zavaleta, Jorge Luis (2008) La Investigación Jurídica: Pautas metodológicas para elaborar el trabajo de investigación en el ámbito del Derecho. 1 era Edic. Trujillo – Perú.
- Ferrajoli, Luigi. (1995) Derecho y Razon . Madrid, Editorila Trotta.
- Gaceta Penal y Procesal Penal (2015) Tomo 76/ Octubre 2015. El Proceso Inmediato, La nueva configuración del proceso inmediato, analisis del decreto legislativo N° 1194.
- Gaceta Penal y Procesal Penal (2015) Tomo 78/ Diciembre 2015. El proceso inmediato : analisis al Decreto Legislativo N° 1194.
- Hernández Sampiere y Otros (2006) Metodología de la Investigación. 4ta Edic., México DF.
- Huaylla Marin, José (2015). El proceso inmediato: a proposito de su modificación por el Decreto Legislativo N° 1194. Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 77/ Noviembre.
- Neyra Flores, José Antonio (2010): “Manual del Nuevo Proceso Penal y de Litigación Oral”. Fondo Editorial IDEMSA. Lima.
- Maier, J. (1996). Derecho procesal penal. Buenos Aires: Puerto S.R.L.
- Manzini, V. (1951). Tratado de derecho procesal penal. Buenos Aires: Ejea.
- Miranda Estrampes, Manuel. El populismo penal (analisis crítico del modelo penla securitario). En: Jueves para la democracia. N° 58,2007.p.43.
- Peña Cabrera. R. (1994). Tratado de derecho penal. Lima: Ediciones juridicas.
- PNUD- Costa Rica, (2009). Venciendo el temor , inseguridad ciudadana y desarrollo humano en Costa Rica. Informe Nacional Nacional de Desarrollo Humano.
- PNUD- Costa Rica, (2009) Foro sobre Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana, Propuestas para la Acción.
- Ramos Núñez C. (2010). Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento. Gaceta Jurídica. Lima – Perú.
- Robles Trejo L. y otros (2012). Fundamentos de la Investigación científica.

Riquert, Marcelo A. (2006). El Proceso de flagrancia: Oralidad, simplificación y garantía.

Buenos Aires. Editorial Ediar.

San Martín Castro, Cesar. (2003) Derecho procesal penal. tomo II. 2DA edición.

GRILEY. Lima.

San Martín, C. C. (2000). Derecho procesal penal. Lima: Grijley.

Talavera Elguera, Pablo. (s/f). Los procesos especiales en el Nuevo Código Procesal

Penal.

Vázquez Rodríguez, Miguel Ángel (2012). “Los problemas y las soluciones al proceso inmediato en el acuerdo plenario 6-2010/cj-116”. [blogspot] Perú.

<https://detorquemada.wordpress.com/2012/01/09/proceso-inmediato-acuerdo-plenario-6-2010-cj-116/> (Derecho Procesal Penal y otros temas de derecho en general)

Zaffaroni Eugenio Raúl y Carranza Lucero, Elias. (2007) Los Derechos Fundamentales en la instrucción penal en los países de América Latina, Compilación, México Df. Editorial Porrúa. México.

Instrumentos Internacionales.-

- Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica en 1969.
- Convenio Europeo sobre Salvaguarda de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (suscrito en Roma en 1950)

Jurisprudencia

Acuerdo Plenario N° 06 – 2016/CJ - 116

Normas Jurídicas

Constitución Política del Perú – 1993, del 31 de diciembre de 1993.

Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, del 08 de abril de 1991.

Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957, del 29 de julio de 2004.

Decreto Legislativo N° 1194. , que modifica el Artículo 466° y ss. del NCPP de 2004.

Resolución Administrativa N° 314 -2015-CE-PJ

Resolución Administrativa N° 314 -2015-CE-PJ- Lineamientos Generales para la aplicación del D. Le. N° 1194.

Resolución Administrativa N° 347 -2015-CE-PJ. Manual de procedimientos operativos (MAPRO)

Directiva N° 005-2015-MP-FN- Actuación fiscal en caso de detención en flagrancia delictiva, proceso inmediato y requerimiento de prisión preventiva.

CAPÍTULO VIII

ANEXOS



ANEXO N° 01:

ACUERDO PLENARIO N° 06 – 2010/CJ – 116



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

**VI PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES
PERMANENTE Y TRANSITORIAS**

ACUERDO PLENARIO N° 6-2010/CJ-116

**FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO
LOPJ**

ASUNTO: ACUSACIÓN DIRECTA Y PROCESO INMEDIATO

Lima, dieciséis de noviembre de dos mil diez.—

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1°. Las Salas Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la autorización de la Presidencia de esta Suprema Corte dada mediante Resolución Administrativa N° 165-2010-P-PJ, y a instancias del Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el VI Pleno Jurisdiccional de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial —en adelante, LOPJ—, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.

2°. El Pleno Jurisdiccional se realizó en tres fases.

En la primera fase los Jueces Supremos discutieron y definieron la agenda para lo cual tuvieron en cuenta los diversos problemas y cuestiones de relevancia jurídica que han venido conociendo en sus respectivas salas en el último año. Fue así como se establecieron los siete temas de agenda así como sus respectivos problemas específicos.

La segunda fase, denominada participación ciudadana, tuvo como finalidad promover la intervención y el aporte de la comunidad jurídica del país para la solución de cada uno de los problemas antes planteados. Para ello se habilitó el foro de participación a través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo logrado con ello una amplia participación de diversas instituciones de la capital así como de diversas provincias del país a través de sus respectivas ponencias. Luego de una debida selección de las ponencias presentadas, se realizó en fecha 4 de noviembre la audiencia pública en la que los representantes de todas las instituciones acreditadas sustentaron y debatieron sus respectivas ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de ambas Salas Penales.

En dicha audiencia, con relación al tema que aborda el presente Acuerdo, sustentaron su ponencia los señores Mario Rodríguez Hurtado —en representación del Instituto de Ciencia Procesal Penal—; Ana Cecilia Hurtado Huailla —en representación del



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
VI PLENO JURISDICCIONAL PENAL

Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa—; y Miguel Falla Rosado —en representación del Centro para la Investigación y Mejora de la Calidad en el Servicio de la Justicia – Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo—, las mismas que se han tenido en cuenta para en la discusión del presente Acuerdo Plenario. Es así como finalmente se expide el presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el Artículo 116° de la LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a dictar este tipo de Acuerdos con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su especialidad.

3º La tercera fase del VI Pleno Jurisdiccional comprendió ya el proceso de discusión y formulación de los acuerdos plenarios cuya labor recayó en los respectivos Jueces Ponentes en cada uno de los siete temas. Esta fase culminó el día de la sesión plenaria realizada en la fecha con participación de todos los jueces integrantes de las Salas Permanente y Transitoria, interviniendo todos con igual derecho de voz y voto. Es así como finalmente se expide el presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el artículo 116° LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a dictar este tipo de Acuerdos con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su especialidad.

4º. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia lo debatido en audiencia pública sobre diversos aspectos de la acusación directa y el proceso inmediato. En concreto, sobre los alcances y diferencias de ambas instituciones según lo regulado por el Nuevo Código Procesal Penal —en adelante, NCPP—. Respecto a la acusación directa, la viabilidad de la formalización de la investigación preparatoria, el requerimiento de las medidas de coerción personales y reales y la oportunidad de la constitución de las partes procesales. En cuanto al proceso inmediato, si siempre se requiere previamente formalización de la Investigación Preparatoria, audiencia para resolver tal proceso especial, con quiénes, el requerimiento de las medidas de coerción personales y reales, la oportunidad para la constitución de las partes procesales y el momento de aportar los medios probatorios y controlar los ofrecidos en dicho proceso.

5º. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo Plenario.

Interviene como ponente señor Neyra Flores.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. Aspectos generales.

6º. La acusación directa forma parte del proceso común y es un mecanismo de aceleración del proceso que busca evitar trámites innecesarios. Se encuentra regulada en el artículo 336°.4 NCPP y faculta al Fiscal formular directamente acusación, si concluidas las Diligencias Preliminares o recibido el Informe Policial considera que los elementos obtenidos en la investigación establecen suficientemente la realidad



del dc\110 y la iotervención del imputado en su comisión. Esta facultad procesal se funda en la necesidad de generar respuestas rápidas al conflicto penal, la economía procesal y la eficiencia del nuevo proceso penal.

7°. El proceso inmediato es un proceso penal especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de investigación. Su regulación, en sus aspectos esenciales, se encuentra desarrollada en el Libro V, Sección I, artículos 446°/448° NCPP correspondiente a los procesos especiales. Por tanto, siguiendo la línea fijada en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116, la regla hermenéutica que es del caso utilizar será aquella que establece la aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso inmediato o las disposiciones Y su estructura procesal [Acuerdo Plenario 05-2009 CJ-116 de la Corte Suprema de laública, del 13 de noviembre de 2009, Fundamento Jurídico 6].

§ 1. *Alcancei, de la acusadén directa conforme al artículo 336°.4 NCPP Y diferencias con el proceso inmediato regulado en el artículo 446°J ss NCPP.*

So. La acusación directa como parte del proceso común faculta al Ministerio Público acusar directamente, siempre que estén presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad y se cumplan los supuestos de aplicación contemplados en el artículo 336°.4 NCPP. En el presente caso, el Fiscal decide pasar directamente a la etapa intermedia prescindiendo de la etapa de investigación formal. La acusación directa formulada por el Ministerio Público deberá cumplir con los presupuestos contemplados en el artículo 349° NCPP, y previo traslado del requerimiento a las partes el Juez de la Investigación Preparatoria ejercerá el correspondiente control de acusación pudiendo desestimar el pedido Fiscal cuando concurra alguna de las causales de sobreseimiento, previstas en el artículo 348° NCPP.

90. El proceso inmediato es un proceso especial distinto del proceso común. Sus supuestos de aplicación se encuentran suficientemente desarrollados en el artículo 446° NCPP. El Fiscal podrá solicitar la aplicación del proceso inmediato al Juez de la Investigación Preparatoria. El requerimiento de proceso inmediato se presentará luego de culminadas las diligencias preliminares, o en su defecto, hasta antes de transcurrido 30 días de la formalización de la investigación preparatoria. La solicitud del Fiscal está sujeta a la decisión jurisdiccional, pues la exigencia de su aplicación está condicionada a los presupuestos contemplados por el artículo 446°.I NCPP.

✓ Asimismo, el requerimiento de incoación de proceso inmediato deberá ser notificado a las demás partes procesales, quienes podrán pronunciarse sobre su procedencia. En el caso que el Juez admita el requerimiento emitirá un auto que dispone la procedencia de este proceso especial, luego de lo cual el Fiscal formulará acusación Y lo remitirá al Juez competente para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. Al ser el proceso inmediato distinto al proceso



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
VI PLENO JURISDICCIONAL PENAL

común y no haber etapa intermedia, será el Juez del Juicio Oral quien controle la acusación y evaluará la admisión de los medios probatorios que podrán presentar los demás sujetos procesales de constitución en parte procesal, así como otros requerimientos.

En el caso que no concurren los supuestos taxativos de aplicación del proceso inmediato, el Juez de la Investigación Preparatoria podrá desestimar la solicitud del Fiscal. La decisión que desestima el pedido podrá ser apelada.

§ 3. La acusación directa y la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria.

10°. La Disposición de formalización de la investigación preparatoria es la comunicación formal que el Fiscal dirige al imputado para efectos de hacer de su conocimiento la imputación clara y precisa de los hechos que se le atribuyen, la correspondiente calificación jurídica específica y, por ende, que se va realizar una investigación formalizada en su contra, posibilitándole, a través de su abogado defensor, aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes.

Asimismo, este acto fiscal fija las diligencias que se actuarán en la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha. Es decir, que si el Ministerio Público considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen la suficiencia fáctica y probatoria del hecho y la vinculación del imputado al mismo, dispondrá la formalización de la Investigación Preparatoria estableciendo las diligencias que de inmediato deban actuarse.

11°. En el caso de que el Fiscal ha decidido no continuar con las diligencias de investigación y acusar directamente —como una de sus facultades como director de la investigación— el imputado solo solicitaría la realización de elementos de convicción durante las diligencias preliminares porque no se produciría la etapa de Investigación Preparatoria por ser innecesaria, ni tampoco una formalización de la Investigación Preparatoria en este sentido.

Además, el artículo 336°.4 NCPP estipula que la acusación directa podrá formularse por el Fiscal, si concluida las Diligencias Preliminares o recibido el Informe Policial considera que los elementos obtenidos en la investigación establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión. Acusación directa, cuyos requisitos están previstos en el artículo 349° NCPP, que cuenta con los mismos elementos de la formalización de la Investigación Preparatoria prevista en el artículo 336°.1 NCPP, por lo que se garantiza el conocimiento cierto de los cargos y la probabilidad de contradicción.

§ 4. Funciones del requerimiento acusatorio en la acusación directa.

12°. Conforme a lo expuesto el requerimiento acusatorio, en el procedimiento de acusación directa, cumple las funciones de la disposición de la formalización de la investigación preparatoria en la etapa de investigación. Es decir: (i) individualiza al imputado y señala los datos que sirven para identificarlo; (ii) satisface el principio de imputación necesaria describiendo de forma clara y precisa el hecho que se le atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
VI PLENO JURISDICCIONAL PENAL

posteriores, y la correspondiente tipificación; (iii) establece la suficiencia probatoria señalando los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio; (iv) determina la cuantía de la pena que se solicita y fija la reparación civil cuando no hay actor civil; y (v) ofrece los medios de prueba para su actuación en la audiencia.

13°. El derecho de defensa de las partes procesales queda salvaguardado con la notificación del requerimiento de acusación para que en el plazo de 10 días puedan pronunciarse sobre el pedido fiscal.

Respecto al imputado, se le posibilita, en virtud del artículo 350°.1 NCPP observar la acusación fiscal formal y sustancialmente y, de ser el caso, ofrecer las pruebas que considere se deben producir en el juzgamiento.

En el caso de que la víctima no haya podido constituirse en actor civil podrá solicitarla al Juez de la Investigación Preparatoria conforme al artículo 100° NCPP y antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 350° NCPP, en virtud de lo señalado por la citada normativa en el apartado 1, literal h), conforme al cual los sujetos procesales podrán plantear en el plazo de 10 días cualquier otra cuestión que prepare mejor el juicio; asimismo, objetar la reparación civil, o reclamar su incremento o extensión, para lo cual ha de ofrecer los medios de prueba pertinentes para su actuación en el juicio oral.

14°. El Fiscal en el requerimiento de acusación, de conformidad con el artículo 349°.4 NCPP, indicará entre otros aspectos las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la Investigación Preparatoria; y, en su caso, podrá solicitar su variación o que se dicten otras según corresponda.

En caso que el Fiscal no solicite una medida coercitiva, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 286° NCPP, la medida que prevé de comparecencia simple. Excepcionalmente, y solo por razones de urgencia y necesidad de asegurar la presencia del imputado en el proceso, el Fiscal podrá requerir medida de coerción personal proporcional al peligro procesal en una audiencia autónoma a la de la etapa intermedia de control de la acusación directa, según las reglas correspondientes a tal requerimiento.

§ 5. El proceso inmediato y la formalización de la investigación preparatoria.

15°. Estando a lo dispuesto por el artículo 447°.1 NCPP, el Fiscal tiene la posibilidad de requerir la incoación del proceso inmediato en dos momentos: (i) luego de culminar las diligencias preliminares y (ii) antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria. En base al primer supuesto, se estará ante un Proceso Inmediato incoado sin formalización de la Investigación Preparatoria; de ahí que resulta necesario que el requerimiento de incoación de este proceso incorpore los mismos elementos que una disposición de formalización de Investigación Preparatoria y supuestos de aplicación que se producen.

En cambio, en virtud del último supuesto, se tiene que en el Proceso Inmediato, sí existe la obligación de formalizar la Investigación Preparatoria con las implicancias que ello tiene, es decir, que se notifique de esta disposición al imputado a fin que conozca la imputación hecha en su contra y pueda preparar su estrategia de defensa, o de ser el caso interponer los medios de defensa técnicos que considere pertinentes.



§ 6. El proceso inmediato y la etapa intermedia.

16°. Dentro de la estructura del proceso común, una de las funciones más importantes que debe cumplir la etapa intermedia es controlar los resultados de la investigación preparatoria, para lo cual se ha de examinar el mérito de la acusación fiscal y los recaudos de la causa con el fin de decidir si procede o no iniciar el juicio oral. Es decir, el Juez de la investigación preparatoria como director de la etapa intermedia realiza un control tanto formal, sustancial y sobre la suficiencia de los elementos de convicción de la acusación.

17°. En el proceso inmediato, al ser uno especial que se particulariza en razón de sus supuestos de aplicación: flagrancia delictiva; confesión del imputado; y que los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes, no existe etapa intermedia.

18°. No obstante ello, la autoridad judicial ha de realizar en este proceso dos controles. Son los siguientes:

A. De acuerdo con el artículo 448°.1 NCPP el Juez de Investigación Preparatoria, realiza un primer control antes de dar inicio al proceso inmediato. Es el control al requerimiento del fiscal para la incoación del proceso inmediato. Este primer control permite al Juez de la Investigación Preparatoria determinar si procede o no dar inicio a un proceso inmediato, para lo cual es preciso que dicha autoridad judicial verifique el cumplimiento de los supuestos de aplicación de este proceso.

Asimismo, en armonía con el artículo 448°.1 NCPP, el Juez de la Investigación Preparatoria corre traslado a las partes de dicho requerimiento por un plazo de tres días y debe decidir, en un plazo igual, si acepta o rechaza el requerimiento fiscal.

Sobre este punto cabe destacar que, en el marco de los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, así como para evitar la indefensión, que inspiran el nuevo Código Procesal Penal, puede ser factible, atento a las circunstancias de la causa, establecer una audiencia para el Proceso Inmediato, que se seguirá conforme a las pautas establecidas de manera genérica por el artículo 8° NCPP. Por tanto, para que el Juez de la Investigación Preparatoria resuelva la procedencia o no de este proceso especial, si fuera el caso —aunque no obligatoriamente—, podrá producirse un debate con la concurrencia del Fiscal, quien argumentará oralmente por qué eligió y considera la aplicación de este proceso especial, así como con la presencia del imputado y su abogado defensor, los cuales podrán contradecir este requerimiento Fiscal y el Juez hará las preguntas aclaratorias expidiendo la resolución motivada que corresponda.

Asimismo el Fiscal, de ser el caso, solicitará la aplicación de las medidas de coerción que considere pertinentes, de manera simultánea y separada del requerimiento de incoación del proceso inmediato, requerimiento que será discutido en audiencia, siguiendo las consideraciones del Título I, Sección Tres, del citado Código, según corresponda.

B. El segundo control a cargo de la autoridad judicial, es el de la acusación fiscal, para ello es preciso referir que en virtud del artículo 349° NCPP tal



requerimiento debe cumplir determinados requisitos que condicionan su validez, y que corresponde controlar al juez de juicio oral, quien dictará el auto de enjuiciamiento en virtud del artículo 448°.2 NCPP.

§ 7. Momento de aportación de medios probatorios en el Proceso Inmediato.

19°. Uno de los problemas que se suscitan en torno al proceso inmediato es que al no contar con fase intermedia, no se tiene un momento específico en el que el imputado y las demás partes realicen la aportación de medios probatorios, por lo que el acusado ingresaría en desventaja al juicio. Asimismo, que no hay oportunidad para que las partes procesales puedan constituirse como tales.

20°. En un proceso común, en el que sí se lleva a cabo la etapa intermedia —donde las partes tienen la oportunidad de ofrecer cuanto medio de prueba consideren— cabe la posibilidad de permitir que las partes ofrezcan medios de pruebas al inicio del juicio oral, en virtud del artículo 373° NCPP, lo que se condiciona únicamente a determinados supuestos, tales como: *i.* Que la prueba sea nueva y que haya sido conocida con posterioridad a la audiencia de control. *ii.* Que la prueba no haya sido admitida a nivel de la audiencia de control en la etapa intermedia.

21°. De ello se tiene que en el proceso inmediato resulta válida la realización de este acto al inicio del juicio oral bajo la conducción del mismo juez de juzgamiento, quien ha de realizar un control de los medios de prueba ofrecidos para el Juicio Oral como por las demás partes que debe cumplir los principios de legalidad, pertinencia, utilidad y conducencia. Así, la actuación probatoria, eje central del juicio oral, será desarrollada respetando los principios de igualdad, legalidad y contradicción, que integran las garantías del debido proceso y defensa procesal.

22°. Estas consideraciones no afectan el principio de imparcialidad, que garantiza que el juez sea un tercero entre las partes, toda vez que la regla en base a la cual el ofrecimiento y admisión probatoria debe realizarse en la etapa intermedia no puede ser entendida como absoluta y menos aún en el contexto de un proceso especial que, como se tiene expuesto, se rige por pautas propias. Por lo demás, queda garantizado el respectivo contradictorio a que se someterán las pruebas ofrecidas al poder ser actuadas en el juicio oral.

23°. Función que se realiza, siguiendo la misma lógica empleada para la aportación de los medios probatorios, al no existir investigación preparatoria, ni la etapa intermedia, los sujetos procesales tendrán, al inicio del juicio oral, oportunidad para solicitar su constitución en el proceso, y tanto en el rol previsto en el parágrafo 21 como en el presente, la mayor garantía de imparcialidad se comprobará con la resolución debidamente motivada que expedirá el juez penal al respecto.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
VI PLENO JURISDICCIONAL PENAL

III. DECISIÓN

24°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

ACORDARON:

25°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos del 8° al 23°.

26°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° del citado estatuto orgánico.

27°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial "El Peruano". Hágase saber.

Ss.

SAN MARTÍN CASTRO

LECAROS CORNEJO

PRADO SALDARRIAGA

RODRÍGUEZ TINEO

BARRIOS ALVARADO

PRÍNCIPE TRUJILLO

NEYRA FLORES

BARANDIARÁN DEMPWOLF

CALDERÓN CASTILLO

SANTA MARIA MORILLO

SE PUBLICO CONFORME A LEY

Dra. PILAR SALAS CAMPOS
Secretaria de la Sala Penal Permanente
CORTE SUPREMA



ANEXO N° 02:

DECRETO LEGISLATIVO N° 1194



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Lima, 01 de septiembre de 2015

OFICIO N° 135 -2015-PR

Señor
LUIS IBERICO NÚÑEZ
Presidente del Congreso de la República
Presente.-

De nuestra consideración:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 104° de la Constitución Política, nos dirigimos a usted, señor Presidente del Congreso de la República, con la finalidad de comunicarle que, al amparo de las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo mediante Ley N° 30336, y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se ha promulgado el Decreto Legislativo N° 1194, que Regula el Proceso de Inmediato en Casos de Flagrancia.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para renovarle los sentimientos de nuestra estima y consideración.

Atentamente,


OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

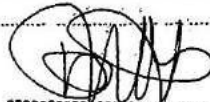

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Lima, 01 de Setiembre de 2015.

En aplicación de lo dispuesto en el inc. b) del artículo 90° del
Reglamento del Congreso de la República: para su estudio,

PASE el expediente del Decreto Legislativo 1194 a la
Comisión de Constitución y Reclamos. -



HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL
Oficial Mayor(e)
CONGRESO DE LA REPUBLICA



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ML
MARCO LEÓN FLORES ZAPBOZA TELLO
SECRETARIO DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Legislativo Nº 1194

f
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30336, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en materia de Seguridad Ciudadana, Fortalecer la Lucha contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, por el término de noventa (90) días calendario;

Que, en este sentido, el literal a) del artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la facultad de legislar sobre el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera;

Que, resulta necesario establecer instrumentos normativos eficaces en el racional procesamiento de causas penales bajo el supuesto de flagrancia delictiva; que permitirá resultados positivos en la lucha contra la delincuencia; el crimen organizado, entre otros, en beneficio de la comunidad en general;

De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2 de la Ley N° 30336 y en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

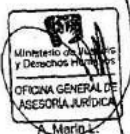
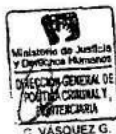
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:


DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL PROCESO INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA

Artículo 1°.- Objeto de la norma

La presente norma tiene el objeto de regular el proceso inmediato en casos de flagrancia, modificando la Sección I, Libro Quinto, del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


MARCO LEÓN PAREDES
SECRETARIO DEL CONSEJO DE MINISTROS

Artículo 2°.- Modificación de los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957

Modifícanse los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957, en los siguientes términos:

"Artículo 446.- Supuestos de aplicación

1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

- a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259;
- b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160; o
- c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.

2. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean necesarios ulteriores actos de investigación.

3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable.

4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente Código.

"Artículo 447.- Audiencia única de Incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva

Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes al requerimiento fiscal, realiza una Audiencia única de Incoación para determinar la





ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ML
MARCO LEÓN FELIPE BARBOZA TELLO
SECRETARIO DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Legislativo

LM
procedencia del proceso inmediato. La detención del imputado se mantiene hasta la realización de la Audiencia.

2. Dentro del mismo requerimiento de incoación, el Fiscal debe acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. El requerimiento de incoación debe contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 336.
3. En la referida Audiencia, las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según corresponda.
4. La Audiencia única de Incoación del proceso inmediato es de carácter inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. El Juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente orden, según sea el caso:

- a) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal;
- b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes;
- c) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato.

5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada, de modo impostergable, en la misma Audiencia de Incoación. La resolución es apelable con efecto devolutivo.

6. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la Investigación Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448.

7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dicta la Disposición que corresponda o la formalización de la Investigación Preparatoria.

Para los supuestos comprendidos en los literales b) y c), numeral 1 del artículo 446, rige el procedimiento antes descrito en lo que corresponda. Solo en estos supuestos, el requerimiento se presenta luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria."



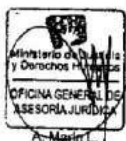
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Firma]
MARCO LEÓN FLORES ARBOZA TELLO
SECRETARIO DEL CONSEJO DE MINISTROS

"Artículo 448 Audiencia única de Juicio Inmediato"

[Firma]
Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, El Juez penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional.

2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la Audiencia, bajo apercibimiento de prescindirse de ellos.
3. Instalada la Audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 349. Si el Juez Penal determina que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350, en lo que corresponda. El Juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos de validez de la acusación de conformidad con el numeral 1 del artículo 350 y resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y oral.
4. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. El Juez Penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta Sección, se aplican las reglas del proceso común, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato".



Artículo 3°.- Adelanto de la vigencia a nivel nacional de la Sección I, Libro Quinto del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957

Adelántase la vigencia a nivel nacional de la Sección I, libro Quinto del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA: Vigencia

La presente norma entra en vigencia a nivel nacional a los noventa (90) días de su publicación en el diario oficial El Peruano.





ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MARCO LEÓN FLORES LÓPEZ TELLO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Decreto Legislativo

SEGUNDA: Gestión de Audiencias

En cada Distrito Judicial, la Presidencia de las Cortes Superiores de Justicia designan a un funcionario responsable de la gestión de audiencias para procesos inmediatos en casos de flagrancia, quien tiene a su cargo la administración de la agenda y de los espacios para la realización de las audiencias, así como las tareas relativas a su registro, publicidad, organización y asistencia de las partes.



La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores; la Dirección Distrital de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o quien haga sus veces y la máxima autoridad de la Policía Nacional del Perú, en cada Distrito Judicial, designan a un funcionario de enlace con el funcionario responsable de la gestión de audiencia señalado en el párrafo anterior, a fin de coordinar los temas interinstitucionales de organización para la realización efectiva, célere y adecuada de las audiencias.



Tercera.- Financiamiento

La implementación de las medidas establecidas en la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil quince.



OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior

GUSTAVO ADRIÁN OLIVERA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

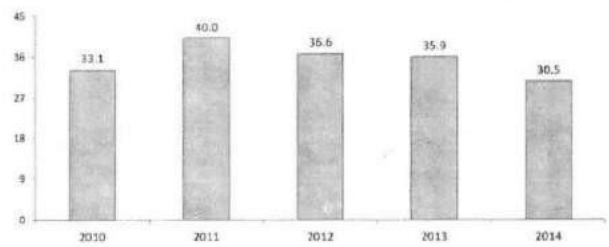
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

Conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos – ENAPRES, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, determinan que si bien las tasas de victimización se han reducido en un 10% del año 2011 al 2014, aún estas siguen siendo altas, lo que determina que 3 de cada 10 encuestados ha sido víctima de un delito en los últimos doce meses.

GRÁFICO N° 01

EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, ¿USTED HA SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO QUE ATENTÓ CONTRA SU SEGURIDAD?
Robo o intento de robo de dinero, cartera, celular, vestimenta, amenazas e intimidaciones, maltrato y ofensas sexuales, secuestro, extorsión, robo de negocio y robo o intento de robo de vehículo automotor, autopartes, motocicleta, mototaxi o bicicleta
(Porcentaje)



Año 2010: Los datos corresponden al periodo mayo - diciembre.
Año 2011: Los datos corresponden al periodo abril - diciembre.
Año 2012, 2013, 2014: Los datos corresponden al periodo enero - diciembre.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGAL
A. MARIN L.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA
C. VÁSQUEZ G.

OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGAL
F. JIMÉNEZ

Del 100% de delitos cometidos en los últimos doce meses, la mayor incidencia lo representan los delitos patrimoniales, en especial los robos de cartera, celular, vehículos, negocios, a los que se suma las extorsiones y secuestros. Estos delitos se cometen, principalmente, en espacios públicos o privados, de naturaleza flagrante, siendo estos los principales hechos delictivos que generan la mayor percepción de inseguridad de los ciudadanos, quienes esperan una respuesta rápida de las autoridades para la aprehensión y posterior sanción de quienes las realizan.

GRÁFICO N° 02
HECHOS DELICTIVOS MAS FRECUENTES



1/ Comprende: Auto, camioneta, autoqueros de vehículo automotor, motocicleta, motozeta y bicicleta.
2/ Incluye: Maltrato físico y/o psicológico de algún miembro del hogar, acoso, abuso, violación, entre otros.
3/ Comprende: Robo de negocio, maltrato físico de otra persona no miembro del hogar.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos

No suma el 100% porque una persona pudo haber sido víctima de más de un hecho delictivo.

La Reforma Procesal Penal en el Perú ha generado una transformación en el Sistema de Justicia Penal, generando una mayor descongestión de casos, celeridad, transparencia, imparcialidad entre otras características que hacen posible una mayor satisfacción del usuario de justicia y mejores condiciones procesales para el adecuado funcionamiento de dicho Sistema de Justicia¹.

Dicha situación se debe en gran parte a la metodología de atención que el nuevo Código Procesal Penal incorpora al procesamiento de casos penales, posibilitando el uso de salidas alternativas o mecanismos de simplificación procesal, con la finalidad de racionalizar la cargas de trabajo, por razón de las personas, materia, gravedad del delito, estándar probatorio, entre otros.

Dichos mecanismos alternativos o de simplificación se fundamentan bajo los siguientes criterios:

- El carácter selectivo del Sistema de Justicia Penal, la necesidad de racionalizar la persecución penal pública frente a los escasos recursos públicos disponibles y las características de última ratio y subsidiariedad del mismo.
- Razones de conveniencia social que indiquen que debe prescindirse al máximo la respuesta penal tradicional respecto de personas que cuentan con altas posibilidades de reinserción social.



A. MARIN L.



C. VÁSQUEZ G.



F. JIMENEZ

¹ Véase el "Informe Estadístico Nacional, 2006-2010 – La Reforma Procesal Penal Peruana – Hacia una Justicia Rápida y Transparente", Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lima - 2011.

- La satisfacción real y oportuna de los intereses de la víctima por parte del Sistema de Justicia Penal².
- Organizar y planificar la respuesta del Sistema de Justicia Penal bajo el criterio de eficiencia sobre aquellos casos en los que, por sus propias características son innecesarios mayores actos de investigación³.

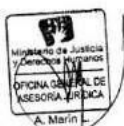
Por tanto, dichos mecanismos constituyen en conjunto uno de los pilares principales del Código Procesal Penal, pues permite simplificar, economizar y descongestionar el Sistema de Justicia Penal, logrando resultados de mayor eficacia en la respuesta penal frente a los punibles.

Dentro de estos, el proceso inmediato constituye uno de los principales mecanismos de simplificación, el mismo que tiene sus bases en el Ordenamiento Italiano de 1988 que regula el *giudizio immediato* (443° a 458°)⁴, donde se prescinde de la etapa intermedia, quedado expedito los hechos para el juzgamiento, en especial para presupuestos de flagrancia, confesión del imputado o la obtención de prueba evidente y suficiente para atribuir responsabilidad al investigado.

El fundamento de estos mecanismos radica en la necesidad de simplificar el procedimiento penal, haciéndolo más sencillo, rápido y eficiente, para reducir el tiempo en que se brinda una respuesta penal, combatir la morosidad procesal y descongestionar el número de casos a la espera de juicio. En la legislación comparada, conocidos son el "procedimiento acelerado" (Alemania), "sentencia de conformidad" (España), "procedimiento simplificado" (Francia), "giudizio direttissimo y giudizio immediato" (Italia), "proceso sumarísimo" (Portugal), "summary offenses, indictable offenses o felonies; hybrid o dual procedure offenses" (Países del commonlaw), "procedimiento simplificado" (Chile y Ecuador), "procedimiento extraordinario" (Uruguay), entre otros países.

El VI Plenario Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República emitió el Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116, denominado "Acusación Directa y Proceso Inmediato", del dieciséis de noviembre de 2010, en la que definió al proceso inmediato como "un proceso especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de investigación (Fundamento N° 07)". En tal sentido, siguiendo la regla hermenéutica del Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116, establece la "aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso inmediato o las disposiciones y su estructura procesal".

Bajo dichos presupuestos, el proceso inmediato, "al ser uno especial que se particulariza en razón de sus supuestos de aplicación: flagrancia delictiva; confesión del imputado; y que los elementos de convicción acumulados durante las diligencias



²DUCE J. Mauricio y RIEGO R. Cristian. "Proceso Penal". Editorial Jurídica Chile 2007. p. 295.

³Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú N° 06-2012/CJ-116.

⁴NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal, 2010.

preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes, no existe etapa intermedias (Fundamento N°17).*

Desde su vigencia, el proceso inmediato ha pasado por varios criterios interpretativos de aplicación, ya sea debido a su confusión con la acusación directa⁵ en los primeros años, para luego cuestionar su legitimidad -fundamentada en la limitación del ejercicio de las garantías procesales y derechos de las partes procesales-, al no desarrollarse bajo este proceso la etapa de la investigación preparatoria y etapa intermedia.

Dicho situación estableció casi por inercia una situación de incertidumbre en cuanto a su aplicación por parte de los operadores de justicia, lo que aunado al factor discrecional de su aplicación y a la falta de capacitación de varios operadores de justicia, hizo que dicho mecanismo deje de ser aplicado a nivel nacional.

La importancia y utilidad de la aplicación del proceso inmediato radica en su grado de intervención y naturaleza -sobre aquellos delitos que configuran flagrancia delictiva-, ofreciendo un tratamiento procedimental simplificado y eficaz frente al delito flagrante (tránsito directo de las diligencias preliminares a la etapa de juzgamiento), a diferencia del proceso común donde el caso deberá transitar por todas las etapas procesales (diligencias preliminares, investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento), dilatándose innecesariamente el caso.

Este factor cualitativo del proceso inmediato justifica su vigencia, así como el restablecimiento de su aplicación a nivel nacional, resultando necesario que el Estado incentive su aplicación a través de las modificaciones y precisiones normativas pertinentes que la hagan más operativa y predecible.

En ese sentido, el Poder Judicial viene implementando el Plan Piloto de Órganos Jurisdiccionales para la flagrancia delictiva en el Distrito Judicial de Tumbes, el cual tiene por objeto establecer un tratamiento especial y célere en la investigación y juzgamiento de los delitos flagrantes, a fin de obtener una decisión pronta y eficaz a los delitos que atentan contra la seguridad ciudadana.

Mediante Resolución Administrativa N° 231-2015-CE-PJ, del 15 de julio del 2015, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dispuso por mayoría implementar a partir del 1 de agosto del 2015, en el Distrito Judicial de Tumbes el Plan Piloto de Órganos Jurisdiccionales para la Flagrancia Delictiva en el Distrito Judicial de Tumbes, designando como órganos componentes a:

- Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes.
- Primer Juzgado Penal Unipersonal de Tumbes.
- Sala Penal de Apelaciones de Tumbes.

La Resolución en mención dispone que estos órganos jurisdiccionales, tendrán competencia en todo el distrito judicial de Tumbes y conocerán los delitos flagrantes como el de peligro común (conducción de vehículo en estado de ebriedad), entre otros.

Se entiende que este plan se complementa con los protocolos de actuación conjunta entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y demás entidades del sistema de justicia que participan en la investigación, juzgamiento y resolución de delitos flagrantes.

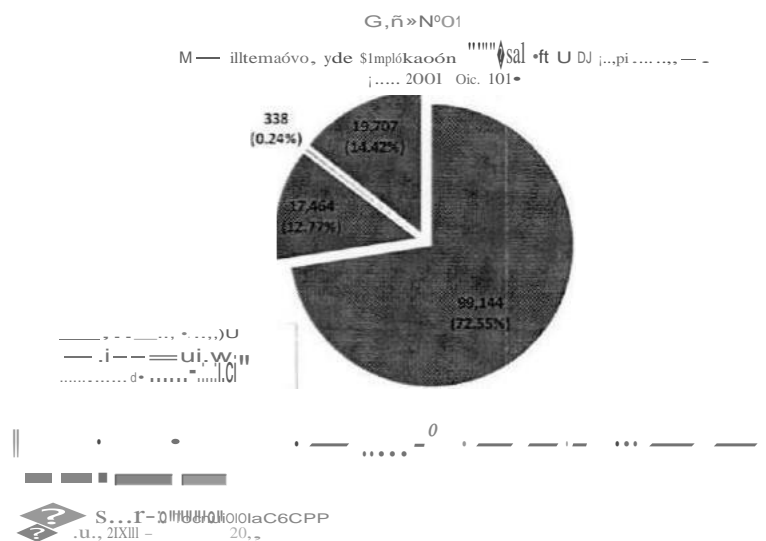
⁵VASQUEZ GANOZA, Carlos Zoe. Acusación Directa vs Proceso Inmediato, en: Dialogo con la Jurisprudencia, Tomo 118.



Asimismo, en el marco de este proceso, la presente propuesta normativa condice con la iniciativa del Poder Judicial y permitirá revestir su implementación bajo una norma con rango de ley

U. PROBLEMÁTICA

De los constantes monitoreos efectuados por la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, se evidencia luego de 9 años de su vigencia una considerable aplicación de salidas alternativas y mecanismos de simplificación, especialmente del Principio de Oportunidad. Acuerdo Reportono, Terminación Anticipada del Proceso e incluso la Acusación Directa: no obstante ello, el Proceso hinchado es el mecanismo procesal que menos se ha aplicado durante estos 9 años, representando tan solo 338 casos, COnforme se aprecia en el gráfico siguiente



Esta falta de aplicación impacta negativamente en el Sistema de Justicia Penal, pues no permite que una considerable carga procesal que ingresa bajo los presupuestos de flagrancia de hecho sea resuelta mediante este mecanismo, haciéndose necesario reactivar su uso mediante el presente proyecto legislativo. Asimismo, su falta de aplicación genera una sobrecarga procesal (en diligencias, excepciones, notificaciones, trámites administrativos, etc.) a las etapas de investigación preparatoria y etapa preliminar.

"V... b, "República Eslovenia de la a... d91 Código Procesal Penal en la... 011... Jo... !!• Huor... La Literat... faena. Moc...eg...a. OIC... Tumb... p...a V L...ta/ecua... ru!11601 oor...s...ia T... dio... com...,,, de Implme...ción del CPP. con...a el 36% ,rom...tc ;e las a...h... de ainrral ae IICU...aCidfi son oel clillic óe OmIMIn., la AsIS***-' F... la que g...erB"111mlfife se Ulo...za, la ...,en...f...;

Respecto a los delitos por omisión de asistencia familiar y contra la seguridad pública, entre los años 2012 al 2015, el Poder Judicial ha constatado un incremento en los ingresos por este tipo de delitos, por lo que se sugiere implementar el proceso inmediato en estos casos a fin de coadyuvar en la reducción de la carga procesal.

Alcances de la modificación:

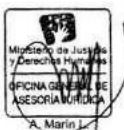
Para la aplicación eficiente y eficaz del Proceso Inmediato, debe delimitarse en primer término, de manera expresa, su ámbito orientado a los delitos cometidos en flagrancia, así como a quienes confiesen la comisión del acto delictivo o que los elementos de convicción acopiados sean abundantes para acreditar la responsabilidad del agente, exceptuándose los casos complejos.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la norma dispone su aplicación a dos delitos que por su naturaleza, ciertos operadores de justicia consideren que no se encuentran en estado de flagrancia: se trata del emblemático delito de peligro común de Conducción en estado de Ebriedad o Drogadicción, y también al no menos importante y recurrente delito de Omisión a la Asistencia Familiar. Y es que la probanza de ambos hechos no requiere de validación especial alguna para demostrar, ya sea por la evidencia de la prueba y por el estado de flagrancia permanente de su comisión y su autor; pues en el caso primer caso, la comisión del delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, se corrobora con el examen de aire aspirado o cualitativo, los cuales son indicios de la comisión del delito, que se corrobora con la prueba del Dosaje Etílico Cuantitativa a través del análisis de la prueba de sangre, que permite cuantificar los gramos/litros de alcohol en la sangre; y, en el segundo caso, con la sentencia firme que condena al autor/autora de la omisión de la obligación legal de asistir al acreedor alimentario.

Carece de sustento que los procesos penales por la comisión de ambos delitos se prorroguen de manera innecesaria- si el agente no se acoge al Principio de Oportunidad- cuando el procesamiento se fundamenta en fuertes elementos de convicción que vinculan al presunto autor con el delito, resulta inaudito, que se tramite un proceso el cual pasa por todas sus etapas, existiendo medios de prueba incuestionables que hacen innecesario prolongarlo, cuando, desde sus inicios, el Juzgador cuenta con los elementos que le permiten determinar la situación jurídica del imputado.

Acortar los plazos de los procesos, respetando escrupulosamente las garantías que informan el debido proceso, se convierte en una de las metas a cumplir por el Poder Judicial, al cual debe dotársele de las herramientas orientadas a dicho fin, más aún, cuando en las reuniones de coordinación sostenidas entre dicho poder del Estado y el Ministerio del Interior, los representantes de aquél señalaron, de manera reiterada, de la necesidad de contar con un mecanismo que les permita procesar ambos delitos bajo los alcances del Proceso Inmediato.

Por todo ello, la norma exige se cumplan ciertas condiciones que garanticen la defensa del imputado así como de mecanismos que permitan no solo que cuente con abogado defensor durante todo el proceso, sino que sea posible ofrecer y actuar todos los medios que le permitan sustentar su teoría, de manera tal, que el Proceso Inmediato, en lo referido a garantías procesales, no tiene limitaciones en relación al Proceso Común, quedando así establecido que aún tratándose de un proceso célere, los derechos del imputado están garantizados.

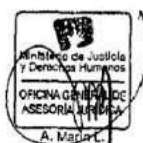


En este sentido, el Centro de Informática del Poder Judicial ha remitido las estadísticas relacionadas a los procesos por delito de Omisión de Asistencia familiar, observándose casi cien mil causas a nivel nacional, conforme al siguiente cuadro:

INGRESO POR DELITOS DE OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR

CSJ	2012	2013	2014	2015	Total General
AMAZONAS	240	209	158	30	637
ANCASH	1180	287	327	44	1848
APURIMAC		131	120	17	258
AREQUIPA	1346	1708	1671	235	4960
AYACUCHO		581	648	83	1312
CAJAMARCA		875	1047	361	2283
CALLAO	386	492	438	122	1438
CANETE	3	568	557	122	1350
CUSCO		788	1241	66	2095
HUANCAYELICA		661	468	20	1149
HUANUCO	1986	603	1103	262	3954
HUAYURA		1373	1704	365	3442
ICA		2624	4816	58	7498
JUNIN		2312	5350	407	8069
LA LIBERTAD	2139	2471	2087	449	7146
LAMBAYEQUE		4062	4411	489	8962
LIMA		2414	2683	174	5271
LIMA ESTE			3418	368	3786
LIMA NORTE		3533	1692	271	5498
LIMA SUR		946	926	59	1931
LORETO		178	110	99	387
MADRE DE DIOS		295	324	70	689
MOQUEGUA		209	298		507
PASCO		120	359	43	522
PIURA	1866	2253	3256	205	7580
PUNO		415	605	168	1188
SAN MARTIN		330	731	28	1179
SANTA		1531	2071	419	4021
SULLANA		935	605		1540
TACNA		945	891	122	1958
TUMBES		306	948	135	1389
UCAYALI		176	130	7	313
VENTANILLA			143	2	145
TOTAL GENERAL	9146	52963	45438	5370	92915

Fuente: Poder Judicial - CIJ



En cuanto a los delitos de conducción en estado de ebriedad y drogadicción, si bien la cantidad de procesos se reduce en un tercio del anterior, sesenta mil causa aproximadamente en los últimos años, la finalidad de la presente norma está orientada a reducir los plazos del procesamiento, por tanto creemos que incidirá, de manera favorable, en reducir los plazos de los procesos a iniciarse.



del artículo 110 y la intervención del imputado en su comisión. Esta facultad procesal se funda en la necesidad de generar respuestas rápidas al conflicto penal, la economía procesal y la eficiencia del nuevo proceso penal.

7°. El proceso inmediato es un proceso penal especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de investigación. Su regulación, en sus aspectos esenciales, se encuentra desarrollada en el Libro V, Sección I, artículos 446°/448° NCPP correspondiente a los procesos especiales. Por tanto, siguiendo la línea fijada en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116, la regla hermenéutica que es del caso utilizar será aquella que establece la aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso inmediato o las disposiciones y su estructura procesal [Acuerdo Plenario 05-2009/CJ-116 de la Corte Suprema de la Unión, del 13 de noviembre de 2009, Fundamento Jurídico 6].

§ 1. *Alcance, de la acusación directa conforme al artículo 336° 4 NCPP y diferencias con el proceso inmediato regulado en el artículo 446° Jss NCPP.*

So. La acusación directa como parte del proceso común faculta al Ministerio Público acusar directamente, siempre que estén presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad y se cumplan los supuestos de aplicación contemplados en el artículo 336° 4 NCPP. En el presente caso, el Fiscal decide pasar directamente a la etapa intermedia prescindiendo de la etapa de investigación formal. La acusación directa formulada por el Ministerio Público deberá cumplir con los presupuestos contemplados en el artículo 349° NCPP, y previo traslado del requerimiento a las partes el Juez de la Investigación Preparatoria ejercerá el correspondiente control de acusación pudiendo desestimar el pedido Fiscal cuando concurra alguna de las causales de sobreseimiento, previstas en el artículo 348° NCPP.

90. El proceso inmediato es un proceso especial distinto del proceso común. Sus supuestos de aplicación se encuentran suficientemente desarrollados en el artículo 446° NCPP. El Fiscal podrá solicitar la aplicación del proceso inmediato al Juez de la Investigación Preparatoria. El requerimiento de proceso inmediato se presentará luego de culminadas las diligencias preliminares, o en su defecto, hasta antes de transcurrido 30 días de la formalización de la investigación preparatoria. La solicitud del Fiscal está sujeta a la decisión jurisdiccional, pues la exigencia de su aplicación está condicionada a los presupuestos contemplados por el artículo 446° I NCPP.

✓ Asimismo, el requerimiento de incoación de proceso inmediato deberá ser notificado a las demás partes procesales, quienes podrán pronunciarse sobre su procedencia. En el caso que el Juez admita el requerimiento emitirá un auto que dispone la procedencia de este proceso especial, luego de lo cual el Fiscal formulará acusación y lo remitirá al Juez competente para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. Al ser el proceso inmediato distinto al proceso



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
VI PLENO JURISDICCIONAL PENAL

común y no haber etapa intermedia, será el Juez del Juicio Oral quien controle la acusación y evaluará la admisión de los medios probatorios que podrán presentar los demás sujetos procesales de constitución en parte procesal, así como otros requerimientos.

En el caso que no concurren los supuestos taxativos de aplicación del proceso inmediato, el Juez de la Investigación Preparatoria podrá desestimar la solicitud del Fiscal. La decisión que desestima el pedido podrá ser apelada.

§ 3. La acusación directa y la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria.

10°. La Disposición de formalización de la investigación preparatoria es la comunicación formal que el Fiscal dirige al imputado para efectos de hacer de su conocimiento la imputación clara y precisa de los hechos que se le atribuyen, la correspondiente calificación jurídica específica y, por ende, que se va realizar una investigación formalizada en su contra, posibilitándole, a través de su abogado defensor, aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes.

Asimismo, este acto fiscal fija las diligencias que se actuarán en la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha. Es decir, que si el Ministerio Público considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen la suficiencia fáctica y probatoria del hecho y la vinculación del imputado al mismo, dispondrá la formalización de la Investigación Preparatoria estableciendo las diligencias que de inmediato deban actuarse.

11°. En el caso de que el Fiscal ha decidido no continuar con las diligencias de investigación y acusar directamente —como una de sus facultades como director de la investigación— el imputado solo solicitaría la realización de elementos de convicción durante las diligencias preliminares porque no se produciría la etapa de Investigación Preparatoria por ser innecesaria, ni tampoco una formalización de la Investigación Preparatoria en este sentido.

Además, el artículo 336°.4 NCPP estipula que la acusación directa podrá formularse por el Fiscal, si concluida las Diligencias Preliminares o recibido el Informe Policial considera que los elementos obtenidos en la investigación establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión. Acusación directa, cuyos requisitos están previstos en el artículo 349° NCPP, que cuenta con los mismos elementos de la formalización de la Investigación Preparatoria prevista en el artículo 336°.1 NCPP, por lo que se garantiza el conocimiento cierto de los cargos y la probabilidad de contradicción.

§ 4. Funciones del requerimiento acusatorio en la acusación directa.

12°. Conforme a lo expuesto el requerimiento acusatorio, en el procedimiento de acusación directa, cumple las funciones de la disposición de la formalización de la investigación preparatoria en la etapa de investigación. Es decir: (i) individualiza al imputado y señala los datos que sirven para identificarlo; (ii) satisface el principio de imputación necesaria describiendo de forma clara y precisa el hecho que se le atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
VI PLENO JURISDICCIONAL PENAL

posteriores, y la correspondiente tipificación; (iii) establece la suficiencia probatoria señalando los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio; (iv) determina la cuantía de la pena que se solicita y fija la reparación civil cuando no hay actor civil; y (v) ofrece los medios de prueba para su actuación en la audiencia.

13°. El derecho de defensa de las partes procesales queda salvaguardado con la notificación del requerimiento de acusación para que en el plazo de 10 días puedan pronunciarse sobre el pedido fiscal.

Respecto al imputado, se le posibilita, en virtud del artículo 350°.1 NCPP observar la acusación fiscal formal y sustancialmente y, de ser el caso, ofrecer las pruebas que considere se deben producir en el juzgamiento.

En el caso de que la víctima no haya podido constituirse en actor civil podrá solicitarla al Juez de la Investigación Preparatoria conforme al artículo 100° NCPP y antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 350° NCPP, en virtud de lo señalado por la citada normativa en el apartado 1, literal h), conforme al cual los sujetos procesales podrán plantear en el plazo de 10 días cualquier otra cuestión que prepare mejor el juicio; asimismo, objetar la reparación civil, o reclamar su incremento o extensión, para lo cual ha de ofrecer los medios de prueba pertinentes para su actuación en el juicio oral.

14°. El Fiscal en el requerimiento de acusación, de conformidad con el artículo 349°.4 NCPP, indicará entre otros aspectos las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la Investigación Preparatoria; y, en su caso, podrá solicitar su variación o que se dicten otras según corresponda.

En caso que el Fiscal no solicite una medida coercitiva, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 286° NCPP, la medida que prevé de comparecencia simple. Excepcionalmente, y solo por razones de urgencia y necesidad de asegurar la presencia del imputado en el proceso, el Fiscal podrá requerir medida de coerción personal proporcional al peligro procesal en una audiencia autónoma a la de la etapa intermedia de control de la acusación directa, según las reglas correspondientes a tal requerimiento.

§ 5. El proceso inmediato y la formalización de la investigación preparatoria.

15°. Estando a lo dispuesto por el artículo 447°.1 NCPP, el Fiscal tiene la posibilidad de requerir la incoación del proceso inmediato en dos momentos: (i) luego de culminar las diligencias preliminares y (ii) antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria. En base al primer supuesto, se estará ante un Proceso Inmediato incoado sin formalización de la Investigación Preparatoria; de ahí que resulta necesario que el requerimiento de incoación de este proceso incorpore los mismos elementos que una disposición de formalización de Investigación Preparatoria y supuestos de aplicación que se producen.

En cambio, en virtud del último supuesto, se tiene que en el Proceso Inmediato, sí existe la obligación de formalizar la Investigación Preparatoria con las implicancias que ello tiene, es decir, que se notifique de esta disposición al imputado a fin que conozca la imputación hecha en su contra y pueda preparar su estrategia de defensa, o de ser el caso interponer los medios de defensa técnicos que considere pertinentes.



§ 6. El proceso inmediato y la etapa intermedia.

16°. Dentro de la estructura del proceso común, una de las funciones más importantes que debe cumplir la etapa intermedia es controlar los resultados de la investigación preparatoria, para lo cual se ha de examinar el mérito de la acusación fiscal y los recaudos de la causa con el fin de decidir si procede o no iniciar el juicio oral. Es decir, el Juez de la investigación preparatoria como director de la etapa intermedia realiza un control tanto formal, sustancial y sobre la suficiencia de los elementos de convicción de la acusación.

17°. En el proceso inmediato, al ser uno especial que se particulariza en razón de sus supuestos de aplicación: flagrancia delictiva; confesión del imputado; y que los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes, no existe etapa intermedia.

18°. No obstante ello, la autoridad judicial ha de realizar en este proceso dos controles. Son los siguientes:

A. De acuerdo con el artículo 448°.1 NCPP el Juez de Investigación Preparatoria, realiza un primer control antes de dar inicio al proceso inmediato. Es el control al requerimiento del fiscal para la incoación del proceso inmediato. Este primer control permite al Juez de la Investigación Preparatoria determinar si procede o no dar inicio a un proceso inmediato, para lo cual es preciso que dicha autoridad judicial verifique el cumplimiento de los supuestos de aplicación de este proceso.

Asimismo, en armonía con el artículo 448°.1 NCPP, el Juez de la Investigación Preparatoria corre traslado a las partes de dicho requerimiento por un plazo de tres días y debe decidir, en un plazo igual, si acepta o rechaza el requerimiento fiscal.

Sobre este punto cabe destacar que, en el marco de los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, así como para evitar la indefensión, que inspiran el nuevo Código Procesal Penal, puede ser factible, atento a las circunstancias de la causa, establecer una audiencia para el Proceso Inmediato, que se seguirá conforme a las pautas establecidas de manera genérica por el artículo 8° NCPP. Por tanto, para que el Juez de la Investigación Preparatoria resuelva la procedencia o no de este proceso especial, si fuera el caso —aunque no obligatoriamente—, podrá producirse un debate con la concurrencia del Fiscal, quien argumentará oralmente por qué eligió y considera la aplicación de este proceso especial, así como con la presencia del imputado y su abogado defensor, los cuales podrán contradecir este requerimiento Fiscal y el Juez hará las preguntas aclaratorias expidiendo la resolución motivada que corresponda.

Asimismo el Fiscal, de ser el caso, solicitará la aplicación de las medidas de coerción que considere pertinentes, de manera simultánea y separada del requerimiento de incoación del proceso inmediato, requerimiento que será discutido en audiencia, siguiendo las consideraciones del Título I, Sección Tres, del citado Código, según corresponda.

B. El segundo control a cargo de la autoridad judicial, es el de la acusación fiscal, para ello es preciso referir que en virtud del artículo 349° NCPP tal



requerimiento debe cumplir determinados requisitos que condicionan su validez, y que corresponde controlar al juez de juicio oral, quien dictará el auto de enjuiciamiento en virtud del artículo 448°.2 NCPP.

§ 7. Momento de aportación de medios probatorios en el Proceso Inmediato.

19°. Uno de los problemas que se suscitan en torno al proceso inmediato es que al no contar con fase intermedia, no se tiene un momento específico en el que el imputado y las demás partes realicen la aportación de medios probatorios, por lo que el acusado ingresaría en desventaja al juicio. Asimismo, que no hay oportunidad para que las partes procesales puedan constituirse como tales.

20°. En un proceso común, en el que sí se lleva a cabo la etapa intermedia —donde las partes tienen la oportunidad de ofrecer cuanto medio de prueba consideren— cabe la posibilidad de permitir que las partes ofrezcan medios de pruebas al inicio del juicio oral, en virtud del artículo 373° NCPP, lo que se condiciona únicamente a determinados supuestos, tales como: *i.* Que la prueba sea nueva y que haya sido conocida con posterioridad a la audiencia de control. *ii.* Que la prueba no haya sido admitida a nivel de la audiencia de control en la etapa intermedia.

21°. De ello se tiene que en el proceso inmediato resulta válida la realización de este acto al inicio del juicio oral bajo la conducción del mismo juez de juzgamiento, quien ha de realizar un control de los medios de prueba ofrecidos para el Juicio Oral como por las demás partes que debe cumplir los principios de legalidad, pertinencia, utilidad y conducencia. Así, la actuación probatoria, eje central del juicio oral, será desarrollada respetando los principios de igualdad, legalidad y contradicción, que integran las garantías del debido proceso y defensa procesal.

22°. Estas consideraciones no afectan el principio de imparcialidad, que garantiza que el juez sea un tercero entre las partes, toda vez que la regla en base a la cual el ofrecimiento y admisión probatoria debe realizarse en la etapa intermedia no puede ser entendida como absoluta y menos aún en el contexto de un proceso especial que, como se tiene expuesto, se rige por pautas propias. Por lo demás, queda garantizado el respectivo contradictorio a que se someterán las pruebas ofrecidas al poder ser actuadas en el juicio oral.

23°. Función que se realiza, siguiendo la misma lógica empleada para la aportación de los medios probatorios, al no existir investigación preparatoria, ni la etapa intermedia, los sujetos procesales tendrán, al inicio del juicio oral, oportunidad para solicitar su constitución en el proceso, y tanto en el rol previsto en el parágrafo 21 como en el presente, la mayor garantía de imparcialidad se comprobará con la resolución debidamente motivada que expedirá el juez penal al respecto.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
VI PLENO JURISDICCIONAL PENAL

III. DECISIÓN

24°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

ACORDARON:

25°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos del 8° al 23°.

26°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° del citado estatuto orgánico.

27°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial "El Peruano". Hágase saber.

Ss.

SAN MARTÍN CASTRO

LECAROS CORNEJO

PRADO SALDARRIAGA

RODRÍGUEZ TINEO

BARRIOS ALVARADO

PRÍNCIPE TRUJILLO

NEYRA FLORES

BARANDIARÁN DEMPWOLF

CALDERÓN CASTILLO

SANTA MARIA MORILLO

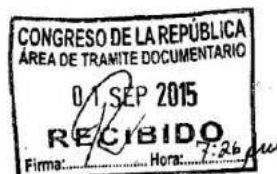
SE PUBLICO CONFORME A LEY

Dra. PILAR SALAS CAMPOS
Secretaria de la Sala Penal Permanente
CORTE SUPREMA



ANEXO N° 02:

DECRETO LEGISLATIVO N° 1194



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Lima, 01 de septiembre de 2015

OFICIO N° 135 -2015-PR

Señor
LUIS IBERICO NÚÑEZ
Presidente del Congreso de la República
Presente.-

De nuestra consideración:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 104° de la Constitución Política, nos dirigimos a usted, señor Presidente del Congreso de la República, con la finalidad de comunicarle que, al amparo de las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo mediante Ley N° 30336, y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se ha promulgado el Decreto Legislativo N° 1194, que Regula el Proceso de Inmediato en Casos de Flagrancia.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para renovarle los sentimientos de nuestra estima y consideración.

Atentamente,

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

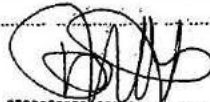
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Lima, 01 de Setiembre de 2015.

En aplicación de lo dispuesto en el inc. b) del artículo 90° del
Reglamento del Congreso de la República: para su estudio,

PASE el expediente del Decreto Legislativo 1194 a la
Comisión de Constitución y Reglamento.



HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL
Oficial Mayor(e)
CONGRESO DE LA REPUBLICA



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ML
MARCO LEÓN FLORES PABOZA TELLO
SECRETARIO DEL GOBIERNO DE MINISTROS

Decreto Legislativo Nº 1194

f
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30336, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en materia de Seguridad Ciudadana, Fortalecer la Lucha contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, por el término de noventa (90) días calendario;

Que, en este sentido, el literal a) del artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la facultad de legislar sobre el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera;

Que, resulta necesario establecer instrumentos normativos eficaces en el racional procesamiento de causas penales bajo el supuesto de flagrancia delictiva; que permitirá resultados positivos en la lucha contra la delincuencia; el crimen organizado, entre otros, en beneficio de la comunidad en general;

De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2 de la Ley N° 30336 y en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

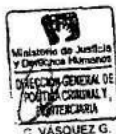
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:


DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL PROCESO INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA

Artículo 1°.- Objeto de la norma

La presente norma tiene el objeto de regular el proceso inmediato en casos de flagrancia, modificando la Sección I, Libro Quinto, del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


MARCO LEÓN PAREDES
SECRETARIO DEL CONSEJO DE MINISTROS

Artículo 2°.- Modificación de los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957

Modifícanse los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957, en los siguientes términos:

"Artículo 446.- Supuestos de aplicación

1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:
 - a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259;
 - b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160; o
 - c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.
2. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean necesarios ulteriores actos de investigación.
3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable.
4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente Código.

"Artículo 447.- Audiencia única de Incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva

Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes al requerimiento fiscal, realiza una Audiencia única de Incoación para determinar la





ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ML
MARCO LEÓN FELIPE BARBOZA TELLO
SECRETARIO DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Legislativo

LM
procedencia del proceso inmediato. La detención del imputado se mantiene hasta la realización de la Audiencia.

2. Dentro del mismo requerimiento de incoación, el Fiscal debe acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. El requerimiento de incoación debe contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 336.
3. En la referida Audiencia, las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según corresponda.
4. La Audiencia única de Incoación del proceso inmediato es de carácter inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. El Juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente orden, según sea el caso:

- a) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal;
- b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes;
- c) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato.

5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada, de modo impostergable, en la misma Audiencia de Incoación. La resolución es apelable con efecto devolutivo.

6. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la Investigación Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448.

7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dicta la Disposición que corresponda o la formalización de la Investigación Preparatoria.

Para los supuestos comprendidos en los literales b) y c), numeral 1 del artículo 446, rige el procedimiento antes descrito en lo que corresponda. Solo en estos supuestos, el requerimiento se presenta luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria."



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


[Firma]
MARCO LEÓN FLORES ARBOZATELLO
SECRETARIO DEL CONSEJO DE MINISTROS

"Artículo 448 Audiencia única de Juicio Inmediato"

[Firma]
Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, El Juez penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional.

2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la Audiencia, bajo apercibimiento de prescindirse de ellos.
3. Instalada la Audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 349. Si el Juez Penal determina que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350, en lo que corresponda. El Juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos de validez de la acusación de conformidad con el numeral 1 del artículo 350 y resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y oral.
4. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. El Juez Penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta Sección, se aplican las reglas del proceso común, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato".


Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA JURIDICAL Y PENITENCIARIA
C. VÁSQUEZ G


Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
A. Martín L.

Artículo 3°.- Adelanto de la vigencia a nivel nacional de la Sección I, Libro Quinto del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957

Adelántase la vigencia a nivel nacional de la Sección I, libro Quinto del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA: Vigencia

La presente norma entra en vigencia a nivel nacional a los noventa (90) días de su publicación en el diario oficial El Peruano.


Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
A. García M.


F. JIMENEZ



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MARCO LEÓN FLORES LÓPEZ TELLO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Decreto Legislativo

SEGUNDA: Gestión de Audiencias

En cada Distrito Judicial, la Presidencia de las Cortes Superiores de Justicia designan a un funcionario responsable de la gestión de audiencias para procesos inmediatos en casos de flagrancia, quien tiene a su cargo la administración de la agenda y de los espacios para la realización de las audiencias, así como las tareas relativas a su registro, publicidad, organización y asistencia de las partes.



La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores; la Dirección Distrital de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o quien haga sus veces y la máxima autoridad de la Policía Nacional del Perú, en cada Distrito Judicial, designan a un funcionario de enlace con el funcionario responsable de la gestión de audiencia señalado en el párrafo anterior, a fin de coordinar los temas interinstitucionales de organización para la realización efectiva, célere y adecuada de las audiencias.



Tercera.- Financiamiento

La implementación de las medidas establecidas en la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil quince.



OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior

GUSTAVO ADRIÁN OLIVERA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

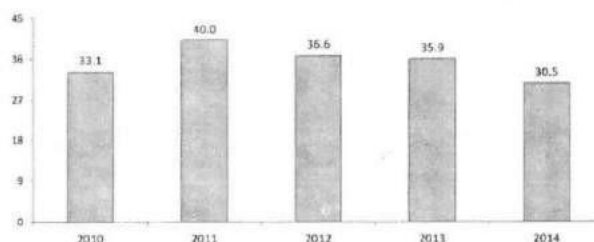
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

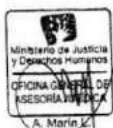
Conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos – ENAPRES, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, determinan que si bien las tasas de victimización se han reducido en un 10% del año 2011 al 2014, aún estas siguen siendo altas, lo que determina que 3 de cada 10 encuestados ha sido víctima de un delito en los últimos doce meses.

GRÁFICO N° 01

EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, ¿USTED HA SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO QUE ATENTÓ CONTRA SU SEGURIDAD?
Robo o intento de robo de dinero, cartera, celular, vestimenta, amenazas e intimidaciones, maltrato y ofensas sexuales, secuestro, extorsión, robo de negocio y robo o intento de robo de vehículo automotor, autopartes, motocicleta, mototaxi o bicicleta
(Porcentaje)



Año 2010: Los datos corresponden al periodo mayo - diciembre.
Año 2011: Los datos corresponden al periodo abril - diciembre.
Año 2012, 2013, 2014: Los datos corresponden al periodo enero - diciembre.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos.



A. Marín L.



C. VÁSQUEZ G.



F. JIMÉNEZ

Del 100% de delitos cometidos en los últimos doce meses, la mayor incidencia lo representan los delitos patrimoniales, en especial los robos de cartera, celular, vehículos, negocios, a los que se suma las extorsiones y secuestros. Estos delitos se cometen, principalmente, en espacios públicos o privados, de naturaleza flagrante, siendo estos los principales hechos delictivos que generan la mayor percepción de inseguridad de los ciudadanos, quienes esperan una respuesta rápida de las autoridades para la aprehensión y posterior sanción de quienes las realizan.

GRÁFICO N° 02
HECHOS DELICTIVOS MAS FRECUENTES



1/ Comprende: Auto, camioneta, autogreteros de vehículo automotor, motocicleta, moto-taxi y bicicleta.
2/ Incluye: Maltrato físico y/o psicológico de algún miembro del hogar, acoso, abuso, violación, entre otros.
3/ Comprende: Robo de negocio, maltrato físico de otra persona no miembro del hogar.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos

No suma el 100% porque una persona pudo haber sido víctima de más de un hecho delictivo.

La Reforma Procesal Penal en el Perú ha generado una transformación en el Sistema de Justicia Penal, generando una mayor descongestión de casos, celeridad, transparencia, imparcialidad entre otras características que hacen posible una mayor satisfacción del usuario de justicia y mejores condiciones procesales para el adecuado funcionamiento de dicho Sistema de Justicia¹.

Dicha situación se debe en gran parte a la metodología de atención que el nuevo Código Procesal Penal incorpora al procesamiento de casos penales, posibilitando el uso de salidas alternativas o mecanismos de simplificación procesal, con la finalidad de racionalizar la cargas de trabajo, por razón de las personas, materia, gravedad del delito, estándar probatorio, entre otros.

Dichos mecanismos alternativos o de simplificación se fundamentan bajo los siguientes criterios:

- El carácter selectivo del Sistema de Justicia Penal, la necesidad de racionalizar la persecución penal pública frente a los escasos recursos públicos disponibles y las características de última ratio y subsidiariedad del mismo.
- Razones de conveniencia social que indiquen que debe prescindirse al máximo la respuesta penal tradicional respecto de personas que cuentan con altas posibilidades de reinserción social.



A. MARIN L.



C. VÁSQUEZ G.



F. JIMENEZ

¹ Véase el "Informe Estadístico Nacional, 2006-2010 – La Reforma Procesal Penal Peruana – Hacia una Justicia Rápida y Transparente", Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lima - 2011.

- La satisfacción real y oportuna de los intereses de la víctima por parte del Sistema de Justicia Penal².
- Organizar y planificar la respuesta del Sistema de Justicia Penal bajo el criterio de eficiencia sobre aquellos casos en los que, por sus propias características son innecesarios mayores actos de investigación³.

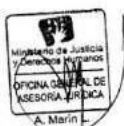
Por tanto, dichos mecanismos constituyen en conjunto uno de los pilares principales del Código Procesal Penal, pues permite simplificar, economizar y descongestionar el Sistema de Justicia Penal, logrando resultados de mayor eficacia en la respuesta penal frente a los punibles.

Dentro de estos, el proceso inmediato constituye uno de los principales mecanismos de simplificación, el mismo que tiene sus bases en el Ordenamiento Italiano de 1988 que regula el *giudizio immediato* (443° a 458°)⁴, donde se prescinde de la etapa intermedia, quedado expedito los hechos para el juzgamiento, en especial para presupuestos de flagrancia, confesión del imputado o la obtención de prueba evidente y suficiente para atribuir responsabilidad al investigado.

El fundamento de estos mecanismos radica en la necesidad de simplificar el procedimiento penal, haciéndolo más sencillo, rápido y eficiente, para reducir el tiempo en que se brinda una respuesta penal, combatir la morosidad procesal y descongestionar el número de casos a la espera de juicio. En la legislación comparada, conocidos son el "procedimiento acelerado" (Alemania), "sentencia de conformidad" (España), "procedimiento simplificado" (Francia), "giudizio direttissimo y giudizio immediato" (Italia), "proceso sumarísimo" (Portugal), "summary offenses, indictable offenses o felonies; hybrid o dual procedure offenses" (Países del commonlaw), "procedimiento simplificado" (Chile y Ecuador), "procedimiento extraordinario" (Uruguay), entre otros países.

El VI Plenario Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República emitió el Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116, denominado "Acusación Directa y Proceso Inmediato", del dieciséis de noviembre de 2010, en la que definió al proceso inmediato como "un proceso especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de investigación (Fundamento N° 07)". En tal sentido, siguiendo la regla hermenéutica del Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116, establece la "aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso inmediato o las disposiciones y su estructura procesal".

Bajo dichos presupuestos, el proceso inmediato, "al ser uno especial que se particulariza en razón de sus supuestos de aplicación: flagrancia delictiva; confesión del imputado; y que los elementos de convicción acumulados durante las diligencias



²DUCE J. Mauricio y RIEGO R. Cristian. "Proceso Penal". Editorial Jurídica Chile 2007. p. 295.

³Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú N° 06-2012/CJ-116.

⁴NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal, 2010.

preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes, no existe etapa intermedias (Fundamento N°17).*

Desde su vigencia, el proceso inmediato ha pasado por varios criterios interpretativos de aplicación, ya sea debido a su confusión con la acusación directa⁵ en los primeros años, para luego cuestionar su legitimidad -fundamentada en la limitación del ejercicio de las garantías procesales y derechos de las partes procesales-, al no desarrollarse bajo este proceso la etapa de la investigación preparatoria y etapa intermedia.

Dicho situación estableció casi por inercia una situación de incertidumbre en cuanto a su aplicación por parte de los operadores de justicia, lo que aunado al factor discrecional de su aplicación y a la falta de capacitación de varios operadores de justicia, hizo que dicho mecanismo deje de ser aplicado a nivel nacional.

La importancia y utilidad de la aplicación del proceso inmediato radica en su grado de intervención y naturaleza -sobre aquellos delitos que configuran flagrancia delictiva-, ofreciendo un tratamiento procedimental simplificado y eficaz frente al delito flagrante (tránsito directo de las diligencias preliminares a la etapa de juzgamiento), a diferencia del proceso común donde el caso deberá transitar por todas las etapas procesales (diligencias preliminares, investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento), dilatándose innecesariamente el caso.

Este factor cualitativo del proceso inmediato justifica su vigencia, así como el restablecimiento de su aplicación a nivel nacional, resultando necesario que el Estado incentive su aplicación a través de las modificaciones y precisiones normativas pertinentes que la hagan más operativa y predecible.

En ese sentido, el Poder Judicial viene implementando el Plan Piloto de Órganos Jurisdiccionales para la flagrancia delictiva en el Distrito Judicial de Tumbes, el cual tiene por objeto establecer un tratamiento especial y célere en la investigación y juzgamiento de los delitos flagrantes, a fin de obtener una decisión pronta y eficaz a los delitos que atentan contra la seguridad ciudadana.

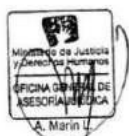
Mediante Resolución Administrativa N° 231-2015-CE-PJ, del 15 de julio del 2015, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dispuso por mayoría implementar a partir del 1 de agosto del 2015, en el Distrito Judicial de Tumbes el Plan Piloto de Órganos Jurisdiccionales para la Flagrancia Delictiva en el Distrito Judicial de Tumbes, designando como órganos componentes a:

- Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes.
- Primer Juzgado Penal Unipersonal de Tumbes.
- Sala Penal de Apelaciones de Tumbes.

La Resolución en mención dispone que estos órganos jurisdiccionales, tendrán competencia en todo el distrito judicial de Tumbes y conocerán los delitos flagrantes como el de peligro común (conducción de vehículo en estado de ebriedad), entre otros.

Se entiende que este plan se complementa con los protocolos de actuación conjunta entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y demás entidades del sistema de justicia que participan en la investigación, juzgamiento y resolución de delitos flagrantes.

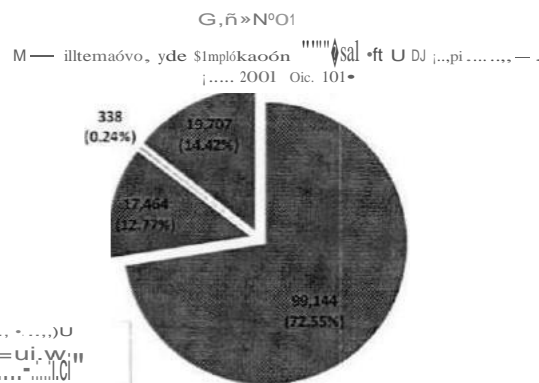
⁵VASQUEZ GANOZA, Carlos Zoe. Acusación Directa vs Proceso Inmediato, en: Dialogo con la Jurisprudencia, Tomo 118.



Asimismo, en el marco de este proceso, la presente propuesta normativa condice con la iniciativa del Poder Judicial y permitirá revestir su implementación bajo una norma con rango de ley

U. PROBLEMÁTICA

De los constantes monitoreos efectuados por la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, se evidencia luego de 9 años de su vigencia una considerable aplicación de salidas alternativas y mecanismos de simplificación, especialmente del Principio de Oportunidad. Acuerdo Reportono, Terminación Anticipada del Proceso e incluso la Acusación Directa: no obstante ello, el Proceso hvnechato es el mecanismo procesal que menos se ha aplicado durante estos 9 años, representando tan solo 338 casos, CQnforme se aprecia en el grafico S9Jiente



Esta falta de aplicación impacta negativamente en el Sistema de Justicia Penal, pues no permite que una considerable carga procesal que ingresa bajo los presupuestos de flagrancia dehecuva sea resuelta mediante este mecanismo. haciéndose necesario reactivar su uso mediante el presente proyecto legislativo. Asimismo, su falta de aplicación genera una sobrecarga procesal (en diligencias, excepciones, notificaciones, trámites administrativos, etc.) a las etapas de investigación preparatoria y etapa preliminar.

"V b, "República Es3disticos de la a d91 Códva Pf-Jee.al Penal en le- 0110,101 Jo. — !!• Huour, La Literlad. faena. Moc.,eg.ja. .01C— Tumb-. p.,a V L.,,tda/eca:u. ru!111601 oor il s.,...ia T dio eom,,,,, de Implme<Ución ,el CPP. oon<a el 36% ,rom..tc ;e las a.h-... <de ainrral ae IICU!aCidfi son oel clillic óe OmIMIn ., la AsIS***-' F . ., la que g,erB"111mlfife se Ulo<a, la -,;,en ,lf,;,,.

Respecto a los delitos por omisión de asistencia familiar y contra la seguridad pública, entre los años 2012 al 2015, el Poder Judicial ha constatado un incremento en los ingresos por este tipo de delitos, por lo que se sugiere implementar el proceso inmediato en estos casos a fin de coadyuvar en la reducción de la carga procesal.

Alcances de la modificación:

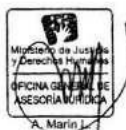
Para la aplicación eficiente y eficaz del Proceso Inmediato, debe delimitarse en primer término, de manera expresa, su ámbito orientado a los delitos cometidos en flagrancia, así como a quienes confiesen la comisión del acto delictivo o que los elementos de convicción acopiados sean abundantes para acreditar la responsabilidad del agente, exceptuándose los casos complejos.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la norma dispone su aplicación a dos delitos que por su naturaleza, ciertos operadores de justicia consideren que no se encuentran en estado de flagrancia: se trata del emblemático delito de peligro común de Conducción en estado de Ebriedad o Drogadicción, y también al no menos importante y recurrente delito de Omisión a la Asistencia Familiar. Y es que la probanza de ambos hechos no requiere de validación especial alguna para demostrar, ya sea por la evidencia de la prueba y por el estado de flagrancia permanente de su comisión y su autor; pues en el caso primer caso, la comisión del delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, se corrobora con el examen de aire aspirado o cualitativo, los cuales son indicios de la comisión del delito, que se corrobora con la prueba del Dosaje Etílico Cuantitativa a través del análisis de la prueba de sangre, que permite cuantificar los gramos/litros de alcohol en la sangre; y, en el segundo caso, con la sentencia firme que condena al autor/autora de la omisión de la obligación legal de asistir al acreedor alimentario.

Carece de sustento que los procesos penales por la comisión de ambos delitos se prorroguen de manera innecesaria- si el agente no se acoge al Principio de Oportunidad- cuando el procesamiento se fundamenta en fuertes elementos de convicción que vinculan al presunto autor con el delito, resulta inaudito, que se tramite un proceso el cual pasa por todas sus etapas, existiendo medios de prueba incuestionables que hacen innecesario prolongarlo, cuando, desde sus inicios, el Juzgador cuenta con los elementos que le permiten determinar la situación jurídica del imputado.

Acortar los plazos de los procesos, respetando escrupulosamente las garantías que informan el debido proceso, se convierte en una de las metas a cumplir por el Poder Judicial, al cual debe dotársele de las herramientas orientadas a dicho fin, más aún, cuando en las reuniones de coordinación sostenidas entre dicho poder del Estado y el Ministerio del Interior, los representantes de aquél señalaron, de manera reiterada, de la necesidad de contar con un mecanismo que les permita procesar ambos delitos bajo los alcances del Proceso Inmediato.

Por todo ello, la norma exige se cumplan ciertas condiciones que garanticen la defensa del imputado así como de mecanismos que permitan no solo que cuente con abogado defensor durante todo el proceso, sino que sea posible ofrecer y actuar todos los medios que le permitan sustentar su teoría, de manera tal, que el Proceso Inmediato, en lo referido a garantías procesales, no tiene limitaciones en relación al Proceso Común, quedando así establecido que aún tratándose de un proceso célere, los derechos del imputado están garantizados.

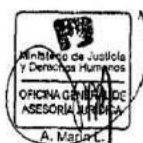


En este sentido, el Centro de Informática del Poder Judicial ha remitido las estadísticas relacionadas a los procesos por delito de Omisión de Asistencia familiar, observándose casi cien mil causas a nivel nacional, conforme al siguiente cuadro:

INGRESO POR DELITOS DE OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR

CSJ	2012	2013	2014	2015	Total General
AMAZONAS	240	209	158	30	637
ANCASH	1180	287	327	44	1848
APURIMAC		131	120	17	258
AREQUIPA	1346	1708	1671	235	4960
AYACUCHO		581	648	83	1312
CAJAMARCA		875	1047	361	2283
CALLAO	386	492	438	122	1438
CANETE	3	568	557	122	1350
CUSCO		788	1241	66	2095
HUANCAYELICA		661	468	20	1149
HUANUCO	1986	603	1103	262	3954
HUAYURA		1373	1704	365	3442
ICA		2624	4816	58	7498
JUNIN		2312	5350	407	8069
LA LIBERTAD	2139	2471	2087	449	7146
LAMBAYEQUE		4062	4411	489	8962
LIMA		2414	2683	174	5271
LIMA ESTE			3418	368	3786
LIMA NORTE		3533	1692	271	5498
LIMA SUR		946	926	59	1931
LORETO		178	110	99	387
MADRE DE DIOS		295	324	70	689
MOQUEGUA		209	298		507
PASCO		120	359	43	522
PIURA	1866	2253	3256	205	7580
PUNO		415	605	168	1188
SAN MARTIN		330	731	28	1179
SANTA		1531	2071	419	4021
SULLANA		935	605		1540
TACNA		945	891	122	1958
TUMBES		306	948	135	1389
UCAYALI		176	130	7	313
VENTANILLA			143	2	145
TOTAL GENERAL	9146	52963	45438	5370	92915

Fuente: Poder Judicial - CIJ



En cuanto a los delitos de conducción en estado de ebriedad y drogadicción, si bien la cantidad de procesos se reduce en un tercio del anterior, sesenta mil causa aproximadamente en los últimos años, la finalidad de la presente norma está orientada a reducir los plazos del procesamiento, por tanto creemos que incidirá, de manera favorable, en reducir los plazos de los procesos a iniciarse.

La misma fuente el Centro de Informática del Poder Judicial, ha remitido la estadística de las causas por delito contra la Seguridad Pública – Conducción en Estado de Ebriedad y Drogadicción:

INGRESO POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

CSI	2012	2013	2014	2015	TOTAL GENERAL
CALLAO	263	1069	950	178	2960
LIMA		3806	2838	281	6945
LIMA ESTE			4697	522	5249
LIMA NORTE		2297	1874	376	4547
LIMA SUR		1019	1477	772	3268
VENTANILLA			166	18	184
Total general	793	8190	12034	2177	23164

CSI	2012	2013	2014	2015	TOTAL GENERAL
AMAZONAS	76	48	35	7	176
ANCASH	468	122	226	27	843
APURIMAC		67	124	5	196
AREQUIPA	568	1299	1895	255	4448
AYACUCHO		203	205	15	423
CAJAMARCA		522	589	192	1283
CANETE		172	204	46	422
CUSCO		436	934	72	1462
HUANCAVELICA		24	41		65
HUANUCO	942	324	660	135	2061
HUAURA		476	653	167	1295
ICA		573	1988	12	1673
IQUIN		746	2132	101	2979
LA LIBERTAD	2183	2032	1805	227	6247
LAMBAYEQUE		1536	1942	186	3666
LORITO		421	150	102	673
MADRE DE DIOS		99	146	29	274
MOQUEGUA		35	92		127
PASCO		14	50	6	70
PIURA	550	849	1559	150	3118
PUNO		194	242	47	483
SAN MARTIN		179	319	50	548
SANTA		300	512	128	938
SILILANA		251	173		424
TACNA		453	591	59	1103
TUMBES		373	597	69	943
UCAYALI		101	117	7	225
Total general	5165	11849	16993	2106	36113

Fuente: Poder Judicial - CIJ



III. PROPUESTA NORMATIVA PROCESAL EN TORNO A LA FLAGRANCIA DELICTIVA

1. Definición del Proceso Inmediato y supuestos de su aplicación:

La presente norma parte por conceptualizar, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el Acuerdo Plenario N° 06-2010/CJ-116, al proceso inmediato como uno de naturaleza especial y

simplificado, que tiene por finalidad el juzgamiento oportuno y ágil de determinados casos que, por su naturaleza (flagrancia, confesión sincera del imputado o suficientes elementos de convicción), tornan innecesarios mayores actos de investigación y, por ende, del uso de etapas previas al juicio (investigación preparatoria y etapa intermedia). En tal sentido, de preeminencia oral, el proceso inmediato permite un ahorro significativo de tiempo y recursos humanos, que la Administración de Justicia Penal pueda concentrar en otros casos de mayor complejidad, lo que no implica un desmedro en el respeto a las garantías del justiciable, sino el establecimiento de un debido proceso proporcional a las circunstancias que lo motivaron⁷.

Tres son los supuestos en los que procede el proceso inmediato: a) Flagrancia delictiva; b) Confesión sincera del imputado; o, c) Suficientes elementos de convicción. De estos, la flagrancia constituye un elemento objetivo sobre el hecho materia del proceso (v.gr. se ha encontrado al imputado cometiendo el hecho delictivo; dentro de las 24 horas de su realización con los efectos de instrumentos procedentes del delito; o ha sido identificado por la víctima o testigos, dentro del término antes establecido). Los dos otros elementos constituyen por el contrario elementos subjetivos relacionados a la facultad o al criterio del Fiscal, quien determinará que pese a la confesión o interrogatorio previo, existen suficientes elementos de convicción o no que corroboren el hecho delictivo. En tal sentido, la propuesta normativa se orienta a establecer la incoación del proceso inmediato de manera imperativa para casos de flagrancia, preservando su naturaleza facultativa para los otros dos supuestos.

De igual manera, se busca aplicar de manera taxativa a los delitos de peligro común como el caso de la conducción en estado de ebriedad, o al delito de Omisión a la Asistencia Familiar estando a que su probanza – como se señaló anteriormente – no requiere de validación alguna para demostrar la evidencia de la prueba.

No cabe duda que, por su naturaleza, el proceso inmediato está diseñado para casos que no revisten la característica de complejidad o conexidad de delitos, para lo cual la propuesta establece la excepción de su no aplicación, siendo los únicos supuestos que, pese a la existencia de una flagrancia, el fiscal estaría exento de responsabilidad funcional de no haber solicitado su incoación.



⁷ Véase ARAYA VEGA, Alfredo. El delito en flagrancia, Análisis y propuesta de un nuevo procedimiento especial. Editorial Sur Gráfica. Lima, 2015. Pág. 135. "La existencia de un procedimiento especial no es per se una cuestión discriminatoria y desigual, siempre y cuando exista una base objetiva que requiera hacer la diferenciación... mediante la atención en flagrancia se pretende agilizar el procedimiento usando como criterio de diferenciación la detención en flagrancia, en tanto implica la existencia inmediata de los elementos de prueba necesarios, en principio, para resolver adecuadamente el asunto (por ejemplo, la existencia de una víctima del hecho, testigos presenciales, decomiso de bienes, etc.)."

2. Audiencia única de la incoación del proceso inmediato para casos de flagrancia:

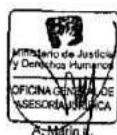
Teniendo en consideración que los casos de flagrancia, de conformidad con el artículo 259° del Código Procesal Penal, determinan la detención del imputado, la propuesta normativa establece la necesidad de regular una audiencia única que permita al Fiscal mantener o no dicha detención previa, a través de una medida coercitiva, la aplicación de un criterio de oportunidad por las partes, de ser el caso, para luego pronunciarse sobre la incoación del proceso inmediato.

Debido a su característica celeridad, la propuesta normativa establece plazos perentorios e inaplazables, que deben ser respetados por los funcionarios públicos competentes, bajo responsabilidad funcional. En tal sentido, la norma dota de una característica esencialmente oral a las solicitudes de las partes, así como de la decisión jurisdiccional.

3. Audiencia única de juicio inmediato

Al igual que la audiencia anterior, la norma establece la naturaleza inaplazable del juicio inmediato. En tal sentido, la audiencia única se bifurca en dos partes: Una primera, en la que se verificará el cumplimiento de los requisitos de validez de la acusación y se resolverán las cuestiones planteadas por los demás sujetos procesales frente a dicho requerimiento. Una segunda, tendiendo en consideración las características propias de la flagrancia, donde la norma instruye a las partes a preparar y conducir a sus órganos de prueba a la audiencia única, desarrollándose el juicio inmediato en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión.

Dada la naturaleza celeridad del proceso inmediato, la norma establece el imperativo de la culminación del juicio por parte del Juez Penal que instaló e inició aquel, esto es, no podrá instalar otros juicios hasta que no haya culminado la audiencia única ya instalada. Asimismo, la aplicación supletoria del proceso común, se debe ajustar a dicha naturaleza de celeridad.



IV. OBJETIVOS DE LA NORMA:

- 4.1. Sancionar los hechos delictivos en flagrancia delictiva, facilitando la intervención del Estado para la rápida conclusión del proceso penal.
- 4.2. Satisfacer oportunamente el daño sufrido por la víctima, así como las expectativas ciudadanas.
- 4.3. Otorgar mayor celeridad a los procesos penales bajo el supuesto flagrancia delictiva, al impedir que transiten por todas las etapas del proceso penal.
- 4.4. Reducir la sobrecarga procesal de la etapa de investigación preparatoria y etapa intermedia, pues no se necesitarían mayores actos procedimentales y de investigación que corroboren la existencia del delito y la responsabilidad penal del imputado.

- 4.5. Generar el ahorro de los recursos públicos, evitando gastos y esfuerzos humanos innecesarios.
- 4.6. Reducir la carga procesal significativamente.
- 4.7. Evitar la impunidad en aquellos casos que por el transcurso del tiempo dejen de ser perseguibles.

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

conforme lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 008-2006-JUS, Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, el análisis costo beneficio S/Ne como método de análisis para conocer en términos cuantitativos los impactos y efectos que tiene una propuesta normativa sobre diversas variables que afectan a los actores de la sociedad y el bienestar general, de tal forma que permite cuantificar los costos y beneficios o, en su defecto, posibilita apreciar analíticamente los beneficios y costos no cuantificables. La necesidad de la norma debe estar justificada dada la naturaleza de los problemas, los costos y beneficios probables y los mecanismos adecuados para solucionarlos.

La dación de la presente norma, permitirá simplificar el procedimiento penal, haciéndolo más sencillo, rápido y eficiente, para reducir el tiempo en que se brinda una respuesta penal, combatir la morosidad procesal y descongestionar el número de casos a la espera de juicio.

Asimismo, la implementación de las medidas establecidas en la presente norma, se financian con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

IMPACTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN ACTUAL

La presente norma modifica el Código Procesal Penal, con la finalidad de dotar a los operadores de justicia de un instrumento ágil y simplificado para sancionar oportuna y oportunamente los delitos cometidos bajo el supuesto de flagrancia delictiva y otros establecidos en la norma. Como se ha mencionado, la presente norma se orienta al fortalecimiento del ordenamiento jurídico procesal, a fin de contar con instrumentos normativos que permitan una lucha eficaz contra la delincuencia.



- 20) **Nota Anual de Rendimiento Profesional o Técnico:** Puntaje de la evaluación del desempeño profesional o técnico.
- 21) **Oficial de Armas:** Profesional egresado de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú.
- 22) **Oficial de Servicios:** Profesional egresado de una Universidad, con título registrado en la Asamblea Nacional de Rectores e inscrito en el Colegio Profesional respectivo, cuando corresponda, que se incorpora a la Policía Nacional del Perú mediante concurso público, de acuerdo a las necesidades institucionales.
- 23) **Personal:** Para efectos de la presente norma, la palabra personal se refiere a Oficiales y Suboficiales de Armas y Servicios de la Policía Nacional del Perú.
- 24) **Precedencia:** Constituye la preeminencia entre el personal para el cumplimiento de actividades de mando, empleo, ceremonial y protocolo, en consideración a la categoría, jerarquía, grado y antigüedad.
- 25) **Reasignación:** Ubicación del personal en situación de actividad, en un cargo específico, acorde a las especialidades funcionales, al Cuadro de Organización y al Cuadro de Personal. Se ejecuta en cualquier momento, de acuerdo a las necesidades del servicio.
- 26) **Renovación de cuadros:** Causal de pase a la situación de retiro. Tiene la finalidad de mantener los cuadros de personal en función a las necesidades institucionales.
- 27) **Separación temporal del cargo:** Medida preventiva establecida en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú.
- 28) **Servicio policial:** Conjunto de actividades que ejecuta el personal en situación de actividad, para el cumplimiento de su finalidad y misión institucional.
- 29) **Suboficial de Armas:** Personal egresado de las Escuelas Técnico Superiores de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú.
- 30) **Suboficial de Servicios:** Personal acreditado como Técnico, egresado de los institutos superiores o centros académicos con valor oficial, debidamente registrado ante la entidad correspondiente, que se incorpora a la Policía Nacional del Perú mediante concurso público, de acuerdo a las necesidades institucionales.
- 30-A) **Suspensión temporal del servicio:** Condición derivada de Medida Preventiva prevista en el Decreto Legislativo que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú.
- 31) **Tiempo de servicios reales y efectivos:** Período de tiempo en que el personal presta servicios reales y efectivos desde el egreso de la escuela de formación en su respectiva categoría o desde la fecha de incorporación al servicio policial para el personal de servicios.

Artículo 72.- Situación de actividad fuera de cuadros.

La situación de actividad fuera de cuadros es la condición en la que el personal de la Policía Nacional del Perú con empleo, se encuentra fuera del servicio, en cualquiera de los casos siguientes:

- 1) Enfermo o lesionado por el período comprendido entre seis (6) meses a dos (2) años.
- 2) Prisionero o rehén durante el desempeño del servicio policial, por el término máximo de tres (3) años, al cabo del cual, si se ignora su existencia o paradero, es considerado como fallecido en acto de servicio.
- 3) Desaparecido en acción de armas, en acto o como consecuencia del servicio, por el término máximo de tres (3) años, al cabo del cual si se ignora su existencia o paradero, es considerado como fallecido en acción de armas, acto del servicio o como consecuencia del servicio.
- 4) Con mandato de detención emanado de autoridad judicial competente por un período mayor de seis (6) meses.
- 5) Sometido a la medida preventiva de cese temporal del empleo prevista en la Ley del

Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú.

- 6) **Sometido a la medida de suspensión temporal del servicio prevista en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú.**

Al personal de la Policía Nacional del Perú comprendido en el numeral 4) del presente artículo, que obtenga sentencia absolutoria se le reconocerá el tiempo de servicios transcurrido como de actividad en cuadros.»

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogación

Derógase el literal e) del numeral 1) del artículo 88 del Decreto Legislativo N° 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior

1281034-1

DECRETO LEGISLATIVO N° 1194

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30336, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en materia de Seguridad Ciudadana, Fortalecer la Lucha contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, por el término de noventa (90) días calendario;

Que, en este sentido, el literal a) del artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la facultad de legislar sobre el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera;

Que, resulta necesario establecer instrumentos normativos eficaces en el racional procesamiento de causas penales bajo el supuesto de flagrancia delictiva, que permita resultados positivos en la lucha contra la delincuencia; el crimen organizado, entre otros, en beneficio de la comunidad en general;

De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2 de la Ley N° 30336 y en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL PROCESO INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA

Artículo 1°.- Objeto de la norma

La presente norma tiene el objeto de regular el proceso inmediato en casos de flagrancia, modificando la Sección I, Libro Quinto, del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957.

Artículo 2°.- Modificación de los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957

Modifícanse los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957, en los siguientes términos:

"Artículo 446.- Supuestos de aplicación

1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:
 - a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259;
 - b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160, c
 - c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.
2. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean necesarios ulteriores actos de investigación.
3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable.
4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente Código.

"Artículo 447.- Audiencia única de incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva

1. Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes al requerimiento fiscal, realiza una Audiencia única de incoación para determinar la procedencia del proceso inmediato. La detención del imputado se mantiene hasta la realización de la Audiencia.
2. Dentro del mismo requerimiento de incoación, el Fiscal debe acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. El requerimiento de incoación debe contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 336.
3. En la referida Audiencia, las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según corresponda.
4. La Audiencia única de incoación del proceso inmediato es de carácter inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. El Juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente orden, según sea el caso:
 - a) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal;
 - b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes;
 - c) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato.
5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada, de modo impostergable, en la misma Audiencia de incoación. La resolución es apelable con efecto devolutivo.
6. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento

fiscal, el Juez de la Investigación Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448.

7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dicta la Disposición que corresponda o la formalización de la Investigación Preparatoria.

Para los supuestos comprendidos en los literales b) y c), numeral 1 del artículo 446, rige el procedimiento antes descrito en lo que corresponda. Solo en estos supuestos, el requerimiento se presenta luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria."

"Artículo 448 Audiencia única de Juicio Inmediato

1. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, El Juez penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional.
2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la Audiencia, bajo apercibimiento de prescindirse de ellos.
3. Instalada la Audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 349. Si el Juez Penal determina que los delitos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350, en lo que corresponda. El Juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos de validez de la acusación de conformidad con el numeral 1 del artículo 350 y resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y oral.
4. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. El Juez Penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta Sección, se aplican las reglas del proceso común, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato."

Artículo 3°.- Adelanto de la vigencia a nivel nacional de la Sección I, Libro Quinto del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957

Adelántase la vigencia a nivel nacional de la Sección I, libro Quinto del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera: Vigencia

La presente norma entra en vigencia a nivel nacional a los noventa (90) días de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Segunda: Gestión de Audiencias

En cada Distrito Judicial, la Presidencia de las Cortes Superiores de Justicia designan a un funcionario responsable de la gestión de audiencias para procesos inmediatos en casos de flagrancia, quien tiene a su cargo la administración de la agenda y de los espacios para la realización de las audiencias, así como las tareas relativas a su registro, publicidad, organización y asistencia de las partes.

La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, la Dirección Distrital de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o quien haga sus veces y la máxima autoridad de la Policía Nacional del Perú, en cada Distrito Judicial, designan a un funcionario de enlace con el funcionario responsable de la gestión de audiencia señalado en el párrafo anterior, a fin de coordinar los temas interinstitucionales de organización para la realización efectiva, célere y adecuada de las audiencias.

Tercera.- Financiamiento

La implementación de las medidas establecidas en la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior

GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1281034-2

DECRETO LEGISLATIVO N° 1195

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30335, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica y financiera, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica y financiera, por el término de noventa (90) días calendario;

Que, en ese sentido el literal d) del artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la facultad de legislar para promover el consumo humano directo del recurso hidrobiológico a través del desarrollo de la acuicultura;

Que, el desarrollo de la acuicultura como actividad económica de interés nacional, coadyuva a la diversificación productiva, la competitividad y seguridad alimentaria, en armonía con la preservación del ambiente, la conservación de la biodiversidad y la sanidad e inocuidad de los recursos y productos hidrobiológicos, destacándose su importancia en la obtención de productos de calidad para la alimentación y la industria, la generación de empleo, de ingresos y de cadenas productivas, entre otros beneficios;

Que, resulta necesario orientar, integrar, coordinar, ejecutar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación y cumplimiento de la política pública en materia de acuicultura, así como los planes, programas y acciones destinados a fomentar el crecimiento y desarrollo de la acuicultura a nivel nacional, y a promover prácticas acuícolas que contribuyan a la conservación y aprovechamiento sostenible del ambiente donde se desarrolla, para lo cual se requiere la participación de todas las entidades y usuarios vinculados a las actividades acuícolas;

De conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 2 de la Ley N° 30335, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica y financiera, el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República,
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY GENERAL DE ACUICULTURA

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto fomentar, desarrollar y regular la acuicultura, en sus diversas fases productivas en ambientes marinos, estuarinos y continentales.

Artículo 2.- Declaración de interés nacional

Declárase el desarrollo de la acuicultura sostenible como actividad económica de interés nacional

que coadyuva a la diversificación productiva y la competitividad, en armonía con la preservación del ambiente, la conservación de la biodiversidad y la sanidad e inocuidad de los recursos y productos hidrobiológicos, destacándose su importancia en la obtención de productos de calidad para la alimentación y la industria, la generación de empleo, de ingresos y de cadenas productivas, entre otros beneficios.

Artículo 3.- Principios

El desarrollo de la acuicultura se rige por los siguientes principios:

3.1 **Sostenibilidad.-** El Estado promueve el desarrollo sostenible de la acuicultura, en armonía con la conservación de los recursos y del ambiente considerando la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de la población a través de la promoción de una actividad acuícola rentable y competitiva.

3.2 **Enfoque Ecosistémico.-** La actividad acuícola se adecúa y respeta el enfoque ecosistémico, considerando las dimensiones ambiental, social e institucional, garantizando la participación, equidad en la distribución de los beneficios y el respeto a la integridad y funcionalidad de los ecosistemas, garantizando la capacidad de recuperación de los sistemas socio-ecológicos interconectados.

3.3 **Diversidad Genética.-** La diversidad genética representa la materia prima biológica tanto de la acuicultura como de otros usuarios y su preservación es determinante para el equilibrio ecológico. La diversidad genética de las poblaciones naturales o de craderos, por lo tanto, se gestiona de manera responsable basándose en la mejor evidencia científica disponible, analizando los riesgos ecológicos de las alteraciones antrópicas y tomando en consideración también el conocimiento tradicional.

3.4 **Seguridad alimentaria y nutricional.-** El Estado reconoce que la acuicultura es un pilar importante de la seguridad alimentaria y nutricional de la población ya que representa una fuente de alimentos de alto valor proteico.

3.5 **Sanidad, Calidad e Inocuidad.-** Las actividades acuícolas se realizan en ambientes de cultivo que propician la sanidad de las especies que en él se crían,

3.6 asegurando la sanidad animal, la calidad e inocuidad de los productos acuícolas con sistemas de trazabilidad implementados a lo largo de toda la cadena productiva.

3.7 **Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.-** El Estado promueve y fortalece la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, procurando la diversificación productiva, la competitividad y la optimización de la cadena productiva de la acuicultura.

3.8 **Transparencia e información.-** El Estado promueve y facilita el registro y acceso a la información actualizada relacionada con la actividad acuícola, de acuerdo con las normas correspondientes, articulando con los sectores público y privado.

3.9 **Participación ciudadana.-** El Estado, a través del Ministerio de la Producción, así como de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, promueve acciones que fortalecen la confianza y credibilidad entre los actores involucrados con la actividad acuícola, a través del establecimiento de procesos participativos libres e informados, que favorezcan la prevención y gestión de conflictos, para asegurar la sostenibilidad de la actividad acuícola y el desarrollo de las comunidades costeras y continentales.

3.10 **Inclusión.-** La acuicultura, como actividad productiva, deberá contribuir a la generación y diversificación de oportunidades económicas, al desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos en las zonas rurales donde se desarrolle, así como a la seguridad alimentaria y nutricional asociada al incremento de la disponibilidad de proteína de buena calidad.

Artículo 4.- Definiciones

a. **Abastecimiento de semilla.-** Obtención de semilla para cultivo, la misma que puede



ANEXO N° 03:

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

PLAN PILOTO PARA DELITOS EN FLAGRANCIA DELICTIVA (Tumbes)

DETENCIÓN DE FLAGRANCIA DELICTIVA		
Base legal: Constitución Política: Art. 2.24, f, 139.14°.		
Código Procesal Penal: Arts. IX Título Preliminar, 61.2°, 67.1°, 68.1H, 71.2.a, 84.8°, 210.1°, 259°, 263°, 264, 1°.		
Ley de la PNP (D.L.1148): Art. 11.1°		
Decreto Legislativo 1194		
Documentos a elaborar y denominación: Acta de intervención en flagrancia		
Responsable	Procedimiento	Intervención en lugar de los hechos
Policía Nacional del Perú	1	<ul style="list-style-type: none"> - Cuando el efectivo policial advierta a través a sus sentidos que está ante un hecho que configura flagrancia delictiva, procederá a la detención de la o las personas que se encontrasen en el lugar. - Deberá comunicar de inmediato al Fiscal Penal de turno.
	2	Realizar el registro personal del detenido e incautar las especies relacionadas con el delito, iniciando el procedimiento de cadena custodia.
	3	Comunicar al detenido el motivo de su detención e informarle que tiene derecho a: <ul style="list-style-type: none"> - Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda. - Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata. - Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por su abogado defensor. - Abstenerse de declarar, y si acepta

		<p>hacerlo, a que su Abogado Defensor se encuentre presente en su declaración y en todas las diligencias en que requiere su presencia; en caso contrario se le deberá asignar un defensor de oficio de la Defensa Pública.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contra su dignidad, ni ser sometido a técnicas o método a que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley; y - Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la Salud, cuando se estado de Salud así lo requiera. (Art. 71.2 del CPP)
	4	El cumplimiento de lo prescrito anteriormente (derechos) deberá constar en acta.
	5	El efectivo policial deberá comunicar en forma inmediata la detención al fiscal que corresponda.
	6	Las se deberán levantar en el lugar de los hechos excepcionalmente se elaborarán o continuaran su elaboración en la dependencia policial; dejando constancia de las razones que conllevaron a estos supuestos.
Responsable	Procedimiento	Actos en la dependencia policial
Policía Nacional del Perú	7	El efectivo policial deberá poner a los detenidos a disposición de la Comisaría del sector y/o Unidad Especializada, conjuntamente con las respectivas actas levantadas y evidencias.
	8	El responsable de las comisarias o la Unidad Especializada deberá verificar la conformidad de las actas y evidencias puestas a disposición.
	9	En caso de haberse comunicado la detención al Fiscal de turno por motivos razonables, el efectivo policial de la Comisaria o de la Unidad especializada responsable del detenido deberá hacerlo de forma inmediata.
	10	El efectivo policial responsable del detenido deberá notificar su detención (papeleta de detención) indicando lugar fecha y hora de la detención en flagrancia, asimismo facilitará todos los medios que disponga para que el

		detenido pueda comunicar su situación a persona o institución que designe.
	11	Inmediatamente, se debe registrar la detención en el cuaderno de detenidos en la Comisaría o Unidad, consignando el lugar, fecha y hora de la detención en flagrancia delictiva.
	12	El Fiscal y el efectivo policial deberán permitir que el detenido se entreviste con su abogado defensor, una vez constituido en la dependencia policial, en forma inmediata (artículo 84° inciso 8).
	13	El Fiscal y el efectivo policial deberán permitir al abogado defensor del detenido acceder a toda la información y documentación que sea necesaria para la preparación de su defensa.
	14	El Fiscal y el efectivo policial solo podrán tomar la declaración del detenido cuando esté presente su abogado defensor (art. 71. Inciso d); ello no impide registrar todas las generales de Ley. Caso contrario se le deberá asignar un abogado defensor de la Defensoría pública.
	15	PNP elaborará el informe del Resultado de la flagrancia Delictiva con la finalidad de poner en conocimiento del MP los hechos y los elementos de convicción, los mismos que servirán para la formalización de la Denuncia Fiscal (esto quiere decir, que actualmente los fiscales, cuando se están realizando las diligencias policiales, solicita mediante acta los actuados sin haberse culminado el informe).



ANEXO N° 04:

ACTUACIONES JUDICIALES

PLAN PILOTO PARA DELITOS EN FLAGRANCIA DELICTIVA (Tumbes)

ACTUACIONES JUDICIALES			
PROCESO INMEDIATO PARA DETENIDOS EN FLAGRANTE DELITO			
Responsable	Procedimiento	Sustento	
MINISTERIO PÚBLICO	1. Formalización de la investigación preparatoria. 2. Presenta requerimiento de prisión preventiva o comparecencia con restricciones, si lo cree necesario. 3. Presenta requerimiento de incoación de proceso inmediato. 4. Presenta requerimiento acusatorio.	El requerimiento de proceso inmediato se presentará luego de culminada las diligencias preliminares. Se acompañará al requerimiento el expediente fiscal. Art. 447.1	Plazo Dentro de las 24 horas de producido el evento delictuoso.
	El fiscal deberá precisar los siguientes datos: Imputado: - Nombre completo. - Documento de Identidad. - Domicilio real, correo electrónico, número telefónico si lo tuviera. - Nombre de su abogado defensor. - Domicilio procesal.	Los datos de los sujetos procesales son sumamente necesarios, para identificar plenamente a los que intervienen en la relación jurídica procesal, respecto a los domicilios, estos son importantes para comunicar de manera oportuna a los sujetos procesales el contenido de las resoluciones.	

<p style="text-align: center;">PODER JUDICIAL Responsable de Gestión de Audiencias en para procesos inmediatos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Número telefónico del abogado. <p>Agraviado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre completo. - Documento de Identidad. - Domicilio real, correo electrónico, número telefónico si lo tuviera. - Nombre de su abogado defensor. - Domicilio procesal. - Número telefónico del abogado si lo tuviera. <p>Representante del Ministerio Público:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre completo. - Cargo: Adjunto, Provincial, Superior, Supremo, etc. - Despacho Fiscal. - Correo Electrónico institucional. <p>Presentando el Requerimiento de Incoación de proceso inmediato por el Responsable de Mesa de partes, comunicará en el acto al Responsable de Gestión de Audiencias para Procesos Inmediatos, quien previa coordinación con el Ministerio Público y Defensa Pública</p>	
--	---	--

	procederá al agendamiento de la Audiencia, verificando los aspectos logísticos necesarios (disposición de Sala, Especialistas, etc.) para su realización.	Segunda Disposición complementaria del D. Leg. 1194	
JUEZ DE FLAGRANCIA (JIP)	2. Evaluación del proceso inmediato. Se resolverá en Despacho, previo traslado del requerimiento fiscal a los demás sujetos procesales.	Sustento	
		Previo traslado del Requerimiento Fiscal de proceso Inmediato al imputado y a los demás sujetos procesales dentro del plazo de tres días, el Juez decidirá en igual plazo sobre su procedencia.	Plazo Dentro de las 72 horas.
	6. Audiencia pública de prisión preventiva o comparecencia con restricciones. - Presencia obligatoria del Fiscal, imputado y abogado defensor del imputado. - Si el imputado no cuenta con abogado particular el Juez deberá solicitar a la Defensoría Pública a fin de que le designe un defensor de oficio.		
MINISTERIO PÚBLICO	Aprobada la celebración del proceso inmediato, el Fiscal formulará acusación.	Plazo 24 horas	
JUEZ DE LA FLAGRANCIA (JIP)	Una vez aprobada la acusación fiscal, el Juez de flagrancia remitirá los actuados al Juzgado Unipersonal o Colegiado, remitirá, según sea el caso.		
JUEZ UNIPERSONAL O COLEGIADO	7. Audiencia de citación a juicio Oral.		
	8. Audiencia de Juzgamiento - Presencia obligatoria del Fiscal, imputado y abogado defensor del imputado. (Art. 359°.1). - Si el abogado no cuenta con abogado particular el Juez deberá solicitar a la Defensoría Pública a fin de que se le designe un defensor de oficio. - Los sujetos procesales asistirán a la audiencia con sus		

	respectivos órganos de prueba. - Esta audiencia se realizará en un solo día, de no ser posible se continuará en sesiones continuas e ininterrumpidas durante los días consecutivos (dentro de los 08 días) que fueren necesarios hasta su conclusión (sentencia). Art. 360°	
SALA DE APELACIONES	Resolver en segunda instancia el acto procesal impugnado, conforme lo establecido en el Art. 27°	PLAZO
		Dentro del plazo establecido por ley, de acuerdo a la naturaleza del acto procesal impugnado.



ANEXO N° 04:

**FORMAS ANTICIPADAS DE CONCLUSIÓN AL PROCESO PARA DETENIDOS
EN FLAGRANTE DELITO**

PLAN PILOTO PARA DELITOS EN FLAGRANCIA DELICTIVA (Tumbes)

FORMAS ANTICIPADAS DE CONCLUSIÓN AL PROCESO PARA DETENIDOS EN FLAGRANTE DELITO		
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	El representante del Ministerio Público debe presentar el requerimiento junto con el requerimiento de proceso inmediato o en la misma audiencia. Se pondrá en conocimiento de la parte agraviada a fin de que se pronuncie.	JUZGADO DE FLAGRANCIA (JIP)
PRINCIPIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA		
CONCLUSION ANTICIPADA	Conforme a lo establecido en el Art. 372°.	JUZGADO UNIPERSONAL O COLEGIADO



ANEXO N° 05:

REGlamento de Aplicación del Principio de Oportunidad

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN

N° 1470-2005-MP-FN

NORMAS LEGALES 02 de agosto de 2013
Lima, 02 de agosto de 2013

802340-1

MINISTERIO PÚBLICO

Modifican el "Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad" aprobado por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1470-2005-MP-FN

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2668-2013-MP-FN

Lima, 26 de agosto del 2013

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo, cuyas funciones principales son la defensa de la legalidad, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, la persecución del delito y la reparación civil. La independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia.

Que, mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 1470-2005-MP-FN, se aprobó el Reglamento de la Aplicación del Principio de Oportunidad, señalándose el procedimiento para que los Fiscales Provinciales Penales o Mixtos, basándose en razones de economía procesal y utilidad pública, puedan decidir abstenerse de ejercitar la acción penal, como un medio para la solución pacífica del conflicto social generado por delitos de mínima gravedad, causados por el interés público, así como la conciliación del proceso penal por un acto de justicia.

Que, en el Reglamento de la Aplicación del Principio de Oportunidad, para los casos de conducción de vehículos motorizados en estado de ebriedad, no se han fijado criterios para la imposición de indemnización por reparación civil a favor del agraviado o sociedad y los señores Fiscales Provinciales Penales o Mixtos de país vienen fijando montos indemnizatorios variados, teniendo como único referente el señalado en los artículos 48° y 49° del Código Penal, y sin tener en cuenta los casos de reincidencia.

Que, el artículo 4° de la Ley N° 27793, ha incorporado como Anexo al Código Penal, la Tabla de Alcoholometría señalando niveles de intoxicación alcohólica en la sangre, cuando estos niveles en cinco períodos: subclínico, eufórico, ebriedad absoluta, grave alteración de la conciencia y coma.

Que, en este contexto y con la finalidad de uniformar los criterios mínimos para la fijación del monto de indemnización por Reparación Civil en los casos de conducción en estado de ebriedad, resulta necesario incorporar al Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad la "Tabla de Referencias para la Reparación Civil por Conducción en Estado de Ebriedad" en que se señalan parámetros referenciales para fijar el monto de reparación, precisándose en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 30076, que cuando en ocasión anterior el imputado se haya acogido al Principio de Oportunidad o Acuerdo Reparatorio, el monto mínimo indemnizatorio que fije el Fiscal se duplicará, como una medida para disuadir en la ciudadanía la conducción en estado de ebriedad.

Que, en ese sentido, es necesario **modificar** el artículo 6° del artículo 12°, artículo 22° y Tercera Disposición Final del referido Reglamento, en el caso de la conducción en estado de ebriedad, la dependencia a donde remitirán los **casos** y otros, así como el cambio de la denominación de Distrito Judicial por Distrito Fiscal, de acuerdo a la Resolución de Fiscalía de la Nación N° 1177-2013-MP-FN, y la denominación de Fiscal Superior Decano por Presidente de la Junta de Fiscales Superiores.

Regístrese, publíquese y cípiase.

ANA CASTILLO ARANBÁEZ

Con los Votos de la Gerencia General, Gerencia Central de Finanzas, Gerencia Central de Gestión y Presupuesto y Gerencia de Asesoría Jurídica.

En uso de las facultades establecidas en el artículo 64° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo N° 052.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Incorporar en el "Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad" aprobado por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1470-2005-MP-FN.

TÍTULO I
(Anexo al Código Penal)

NORMAS LEGALES 502073

MP-FN, el Anexo 01 "TABLA DE REFERENCIAS PARA LA REPARACIÓN CIVIL POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBriedAD"

Artículo Segundo.- Modificar el artículo 6° del artículo 12° y el artículo 22° y la Tercera Disposición Final del "Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad" aprobado por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1470-2005-MP-FN, las mismas que quedarán redactados de la siguiente manera:

Artículo 12°.- La Audiencia Única de Conciliación deberá llevarse a cabo bajo el siguiente procedimiento:

6. En el caso que las partes acuerden la aplicación del Principio de Oportunidad pero no concuerden cualquier punto relacionado a la reparación, el Fiscal Provincial en ese momento **debe** emitir la resolución de **CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBriedAD**, además de lo previsto en los artículos 48° y 49° del Código Penal, en lo que corresponda, deberá tener en cuenta la TABLA DE REFERENCIAS PARA LA REPARACIÓN CIVIL POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBriedAD, prevista en el Anexo 01 del presente Reglamento.

El uno de las partes no estuviere de acuerdo con el monto de la reparación civil o con uno de sus extremos en este acto, podrá interponer Recurso de Apelación contra el extremo que estuviere en desacuerdo, señalándose en este caso, dejar los autos a la Fiscalía Superior Penal de Turno para su resolución final.

Artículo 22°.- Los Fiscales Provinciales de Lima, remitirán para su custodia en forma semanal, los **Casos**, **Casos** emitidos por las consignaciones a la Gerencia de Tesorería de la Gerencia Central de Finanzas del Ministerio Público.

En el caso de los demás Distritos Fiscales, los **Casos** serán remitidos, en el mismo plazo, al Administrador o Gerente Administrativo, según sea el caso, debiendo éste remitirlos a la Gerencia de Tesorería de la Gerencia Central de Finanzas del Ministerio Público.

Tercera Disposición Final.- De ser necesario, para la aplicación del presente Reglamento, los Fiscales Provinciales podrán solicitar la Consulta respectiva al Presidente de la Junta de Fiscales Superiores, quien las atenderá. La Junta de Fiscales Superiores procurará establecer un criterio uniforme respecto de la aplicación del presente Reglamento en las oportunidades que se presente. De igual manera procederá la Junta de Fiscales Superiores.

Artículo Tercero.- Disponer que la Gerencia Central de Tecnologías de la Información publique el presente resolución a través de los medios informáticos correspondientes.

Regístrese y comuníquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BORDALES
Fiscal de la Nación

ANEXO 1

TABLA DE REFERENCIAS PARA LA REPARACIÓN CIVIL

POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBriedAD

* Cuando el Imputado se hubiera acogido al Principio de Oportunidad o Acuerdo Reparatorio en anterior ocasión, o cuando haya estado prestando servicios de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general y hubiera más de 0.25 g/L de alcohol en la sangre, el monto mínimo indemnizatorio, será duplicado.

Grado de Intoxicación	Alcohol en la Sangre (g/L)	Alcohol en la Sangre (g/L)	Alcohol en la Sangre (g/L)
Subclínico	0.05 a 0.09	0.05 a 0.09	0.05 a 0.09
Eufórico	0.10 a 0.14	0.10 a 0.14	0.10 a 0.14
Ebriedad Absoluta	0.15 a 0.19	0.15 a 0.19	0.15 a 0.19
Grave alteración de la conciencia	0.20 a 0.24	0.20 a 0.24	0.20 a 0.24
Coma	0.25 a 0.29	0.25 a 0.29	0.25 a 0.29

Autorizan viaje del Superintendente de la SBS a Malawi y los EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN INB N° 8178-2013

Lima, 27 de agosto de 2013

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

VISTOS:

La invitación cursada por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI), por sus siglas en inglés) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), con el fin de participar en el 2013 AFI Global Rally, evento organizado por la citada institución en forma conjunta con el Bank Negara Malaysia (BNM), el cual se llevará a cabo del 19 al 12 de septiembre de 2013 en la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia.

La invitación cursada por la Asociación de Superintendentes de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (ASBSA) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), con el fin de participar en el II Dialogo Sector Público - Sector Privado denominado "Red de Regulación de Instituciones Financieras", evento que se llevará a cabo los días 18 y 19 de septiembre de 2013, en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América.

En uso de las facultades establecidas en el artículo 64º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo N° 052:

Artículo Primero.- Incorporar en el "Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad" aprobada por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1470-2005-

NORMAS LEGALES

502073

Artículo Segundo.- Modifi- car el numeral 6º del artículo 12º, el artículo 22º y la Tercera Disposición Final del "Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad" aprobada por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1470-2005-MP-FN, los mismos que quedarán redactados de la siguiente manera:

6. En el caso que las partes aceptaran la aplicación del Principio de Oportunidad pero no acordaran cualquier punto relacionado a la reparación, el Fiscal Provincial en ese momento **deberá** ~~deberá~~ En los casos de conducción en estado de ebriedad, además de lo previsto en ~~los~~ **los** ~~artículos~~ **artículos** 45º y 46º del Código Penal, en lo que corresponda, deberá tener en cuenta la TABLA DE REFERENCIAS PARA LA REPARACIÓN CIVIL POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, prevista en el Anexo 01 del presente Reglamento.

^aArtículo 22º.- Las Fiscalías Provinciales de Lima, remitirán para su custodia en forma semanal, los Cédulados emitidos por las consignaciones a la Gerencia de Tesorería de la Gerencia Central de Finanzas del Ministerio Público.

En el caso de los demás Distritos Fiscales, los **Cedif** cados serán remitidos, en el mismo plazo, al Administrador o Gerente Administrativo, según sea el caso; debiendo éste remitirlos a la Gerencia de Tesorería de la Gerencia Central de Finanzas del Ministerio Público.

"Tercera Disposición Final.- De ser necesario, para la aplicación del presente Reglamento, los Fiscales Provinciales podrán solicitar la Consulta respectiva al Presidente de la Junta de Fiscales Superiores, quien las absolverá. La Junta de Fiscales Superiores procurará establecer un criterio uniforme respecto de la aplicación del presente Reglamento en las oportunidades que se presente. De igual manera procederá la Junta de Fiscales Municipales."

Artículo Tercero.- Disponer que la **GA**, una Central de Tecnologías de la Información publique la presente resolución a través de los medios informáticos correspondientes.

Regístrese y comuníquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

ANEXO 1

TABLA DE REFERENCIAS PARA LA REPARACION CIVIL

* Cuando el Imputado se hubiera acordado al Principio de

Cuando el impuesto se hubiera abrogado al principio de			
El impuesto de sucesiones			

Participación voluntaria	VENCIDO	VENCIDO
<p>Oportunidad o Acuerdo Repetitivo en anterior ocasión; o cuando haya estado prestando servicios de transporte público de pasajeros, mercancías o carga de 0.25 gal de alcohol en la sangre el monto mínimo indemnizatorio, será duplicado.</p>	<p>multiplicado por 2 si fueran más de 2, (incluye QUINCE)</p>	<p>multiplicado de 3 a más, (no incluye QUINCE)</p>

1er PERÍODO de Alcoholémia: eubófico	De 0,05 a 0,09 g/l (Ley Nº 29039)	-	-
2do PERÍODO de Alcoholémia: ebriedad	Más de 0,09 a 1,0 g/l más de 1,0 a 1,5 g/l	20% UIT a 50% UIT	10% UIT a 1 UIT
3er PERÍODO de Alcoholémia: ebriedad absoluta	Más de 1,5 a 2,0 g/l más de 2,0 a 2,5 g/l	10% UIT a 1 UIT	20% UIT a 1,5 UIT
4to PERÍODO de Alcoholémia: grave alteración de la conciencia	Más de 2,5 a 3,0 g/l más de 3,0 a 2,5 g/l	20% UIT a 1 UIT	20% UIT a 2 UIT
5to PERÍODO de Alcoholémia: Coma	Más de 3,5 g/l	20% UIT a 1 UIT	40% UIT a 2 UIT

345035

Autorizan viaje del Superintendente de la SBS a Malasia y los EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN 8B3 N° 6178-2013

Lima, 27 de agosto de 2013

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

VIETAG:

La invitación cursada por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI, por sus siglas en inglés) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBEP), con el fin de participar en el 2013 AFI Global Policy Forum, evento organizado por la citada institución en forma conjunta con el Bank Negara Malaysia (BNM), el cual se llevará a cabo del 09 al 12 de septiembre de 2013 en la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia.

La invitación cursada por la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBSP), con el fin de participar en el X Diálogo Sector Público - Sector Privado denominado "Red de Regulación de Instituciones Financieras", evento que se llevará a cabo los días 18 y 19 de septiembre de 2013, en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Que, el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, en su calidad de Miembro del Directorio de AFI, ha sido invitado a participar en el indicado foro, en el cual se revisarán y discutirán aspectos vinculados a la interrelación entre inclusión ~~financiera~~ **financiera**, estabilidad e integridad, así como protección del consumidor. Asimismo, se enfatizará en la importancia que cobran estos temas para alcanzar el desarrollo económico inclusivo y la reducción de la pobreza, al tiempo de promover el debate sobre oportunidades y retos en la optimización de normas y políticas que promuevan el desarrollo de las mismas;

Que, en el marco del referido fórum, el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ha sido invitado a participar en el **AFI Steering Committee Meeting**, así como en el **Leaders' Roundtable on AFI's engagement with the Standard Setting Bodies**, reunión cerrada de alto nivel que ofrece la oportunidad de compartir puntos de vista sobre cuestiones de política de gran importancia, a líderes de instituciones que están impulsando la implementación de políticas innovadoras para la inclusión financiera;

Que, la invitación cursada por ABBA, en su calidad de Presidente Pro-Tempore, Director de la Región Andina y Presidente del Comité Técnico de la Junta Directiva de la